

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL PERÚ**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**



**“Piensa en tu futuro. No al comunismo”: Amenaza existencial como principal factor detrás de la evolución del discurso de exponentes de la derecha peruana durante las Elecciones Generales de 2021**

Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencia Política y Gobierno presentado por:

Pinares Gutiérrez, Frank

Asesor:

Tanaka Gondo, Ricardo Martín


Lima, 2025

## Informe de Similitud

Yo, Tanaka Gondo, Ricardo Martin, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis/el trabajo de investigación "Piensa en tu futuro. No al comunismo": Amenaza existencial como principal factor detrás de la evolución del discurso de exponentes de la derecha peruana durante las Elecciones Generales de 2021 del/de la autor (a)/ de los(as) autores(as) Pinares Gutierrez, Frank de constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 13%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 15/12/25.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 16 de diciembre del 2025

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: <u>Tanaka Gondo, Ricardo Martin</u>	
DNI: 06408442	Firma 
ORCID: 0000-0001-6640-1518	

*A mi madre, por estar siempre a mi lado, en las buenas y las malas.*

*A mi padre, por todo su apoyo y comprensión a lo largo de estos años.*

*En memoria de mi tío Edward y mi abuelo Juvenal, que les hubiera gustado leer este trabajo.*

*A toda mi familia, por seguir creyendo en mí.*

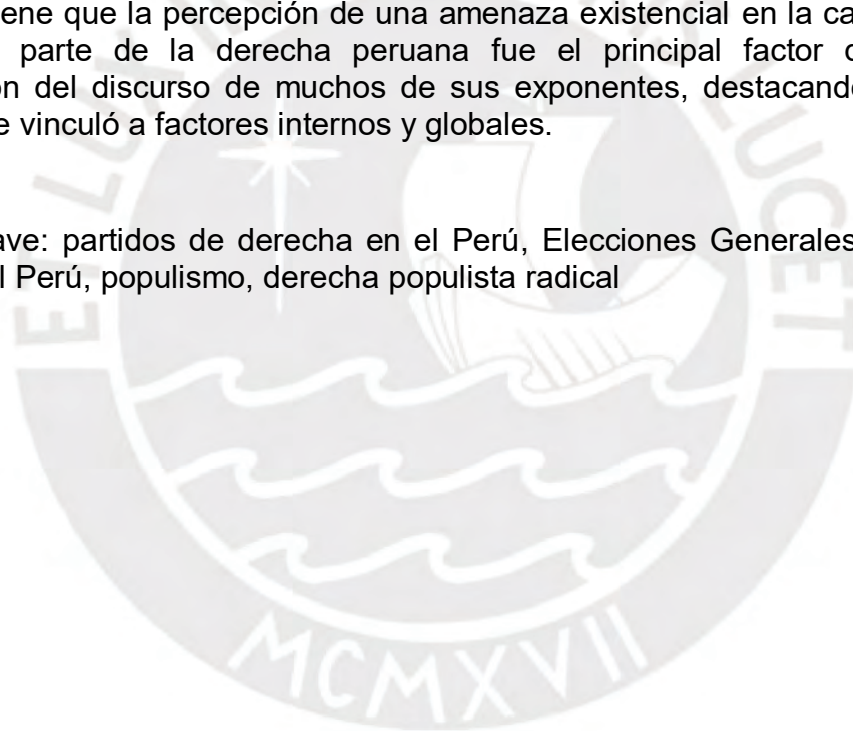
*A un mejor futuro.*



## Resumen

El presente trabajo examina los factores detrás de la evolución del discurso de la derecha peruana en el contexto de los principales eventos políticos y sociales desde el inicio de la campaña electoral para las Elecciones Generales del 2021 y culminando con la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones. De esta forma, la investigación aborda estos comicios como un punto de inflexión, destacando el impacto de la pandemia de COVID-19, la consecuente crisis económica y las políticas sanitarias en el desarrollo de las elecciones. Estas circunstancias, junto con la polarización política y la fragmentación de la oferta electoral, revelaron una profundización de la crisis de representación política en el país. Este contexto propició el surgimiento de candidatos de derecha con un discurso más duro, como Rafael López Aliaga, que representaban una transición hacia posturas más conservadoras y un discurso más anti establishment que no eran tan comunes en la política peruana previamente, inspiradas por figuras populistas globales como Donald Trump y Jair Bolsonaro; pero también habría favorecido la radicalización del discurso de actores políticos de derecha que ya tenían amplia presencia en el entorno político peruano, como Keiko Fujimori. Finalmente, el presente trabajo sostiene que la percepción de una amenaza existencial en la candidatura de Castillo por parte de la derecha peruana fue el principal factor detrás de la radicalización del discurso de muchos de sus exponentes, destacando cómo este fenómeno se vinculó a factores internos y globales.

Palabras clave: partidos de derecha en el Perú, Elecciones Generales 2021, crisis política en el Perú, populismo, derecha populista radical



## Índice de contenido

Introducción .....	1
1. Estado de la Cuestión .....	5
1.1. Antecedentes históricos y políticos de la derecha peruana.....	5
1.2. Discurso político en el Perú postransición y quiebre de la continuidad .....	6
1.3. Marco conceptual y revisión de literatura sobre derecha populista radical ..	8
1.3.1. Dicotomía izquierda–derecha y definiciones de la derecha.....	8
1.3.2. Conceptualización de la derecha populista radical .....	10
1.3.3. Contexto histórico y situación actual de la derecha populista radical .....	13
2. Metodología .....	17
2.1. Selección y definición del caso.....	17
2.2. Posibles explicaciones del fenómeno de estudio .....	18
2.3. Recopilación de información .....	20
3. Reconstrucción de hechos y análisis documental.....	23
3.1. Noviembre de 2020: Vacancia Presidencial, Protestas y Represión .....	23
3.2. Noviembre de 2020 a Febrero de 2021: Transición, Crisis y Precampaña Electoral .....	27
3.3. Marzo a Abril de 2021: Campaña electoral en marcha y primera vuelta ....	36
3.4. Abril a Junio de 2021: Alianzas y polarización en la segunda vuelta .....	48
3.5. Junio a Julio de 2021: Acusaciones de fraude y la “tercera vuelta” .....	73
Conclusiones .....	95
Referencias bibliográficas.....	100
Anexos.....	102
Anexo 1: Entrevista a José Cueto .....	102
Anexo 2: Entrevista a José Williams .....	106
Anexo 3: Entrevista a Patricia Chirinos .....	112

## Introducción

Debe considerarse que los momentos electorales son coyunturas políticas sumamente particulares en las que la competencia por el poder empuja a los actores a desplegar distintas estrategias y enfrentar situaciones imprevisibles, y es por ello que si bien estos procesos pueden desarrollarse dentro de las reglas de juego establecidas, también pueden sobrepasar estos límites y generar una situación en la que se ponen en juego intereses y posiciones que afectan a la lógica fundamental del poder establecido (Pajuelo 2021). En el caso peruano, las Elecciones Generales de 2021 y sus resultados fueron acontecimientos sumamente controvertidos que se sumaron a las otras crisis concurrentes que experimentaba el país, y aunque han transcurrido casi dos años desde este proceso electoral se pueden sentir hasta ahora los efectos de la polarización e incertidumbre que produjo entre amplios sectores de la sociedad peruana, incluyendo a la clase política, el empresariado, los medios de comunicación, la sociedad civil, etc.

Sin embargo, algo sobre lo que sí hay acuerdo es que estos comicios no se llevaron a cabo en circunstancias normales, ya que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y el inicio del proceso de vacunación, el estancamiento y deterioro a nivel macroeconómico y un gobierno de transición como resultado final de la crisis política del último quinquenio inevitablemente influyeron en el desarrollo de las elecciones. Asimismo, este proceso electoral coincidió con las celebraciones del Bicentenario por los 200 años de independencia republicana, a la vez que se registraban dos décadas de procesos electorales ininterrumpidos, un hito simbólico considerando la fragilidad de la democracia peruana y sus instituciones (Gil, 2022, pp. 7). El inicio de 2021 también representó una recuperación respecto a la crisis sanitaria y socioeconómica que experimentó el país en 2020, con un avance relativamente exitoso en el proceso de vacunación y una recuperación económica respecto al año anterior (Barrenechea y Encinas, 2022, pp. 409-416). En ese sentido, para muchos estos comicios representaban una oportunidad tanto simbólica como concreta para romper con la dinámica de los últimos cinco años y enrumbar el país por un nuevo curso.

A pesar de estas expectativas llenas de optimismo, el desarrollo de las referidas elecciones estuvo marcado por niveles de fragmentación y ausentismo electoral no vistos desde el retorno a la democracia en 2001. Expresión de ello fue la fragmentación de la oferta electoral, con un total de 18 candidaturas que participaron en la primera vuelta, mientras que aquellas dos que llegaron a la segunda vuelta ni siquiera acumulaban la tercera parte de los votos válidos. Asimismo, la participación electoral se redujo respecto a anteriores comicios, con un 30% de ausentismo en la primera vuelta y 25% en la segunda vuelta, y en particular la participación en Lima Metropolitana experimentó un notable descenso, con un 25% de ausentismo en la

primera vuelta y un 20% en la segunda, por encima de su promedio histórico (Sosa-Villagarcía, 2022, pp. 243). Estas cifras a su vez evidencian la crisis endémica de representación política que existe en el Perú.

También debe tenerse en cuenta que desde el registro del primer caso de COVID-19 en el Perú, y a pesar de las drásticas medidas del Estado peruano para contener la propagación de la pandemia, finalmente ocurrió lo que se buscaba evitar: el sistema de salud colapsó, y en cierto punto el Perú se posicionó entre los países con las tasas de mortalidad más altas del mundo, registrándose 106,7 muertes por 100,000 habitantes a finales de octubre del 2020. Por otra parte, a nivel económico las cifras eran igual de desalentadoras, con una recesión de 12.9% del PBI, el aumento del desempleo y el trabajo informal y un retroceso enorme respecto a los niveles de pobreza y pobreza extrema (Dargent y Rousseau, 2021, pp. 380-382). Así, las elecciones del bicentenario se darían en un contexto de múltiples crisis concurrentes, y su desarrollo se vería directamente afectado por las restricciones sanitarias impuestas para enfrentar el avance de una segunda ola particularmente agresiva de la pandemia.

Siguiendo esto, la pandemia hizo evidentes una serie de deficiencias estatales, particularmente respecto a los servicios públicos de salud, así como profundas desigualdades asociadas al modelo económico imperante, por lo cual se esperaba que en las próximas elecciones tuvieran mayor acogida discursos críticos de este modelo y a favor de una mayor inversión en servicios públicos y programas sociales. También se esperaba que las distintas derechas se vieran negativamente afectadas por su rol protagónico en la crisis política reciente, en particular aquella representada por Fuerza Popular y su líderesa Keiko Fujimori, siendo que el obstruccionismo de la bancada fujimorista durante el anterior quinquenio sumado a las acusaciones fiscales a los líderes del partido hacía prever un castigo por parte de la población en el plano electoral (Sosa-Villagarcía, 2022, pp. 240-243).

Sin embargo, y a pesar de que durante la campaña electoral varias candidaturas adoptaron discursos críticos respecto a las acciones requeridas para enfrentar el futuro próximo, para sorpresa de muchos no solo se observó una multiplicación de las opciones de derecha y el aumento de su caudal electoral, sino que también se observó un cambio significativo en sus discursos. Entre estas opciones emergentes destacaban ciertas candidaturas que buscaron representar a sectores de derecha anteriormente aliados al fujimorismo. Por un lado, Hernando de Soto, que había respaldado a Keiko Fujimori en campañas anteriores, se presentaba con Avanza País y su candidatura suponía una transición en la derecha de un discurso neoliberal a otro más liberal-libertario en lo económico. Por otro lado, Rafael López Aliaga se presentó por Renovación Popular y representaba un conservadurismo religioso que buscaba replicar el éxito electoral de líderes populistas de derecha a

nivel mundial, como Donald Trump en EE. UU. y Jair Bolsonaro en Brasil. Gil (2022) señala que, a diferencia de las propuestas refundacionales de la izquierda, el discurso de estos candidatos eximía de responsabilidad a la constitución y al régimen económico vigentes, y atribuía la responsabilidad de la crisis a los actores políticos que durante los últimos años habían estado involucrados en diferentes actos de corrupción, como el caso Lava Jato (pp. 7-21). Esta interpretación les permitía defender el status quo a la vez que desplegar una narrativa anti establishment.

Sin embargo, el inesperado ascenso de Pedro Castillo durante la recta final de la campaña de primera vuelta generó una gran preocupación entre estas candidaturas de derecha y otros sectores sociales. Así, cuando se anunciaron los resultados y se confirmó que el candidato de Perú Libre pasaría a la segunda vuelta al haber obtenido la mayor cantidad de votos, estos sectores vieron un riesgo real de reversión del modelo y restricción de libertades, lo que los llevó a articular un frente común detrás de la candidatura de Keiko Fujimori. Esto no solo supuso el respaldo explícito de López Aliaga y De Soto, que sumaron su apoyo al de diversos líderes políticos, medios de comunicación y empresarios, sino también un viraje discursivo que situó la “amenaza comunista” como eje movilizador (Gil, 2022, p. 7). Es decir, esta percepción de riesgo extremo permitió que se dejaran de lado las diferencias previas a nivel programático con el fin de defender el modelo y el orden institucional frente a lo que estos sectores consideraban una amenaza existencial.

A pesar de estos esfuerzos por evitar que ganara una opción que muchos consideraban sumamente peligrosa para el país, Pedro Castillo logró imponerse sobre su contendiente por un margen sumamente estrecho de votos, y en ese sentido Keiko Fujimori había sido derrotada en las urnas por tercera vez consecutiva. Si bien se podría pensar que una vez finalizadas las elecciones el país podría recuperar algo de calma, lo que ocurrió fue todo lo contrario: el conflicto se mantuvo a partir de la negativa de Fuerza Popular y sus aliados en reconocer los resultados, quienes a su vez desplegaron una estrategia jurídica y mediática alegando un presunto fraude por parte de Perú Libre y cuestionando la legitimidad de los organismos electorales, si bien no pudieron presentar evidencia alguna que acreditara estas irregularidades. Es en este momento donde se evidenció la actitud antidemocrática de muchos de estos actores, siendo que acogieron entre sus estrategias políticas amenazas abiertas al orden democrático liberal como es la deslegitimación de los resultados electorales (Sosa-Villagarcía, 2022, pp. 239-240).

En ese sentido, y considerando todo lo anteriormente expuesto, lo que se busca en el presente trabajo es brindar una explicación de por qué muchos actores políticos asociados a la derecha peruana adoptaron un discurso mucho más antiredistributivo en lo económico, conservador en términos sociales y menos comprometido con las reglas de juego democráticas durante la campaña electoral para las Elecciones

Generales de 2021, particularmente tras la segunda vuelta de estos comicios. De esta forma, se buscará identificar el principal factor detrás de los cambios en el discurso de estos actores durante el periodo de estudio. Entre las posibles explicaciones se encuentran fenómenos como la crisis política en el país, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el éxito de partidos y liderazgos de derecha populista radical a nivel internacional y regional, que habrían influido en el discurso y estrategias de los partidos y líderes de derecha peruanos. Sin embargo, se plantea que la percepción de una amenaza existencial entre la derecha peruana ante la candidatura de Pedro Castillo fue el principal elemento que impulsó este fenómeno, basada en el miedo a cambios drásticos en el modelo político y económico vigente en caso de que este candidato ganara las elecciones, lo cual habría llevado a estos actores a adoptar posiciones más extremas y a justificar acciones que incluso ponían en riesgo los principios democráticos del país.



## 1. Estado de la Cuestión

### 1.1. Antecedentes históricos y políticos de la derecha peruana

Se debe considerar que la derecha peruana ha experimentado diversas transformaciones significativas durante las últimas tres décadas, marcadas por una evolución constante en su discurso y composición interna. Por una parte, Vergara y Encinas mencionan que durante la década de 1980 los partidos políticos de derecha en el país carecían de cohesión ideológica, siendo que atraían a sectores sociales con visiones ideológicas muy diversas. Por ejemplo, cuando el gobierno de Fernando Belaúnde intentó introducir reformas neoliberales, se generaron fuertes resistencias no solo desde la izquierda, sino también dentro de su propio partido, Acción Popular (AP), y en su aliado, el Partido Popular Cristiano (PPC) (2019, pp. 227-228). Esto cambió cuando, a finales de los años 80, Mario Vargas Llosa saltó desde la literatura a la política para encabezar la oposición al intento de estatización de la banca del gobierno de Alan García, como líder del Movimiento Libertad. Ello lo catapultó a liderar el llamado Frente Democrático (FREDEMO), con el cual se estableció una relación inicial entre las ideas neoliberales y los partidos de derecha, quienes buscaban adaptar el neoliberalismo al Perú. Así, durante un breve período los viejos partidos de derecha formaron junto con Vargas Llosa un proyecto de derecha económicamente neoliberal y políticamente liberal.

Sin embargo, en 1990 el escritor resultó derrotado en las urnas por el arrollador e inesperado avance de Alberto Fujimori, y con su victoria electoral el panorama político peruano se transformó completamente, sobre todo después del autogolpe de 1992 y la instauración de un gobierno autoritario que combinaba políticas económicas neoliberales con un enfoque políticamente iliberal, dejando atrás el discurso de campaña con el cual había sido elegido. El éxito de su administración en estabilizar la economía peruana y sofocar la insurgencia terrorista le dio aún más legitimidad a esta nueva realidad política, y los partidos de derecha tradicionales eran incapaces de competir con la nueva derecha que representaba Fujimori. De esta manera, de las ruinas del sistema de partidos previo surgió una derecha societal fragmentada pero ideológicamente cohesiva: un “archipiélago conservador”, compuesto por partidos políticos tradicionales (*partidos-bancadas*), tecnócratas, burócratas, asociaciones empresariales, la Iglesia Católica y medios de comunicación, todos defendiendo el modelo económico neoliberal establecido en 1993 (Vergara y Encinas, 2019, pp. 229-237).

Por otra parte, Meléndez señala que aunque es cierto que la derecha peruana tiene su origen en las mencionadas reformas neoliberales implementadas por el gobierno de Fujimori en la década de 1990, tras la caída del régimen fujimorista en el 2000 esta comenzó a dividirse en dos vertientes: la populista-conservadora,

representada sobre todo por un fujimorismo en resurgimiento que era más afín al conservadurismo y de características populistas; y la tecnocrática-liberal, representada en 2016 por Pedro Pablo Kuczynski y su partido Peruanos por el Cambio, con fuertes vínculos empresariales y tecnocráticos que tendía a valores liberales (Meléndez, 2019, pp. 5-6). Estas divisiones fueron reforzadas por la importancia creciente de temas valóricos en la agenda política, y pese a los intentos por reconstituir una derecha tecnocrática-conservadora, no se ha logrado superar la división entre ambos sectores, marcada por una construcción de legitimidad social, preferencias de régimen y posiciones valóricas enfrentadas. A pesar de esto, debe considerarse que ambos sectores siguen defendiendo la continuidad del modelo económico vigente, lo que demuestra lo resiliente y estable que ha sido este a través de los años.

## 1.2. Discurso político en el Perú postransición y quiebre de la continuidad

Ahora bien, respecto a esta estabilidad, se tiene que en la literatura especializada se ha descrito al periodo posterior a la transición democrática del año 2000 en el Perú como un caso en el que se observan varias continuidades, en contraste con otros procesos de cambio en América Latina del mismo periodo caracterizados por la inestabilidad y el cambio. Sobre la estabilidad del modelo económico, se debe considerar que en la primera década del nuevo milenio el Perú experimentó un "milagro económico" caracterizado por un impresionante crecimiento en este ámbito, el cual sumado a un contexto internacional favorable lo posicionó como una de las economías más dinámicas en América Latina y el mundo. La aplicación de políticas de disciplina fiscal y prudencia monetaria bajo gobiernos consecutivos, a la vez que se negociaban Tratados de Libre Comercio con socios clave como EE.UU., la UE y China, no solo mejoraron el clima de inversiones, sino que también permitieron el "anclaje" del modelo en la economía nacional (Paredes, 2011, p. 9).

Siguiendo esta idea, Dargent y Muñoz señalan que aunque tras la caída del régimen fujimorista se buscó romper con la lógica del pasado reciente, a lo largo de este periodo ciertos patrones se mantuvieron constantes: los tres presidentes de la postransición fueron elegidos bajo plataformas de centro o centroizquierda pero gobernaron desde la derecha; todos estos gobiernos fracasaron en construir coaliciones políticas estables y mantener niveles de aprobación altos; y tampoco pudieron tomar medidas anticorrupción efectivas o se vieron involucrados ellos mismos en escándalos de corrupción (2016, pp. 146-147). Asimismo, Dargent y Rousseau mencionan que este periodo fue uno de significativas continuidades, como la mencionada permanencia del modelo económico, la debilidad de los partidos políticos, un Poder Ejecutivo que junto a sectores tecnocráticos mantenía cierto control

sobre el Congreso y la política pública, la ausencia de movimientos de protesta articulados, entre otros. Para estos autores esta debilidad de los actores políticos fue lo que permitió esta continuidad, ya que el Ejecutivo y actores empresariales favorecidos por el modelo tenían una mayor fortaleza relativa frente a la oposición en el Congreso y partidos críticos del mismo (2021: pp. 377-378).

Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, estos gobiernos sucesivos no solo no abandonaron las reformas neoliberales, sino que las profundizaron. Si bien esto contribuyó a un periodo de crecimiento económico sostenido, una reducción significativa de la pobreza y en general una mejora en el bienestar de la población, el país seguía enfrentando desafíos significativos en términos de desigualdad social y de debilidad institucional, siendo que no todos se habían beneficiado de igual forma con los logros macroeconómicos señalados, a la vez que el debilitamiento de las instituciones democráticas desde los 90s y la crisis de los partidos tradicionales promovieron un escenario político dominado por el pragmatismo y el caudillismo político (Paredes, 2011, pp. 11-16).

Sin embargo, según Dargent y Muñoz (2016, p. 145), esta continuidad empezaría a quebrarse tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2016, en la cual Kuczynski ganó la presidencia a Keiko Fujimori por un margen sumamente ajustado de 0.24% de los votos, aun cuando esta candidata había ganado claramente la primera vuelta y su partido Fuerza Popular había conseguido una mayoría absoluta en el Congreso. Según estos autores, una serie de errores desde el fujimorismo durante la segunda vuelta y el activamiento del antifujimorismo permitió que PPK finalmente triunfara por el margen mínimo señalado. Sin embargo, la demora de Fujimori en reconocer los resultados de la elección ya presagiaba el inicio de una dinámica que se mantendría hasta la actualidad, siendo que durante el resto de la presidencia de Kuczynski el Congreso controlado por la mayoría fujimorista realizó constantes ataques al Ejecutivo a través de recursos como las interpelaciones, las censuras a ministros y amenazas de vacancia por incapacidad moral permanente.

Esta hostilidad entre un Legislativo dominado por un fujimorismo radicalizado por su derrota y la necesidad de detener las investigaciones en su contra, y un Ejecutivo minoritario que ni siquiera negociando o formando alianzas podía reducir estas amenazas a su estabilidad, tuvo su punto más álgido en marzo de 2018 con la renuncia de Kuczynski a la presidencia, cuando parecía inminente que el Congreso aprobaría un segundo intento de vacancia presidencial en su contra. Paradójicamente, este conflicto se produjo entre dos sectores de derecha que no eran ideológicamente disímiles, pero finalmente debilitó al Ejecutivo y empoderó al Congreso en lugar de fortalecer el status quo. Esta dinámica de enfrentamiento entre los dos poderes se

mantendría en el subsecuente gobierno de Martin Vizcarra, quien a pesar de gozar de mayor apoyo de la ciudadanía por su agenda anticorrupción e incluso disolver constitucionalmente el Congreso de mayoría fujimorista, también fue vacado por incapacidad moral permanente por el nuevo Congreso elegido a inicios de 2020.

Considerando esto, y a la vez tomando en cuenta los hechos políticos recientes mencionados anteriormente, se podría entender esta permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, junto con la crisis política e institucional resultante, como una expresión de una transformación de las actitudes de la derecha en el Perú, tanto desde los conservadores-populistas como de los tecnocrático-liberales. Aquí se considera que la postura adoptada por los partidos de derecha se habría vuelto cada vez más intransigente y autoritaria, con el objetivo de desestabilizar al gobierno, deslegitimar a sus opositores y proteger sus intereses sin importar las consecuencias para la gobernabilidad del país. Esto se puede ver en acciones como el uso excesivo de las facultades constitucionales para censurar ministros y destituir presidentes a través de la vacancia por incapacidad moral permanente, o llamar a la intervención de las FF.AA. para desconocer resultados electorales. Es decir, aquí ya se ve un menor compromiso con las reglas y principios democrático liberales por parte de varios actores en esta parte del espectro político.

### 1.3. Marco conceptual y revisión de literatura sobre derecha populista radical

#### 1.3.1. Dicotomía izquierda–derecha y definiciones de la derecha

Debe tenerse presente que todo esto no es un fenómeno nuevo en el Perú, y mucho menos se encuentra aislado de otros acontecimientos a nivel regional e internacional. En ese sentido, se considera relevante mencionar brevemente la discusión respecto a la derecha política en la literatura, y en particular respecto al crecimiento de la llamada “derecha populista radical” tanto a nivel internacional como en la región latinoamericana. Por una parte, Norberto Bobbio señala que a pesar de los cada vez más frecuentes argumentos en contra de su uso, esta dicotomía sigue siendo sumamente importante en la conversación política, siendo que no ha perdido su utilidad para identificar las tendencias generales y los posicionamientos de las personas en el espectro político. Así, él observaba que los debates políticos recientes seguían centrándose en la dirección y el futuro de la izquierda y la derecha, y aunque estos sectores se reevalúan constantemente, adaptándose y formando nuevas ideologías, las etiquetas de izquierda y derecha siguen siendo ampliamente utilizadas para clasificar y entender a estos diversos actores (1996, pp. 29-30).

Esta dicotomía ha prevalecido en gran medida a partir de su capacidad de encapsular la principal antítesis en la política, y aunque sus fuerzas pueden fluctuar dependiendo del contexto político y los conflictos predominantes, su existencia se basa en la oposición mutua. Sin embargo, es de particular relevancia para este trabajo

lo que este autor menciona sobre en qué se basa esta distinción, en la medida que señala que el criterio más utilizado para distinguir entre izquierda y derecha radica en su actitud hacia el principio de igualdad: mientras que la derecha considera que la mayoría de las desigualdades son naturales y que es difícil o contraproducente erradicarlas, la izquierda las ve como construidas socialmente y por lo tanto posibles de corregir. En ese sentido, la diferencia entre lo que se ha llamado “izquierda” y “derecha” se reduce en última instancia a las distintas percepciones de lo que hace a los seres humanos iguales o desiguales, e incluso la aparición de posiciones que buscan “trascender” la dicotomía, combinando elementos de ambos lados del espectro, no elimina esta diferencia fundamental que las separa. Así, mientras la izquierda considera que los seres humanos son más iguales que desiguales, la derecha considera que son más desiguales que iguales (Bobbio, 1996, pp. 66-67).

Por otra parte, Luna y Rovira Kaltwasser concuerdan con lo señalado por Bobbio en relación a que “derecha” e “izquierda” son términos antitéticos y mutuamente excluyentes, así como la idea de que la distinción derecha-izquierda se basa en la concepción de igualdad y constituye un clivaje permanente en las democracias. A partir de esto, los autores definen a la derecha como una posición política que ve las desigualdades entre las personas como naturales y fuera de la competencia del Estado, a diferencia de la izquierda que considera a las desigualdades como artificiales y, por lo tanto, corregibles mediante la acción del Estado (2014, p. 4). Debido a su carácter abstracto, esta definición podría aplicarse en diferentes contextos nacionales e históricos sin incurrir en un “estiramiento conceptual”, aunque de todas formas podría necesitar complementarse con otros elementos para explicar situaciones específicas.

Sin embargo, autores como Mayka y Smith consideran que si bien esta definición es capaz de describir con precisión las posturas de la derecha en varias cuestiones económicas y sociales, podría no ser adecuada para cuestiones como los derechos LGBT y el aborto, en las que los derechistas contemporáneos pueden defender un rol más activo del Estado en imponer la desigualdad. Estas limitaciones se hacen particularmente evidentes al analizar los movimientos de base de derecha, quienes buscan activamente contrarrestar los avances de grupos marginados al considerarlos como amenazas al orden social establecido. Por ello, estos autores definen a la derecha como un conjunto diverso de individuos y organizaciones que pretenden defender de forma proactiva las jerarquías sociales que se perciben como tradicionales o naturales, como el patriarcado y la subordinación de los grupos marginados (2021, p. 3). Así, esta definición de la derecha destaca su potencial para impulsar una agenda transformadora que afiance las desigualdades, incluso apropiándose del lenguaje de los derechos para justificar sus acciones y la

presentación de sus argumentos en términos científicos, buscando así legitimar su oposición a los avances sociales.

Asimismo, en lugar de caracterizar a la derecha solo por sus preferencias programáticas, Rodrigo Gil (2022) la define por su anclaje social y su función: una amplia red de actores y organizaciones que busca mantener las jerarquías y valores percibidos como naturales, así como proteger los pilares del modelo capitalista, como la propiedad privada y el individualismo. Para ello cuenta con el apoyo de actores políticos y económicos, líderes religiosos conservadores, think tanks, universidades, mandos militares y medios de comunicación que le proporcionan recursos, legitimidad y voceros con los que oponerse a cualquier cambio que pueda alterar las configuraciones de poder existentes. Bajo esta lógica, la derecha aparece más como un entramado capaz de reagruparse cuando considera amenazadas sus posiciones, lo que ayudaría a explicar su tendencia a unirse en coyunturas críticas.

### 1.3.2. Conceptualización de la derecha populista radical

Por su parte, en su estudio sobre los partidos de derecha populista radical en Europa, Cas Mudde propone una definición maximalista que busca encontrar la mayor cantidad de elementos comunes entre estas organizaciones políticas. Así, considera que esta familia de partidos se caracteriza por la convergencia de tres rasgos ideológicos centrales que, en conjunto, facilitan marcos de supervivencia frente a un “otro” percibido como peligroso: nativismo, autoritarismo y populismo. En ese sentido, Mudde (2007) señala que el nativismo aporta una lógica de supervivencia colectiva al asumir que el Estado tiene que ser exclusivamente para el grupo “nativo” y que lo no nativo constituye un peligro para el cuerpo nacional, lo cual promueve marcos de “defensa” ante supuestas infiltraciones que ponen en riesgo la homogeneidad nacional. Este elemento se complementa con el autoritarismo, entendido como la creencia en un orden social estrictamente organizado que legitima sanciones severas ante cualquier infracción y habilita repertorios coercitivos contra aquellos actores considerados desestabilizadores. Finalmente, el populismo divide la sociedad entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta”, por lo que cualquier restricción institucional se percibe como un obstáculo a la voluntad general del pueblo.

Años después, Mudde rectificaría su propia lectura de comienzos de la década de 2010, cuando consideraba a estos partidos una molestia relativamente menor para las democracias liberales de Europa occidental, y reconocería que no había previsto que la desmarginalización y normalización de la derecha populista radical se volvería un rasgo del sistema político contemporáneo a partir de una combinación del crecimiento de su apoyo electoral, una mayor presencia mediática y la cooperación con fuerzas políticas tradicionales (Mudde, 2013, p. 14; Mudde, 2019, p. 104). Esta normalización se observa también en el hecho de que tres de los cinco países más

poblados del mundo (Brasil, India y Estados Unidos) estaban gobernados en 2019 por líderes adscritos a este sector, lo cual implica que sus ideas y discursos identitarios y securitarios dejaron de ser periféricos para volverse centrales en el debate político ordinario, alterando las dinámicas electorales tradicionales y el equilibrio de poder en estos sistemas.

Siguiendo lo mencionado por Mudde (2019), la adopción de políticas propias de la derecha populista radical por parte de partidos convencionales es un indicador de su influencia creciente. Este observa que partidos tradicionales en países sin una fuerte presencia ultraderechista han incorporado discursos nativistas, autoritarios y populistas. Asimismo, la mayor presencia de la ultraderecha en los medios de comunicación también ha contribuido a su normalización y a la difusión de sus ideas. El autor menciona a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Nigel Farage como políticos de esta tendencia que recibieron amplia cobertura incluso cuando ocupaban posiciones marginales, lo cual amplificó sus mensajes e influyó en la percepción pública, legitimando sus discursos en el debate público. Esto muestra que la influencia de estas nuevas derechas en los sistemas políticos puede ser significativa incluso sin alcanzar el poder, considerando su capacidad para establecer temas en la agenda pública y acelerar procesos de deterioro democrático.

Ahora bien, en relación al concepto de populismo también ha habido mucha discusión a la vez que desacuerdo en la literatura, y en ese sentido no hay un consenso respecto a su definición, sino que existen varias definiciones que hacen énfasis en diferentes atributos del fenómeno. Es decir, diversos autores han caracterizado al populismo de maneras muy diferentes, ya sea en términos políticos, sociales, económicos y/o discursivos, y también se ha descrito a una amplia variedad de gobiernos, partidos políticos, movimientos y políticas como populistas (Weyland, 2001: p. 1). Sin embargo, y a pesar de sus discrepancias, estas definiciones concuerdan en ciertas características fundamentales de este tipo de liderazgo: una relación directa y sin intermediarios entre el líder carismático y sus seguidores, un discurso que divide a la sociedad en campos homogéneos y antagónicos (“pueblo” contra “élites corruptas”), señalarse como representantes de los sectores tradicionalmente excluidos de la comunidad política; aplicar políticas redistributivas vinculadas a intercambios clientelares y presentarse como la solución a los problemas que enfrenta el país.

En las definiciones de populismo mencionadas se suele asociar este fenómeno a un tipo de liderazgo que se ejerce mediante el discurso. En este caso, el discurso populista articula, transmite e incluso crea demandas al identificar posturas negadas por el orden social vigente y las articula entre sí sin que pierdan sus particularidades

para construir un sujeto político particular: el “pueblo” (Retamozo y Morris, 2014, pp. 17-19). En ese sentido, este tipo de liderazgos tiende a movilizar sectores previamente excluidos o marginados y permite que participen en un plano de mayor o menor igualdad en el control y discusión de la política del gobierno, es decir, que tengan voz en la esfera de deliberación pública. Esto considerando que posiblemente sus demandas no hubieran sido atendidas o seguirían siendo negadas si se hubieran canalizado por las instituciones democráticas liberales, en particular si se encuentran en sociedades marcadas por la desigualdad económica.

Sin embargo, no puede negarse que este fenómeno tiene a su vez un alto potencial autoritario, y como se ha mencionado anteriormente este tipo de liderazgos ha tendido a realizar múltiples ataques hacia las instituciones democráticas y contra sus opositores, así como a una personalización de la política e intentos por cambiar las reglas de juego para perpetuarse en el poder. Esto inevitablemente afecta el carácter pluralista de la democracia, al subordinar las instituciones del Estado a las decisiones del líder, polarizar el discurso contra aquellos que tienen opiniones distintas y generar inclusión a través de prácticas que más que empoderar a los ciudadanos los subordina, a la vez que se excluye a aquellos que no forman parte del sujeto “pueblo” construido en el discurso (Freidenberg, 2011, p. 10).

Siguiendo esto, no faltan argumentos para considerar al populismo como problemático para la democracia cuando ciertos atributos suyos coinciden con los de proyectos políticos autoritarios. En este trabajo se utiliza la definición de proyecto político de Dagnino, Olvera y Panfichi (2006, pp. 42-49), es decir, un “conjunto de creencias, intereses y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad [...] que orientan la acción política”. Estos autores sostienen que en los proyectos autoritarios se difumina el límite entre la sociedad y el Estado, ya que el partido gobernante asume simultáneamente la representación de todos los sectores sociales y el ejercicio del gobierno. Bajo esta lógica, la protesta se considera una infracción del principio de autoridad, lo que justifica su represión. Así, cuando actores políticos con este tipo de discursos presentan al adversario como un peligro para la supervivencia del orden social, estos tienden a justificar la limitación del pluralismo y la descalificación de la protesta en nombre de la defensa del cuerpo político.

Esto es particularmente relevante en el contexto latinoamericano, siendo que en la región estos proyectos autoritarios permanecerían en estado de latencia, y por ello tendrían una mayor facilidad para convertirse en actores principales si las condiciones políticas y sociales así lo permiten. En ese sentido, la mencionada decepción colectiva por el bajo rendimiento de las democracias latinoamericanas podría crear las condiciones para un mayor apoyo popular a una restitución autoritaria.

Esto se debería a que el autoritarismo político siempre ha tenido como correlato cultural al autoritarismo social, entendido como “una cultura que legitima las diferencias sociales, que internaliza los códigos que jerarquizan a clases y grupos y los organiza por pertenencias de clase, raza, género, región y país” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006, p. 48), fenómeno de larga presencia histórica que no habría variado sustantivamente en la ola democrática reciente.

### 1.3.3. Contexto histórico y situación actual de la derecha populista radical

Desde una perspectiva más histórica, debe considerarse que en las décadas posteriores al colapso del bloque soviético y el final de la Guerra Fría se observó un gran impulso a la tercera ola de democratización, siendo que en este periodo ya no existían modelos alternativos que pudieran competir efectivamente con el democrático y eran cada vez más los países que transitaban hacia regímenes democráticos liberales. Esto condujo a autores como Francis Fukuyama a pensar que esto significaba la victoria final del modelo democrático liberal en el mundo: el “fin de la historia”. Sin embargo, casi tres décadas después de estos anuncios optimistas, no se podría afirmar que actualmente la democracia liberal tenga una predominancia absoluta a nivel global.

Siguiendo esta idea, Philippe Schmitter, un autor que había hablado junto a Guillermo O'Donnell de las exitosas transiciones democráticas en América Latina, reconocería años después que la experiencia democrática durante estas décadas habría estado por debajo de las expectativas originales tanto de la ciudadanía como de los académicos. Este autor menciona cómo las transiciones democráticas resultaron ser mucho más fáciles de lograr de lo que se había anticipado, ya que estas fueron a su vez menos trascendentales de lo que se preveía (2009, pp. 119-121). Sin embargo, él también señalaba en su momento que la creciente desafección con la democracia no parecía ponerla en riesgo o hacer más probable una regresión autoritaria. De hecho, decía que se advertían pocas señales de un apoyo creciente a partidos o políticos con rasgos no democráticos.

Sin embargo, en años recientes se ha observado que esta tercera ola de democratización habría entrado en una fase de estancamiento desde mediados de los 2000s, e incluso un declive desde los 2010s. Es particularmente en esta última década donde se observa la emergencia de actores políticos con un menor respeto a las reglas y principios de la democracia liberal que buscan sintonizar con el descontento de la ciudadanía para llegar a ocupar cargos públicos. Así, la victoria electoral en 2016 de Donald Trump en EE.UU. es el caso paradigmático de un líder que legitima su forma de hacer política a través de un discurso populista a la vez que promueve valores autoritarios que amenazan las normas y valores de la democracia liberal (Norris e Inglehart, 2019, p. 2). Asimismo, a partir de este mismo año diversos partidos

políticos o movimientos europeos asociados a una derecha populista también comenzaron a tener éxitos electorales en sus respectivos países, en algunos casos llegando al gobierno como los partidos Ley y Justicia (Polonia) y Fidesz (Hungría), o consiguiendo representación parlamentaria considerable como el Frente Nacional (Francia), Lega Nord (Italia) o Alternativa por Alemania (Alemania). Esto da cuenta de cómo estos discursos comenzaron a encontrar cada vez mayor cabida incluso en las sociedades de las democracias consolidadas.

Respecto a esto, autores como Pablo Stefanoni (2021) señalan que en las últimas décadas la izquierda ha perdido gran parte de su capacidad histórica para representar la rebeldía, la desobediencia y la transgresión. Este desplazamiento ha permitido que la derecha, especialmente en su versión populista radical, ocupe ese espacio y se muestre cada vez más eficaz en cuestionar el "sistema", disputándole a la izquierda la capacidad de indignarse frente a la realidad y de proponer vías para transformarla, aunque desde perspectivas conservadoras o reaccionarias. Al criticar la llamada "dictadura de la corrección política" y el "marxismo cultural", estos actores se posicionan como defensores de la libertad de expresión y enemigos de una supuesta hegemonía progresista que controla los medios de comunicación, las universidades y las élites cosmopolitas. Además, la emergencia de movimientos en internet durante la segunda mitad de la anterior década como la alt-right ha permitido que los simpatizantes de estas nuevas derechas adopten nuevas tácticas basadas en el "troleo" y la provocación, utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales para difundir su mensaje y conectar con sectores desencantados, especialmente jóvenes, lo cual les ha otorgado una ventaja en las batallas culturales actuales (2021, pp. 49-68).

Asimismo, estas derechas radicales han sabido capitalizar el descontento social y la sensación de pérdida de identidad nacional frente a los procesos de globalización y multiculturalismo. Como sostiene Stefanoni, una lógica etnocivilizatoria de la ciudadanía alimenta narrativas conspirativas, en especial el llamado "gran reemplazo", que presentan la inmigración y la diversidad como parte de una sustitución demográfica de los europeos por parte de grupos "no blancos" y funcionan como desencadenantes emocionales que politizan los miedos identitarios (2021, pp. 33-34). Al enfatizar temas como la inmigración, la identidad nacional y el rechazo a las "élites globalistas", la derecha populista radical en espacios como Europa y EE. UU. conecta con sentimientos de inseguridad y pérdida entre amplios sectores de la población de estos países. Por otro lado, el uso estratégico de la provocación y la ruptura de tabúes les permite presentarse como los verdaderos disidentes frente a una izquierda que parece haber perdido su capacidad para imaginar futuros deseables y ofrecer una narrativa utópica que movilice a las masas. Como señala este autor, "la

izquierda se quedó sin imágenes de futuro para ofrecer, excepto cuando se lo piensa como distopía” (Stefanoni, 2021, p. 12).

Por otra parte, las relativamente nuevas democracias en América Latina no son una excepción a este fenómeno, siendo paradigmáticos en la región la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil y el creciente autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador. Estos serían ejemplos de gobiernos elegidos libremente dentro de regímenes democráticos que optan por degradar las instituciones democráticas de sus países desde adentro. Sin embargo, esto no implica acciones abiertamente antidemocráticas, como cancelar elecciones o encarcelar opositores, sino que ocurre de forma sutil al difuminarse la línea entre los intereses del Estado y los de estos líderes, los cuales dicen ser los mayores defensores de la democracia (Norris e Inglehart 2019: 6). Es por ello que estos últimos países son considerados por la base de datos V-Dem como en proceso de autocratización, junto a regímenes autoritarios del otro lado del espectro político como Venezuela y Nicaragua.

Siguiendo esta idea, en los reportes del Instituto V-Dem se muestra que el declive a nivel global de la democracia liberal continúa. Así, según el reporte sobre 2020 los regímenes autoritarios electorales y tradicionales eran los más comunes, teniendo al 68% de la población mundial, mientras que las democracias liberales se habían reducido considerablemente, acogiendo solo al 19% de la población (2021: 9). Asimismo, en el reporte sobre 2021 se señala que en un año el porcentaje de la población mundial que vive en democracias liberales se ha reducido al 13%, mientras que las autocracias electorales se han vuelto el tipo de régimen más común, siendo que el 44% de personas viven bajo esta forma de gobierno (2022: 14-18). Así, para los investigadores de esta institución estos datos reflejarían una acelerada “tercera ola de autocratización” que ya habría alcanzado a los regímenes políticos de 1/3 de la población mundial.

En este contexto de creciente autocratización a nivel global, la derecha populista radical en América Latina presenta características propias que la distinguen de sus contrapartes en Europa y Estados Unidos. Según Farid Kahhat, siguiendo la conceptualización de Mudde, si bien estos movimientos comparten un fundamento ideológico que combina el nativismo, el autoritarismo y el populismo, existen diferencias significativas. En ese sentido, el crecimiento electoral de esta derecha en la región no parece coincidir con flujos significativos de inmigrantes, a diferencia de lo observado en Europa, donde la inmigración ha sido un factor clave en el auge de la derecha radical. Por otra parte, el crecimiento de esta derecha en América Latina se produjo después del mayor auge electoral de la izquierda en la historia de la región,

lo que contrasta con Europa, donde el ascenso de la derecha radical coincidió con el declive de las socialdemocracias (2024, pp. 10-19).

Siguiendo esto, mientras que en Europa y EE.UU. algunas facciones de la derecha radical y de la izquierda radical pueden coincidir en ciertas agendas, como el antiglobalismo, en América Latina la derecha radical define a la izquierda en sus diversas formas como un enemigo existencial, sin espacio para alianzas tácticas o coincidencias ideológicas. Asimismo, en América Latina temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y el enfoque de género en la educación han generado fuertes resistencias por parte de estas nuevas derechas, convirtiéndose en una agenda política no negociable. Además, a diferencia de Europa, donde las guerras interestatales han sido más frecuentes, el contexto de violencia delincuencial y política es un factor distintivo de la región latinoamericana, lo que ha llevado a que la "mano dura" sea una metáfora recurrente en el discurso conservador (Kahhat, 2024, pp. 19-23).

A partir de la literatura mencionada se podría afirmar que un factor importante detrás de esta "tercera ola de autocratización" sería el auge de estos liderazgos populistas autoritarios a partir de una mayor aceptación de ese tipo de discursos en esas sociedades. Como señalan Norris e Inglehart, esta combinación entre populismo y autoritarismo genera un discurso que se nutre y a la vez promueve los miedos y ansiedades existentes en la sociedad: la retórica populista se usa para culpar a las élites políticas de los problemas percibidos, progresivamente minando la confianza en la democracia liberal y sus instituciones; mientras que los valores autoritarios se expresan en la división que hacen estos liderazgos entre un "nosotros" y los "otros" percibidos como amenazas a los valores y normas del propio grupo (2019: 7). En ese sentido, el éxito de estos populismos autoritarios depende en gran medida de crear una atmósfera de amenaza y ansiedad permanentes, y en ese sentido construir permanentemente al enemigo, ya sea interno o externo.

En relación a esto último, la construcción de un enemigo común es central en la narrativa de la derecha radical latinoamericana, a menudo referida como "marxismo cultural" (Kahhat, 2024). Esta ideología, según sus proponentes, unifica a diversos movimientos sociales como el feminismo, el movimiento LGTBI y grupos étnicos, y busca subvertir la cultura occidental y sus fundamentos mediante la promoción de agendas que desafían las normas sociales establecidas. Sin embargo, esta perspectiva ha sido objeto de múltiples críticas por simplificar y agrupar movimientos y teorías con amplias diferencias intelectuales y políticas. Asimismo, estas nuevas derechas latinoamericanas tienden a sobrestimar la cohesión de sus adversarios y subestimar las diferencias entre sus propios aliados, construyendo así una narrativa

de enfrentamiento existencial que simplifica la complejidad política para movilizar apoyos. Esta estrategia, sin embargo, pasa por alto la diversidad ideológica existente tanto en sus filas como entre sus opositores (Kahhat, 2024, pp. 10-14).

## 2. Metodología

### 2.1. Selección y definición del caso

Se debe mencionar que el presente trabajo originalmente tenía como tema de investigación a la radicalización de los partidos de derecha peruanos entre las elecciones generales de 2021 en el Perú y la caída del gobierno de Pedro Castillo en 2022. Aquí se entiende por radicalización a aquellos cambios en el discurso y la práctica política dentro de la derecha peruana durante este periodo, con la intensificación de sus ideas antiredistributivas en el ámbito económico, la adopción de discursos más conservadores en temas sociales y culturales (derechos humanos, diversidad sexual, etc), así como el uso más frecuente de estrategias políticas que no necesariamente son respetuosas de las reglas de juego democráticas. Se había optado por este tema debido a que los comicios del 2021 se habían desarrollado en un contexto de crisis múltiples: una alta polarización y fragmentación política, una profunda crisis institucional, una grave situación económica y social derivada de la pandemia del COVID-19, la aparición de opciones de derecha populista radical en el escenario político peruano y una fuerte confrontación entre Pedro Castillo como presidente electo y un Congreso dominado por un sector de la derecha peruana. A partir de ello, se consideraba que los referidos cambios en el discurso y la práctica de los partidos y líderes derechistas peruanos tendría su explicación en alguno de los componentes de esta crisis.

Sin embargo, a partir de los hallazgos durante el proceso de investigación, se optó por hacer cambios en el fenómeno y el periodo de estudio del tema previamente señalado. La principal razón por la que se decidió hacer esto es que, si bien es cierto que tras la proclamación de Castillo como presidente electo se vio una estrategia desde las bancadas de derecha en el Congreso que buscaba obtener su vacancia del cargo casi inmediatamente después de asumirlo, también se debe considerar que estas actitudes se vieron con mucha mayor fuerza durante la campaña electoral, especialmente en el contexto de la campaña para la segunda vuelta del 6 de junio y las semanas previas a la proclamación de los resultados oficiales. Y es que para muchos entre las élites del país la candidatura de Castillo representaba una amenaza de carácter existencial para el modelo económico y político vigente, en gran medida debido al discurso utilizado por el propio candidato, con un discurso abiertamente hostil con la prensa y propuestas como la de convocar a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución. Bajo estas circunstancias, diferentes miembros de la derecha peruana se articularon alrededor de la campaña de Keiko Fujimori para

la segunda vuelta y, considerando el peligro que veían en el horizonte, estaban dispuestos a justificar actitudes que no respetaban las reglas de juego democráticas, o incluso, podrían considerarse abiertamente antidemocráticas. Considerando esto, el presente trabajo busca estudiar esta percepción de amenaza existencial como el principal factor detrás de la evolución del discurso de la derecha peruana durante las Elecciones Generales del 2021.

Siguiendo esto, la pregunta de investigación que guió este trabajo estuvo referida a identificar aquellos componentes de la crisis durante el periodo de estudio que explicarían la radicalización de los representantes de la derecha peruana durante las elecciones generales del mencionado año. Para abordar esto, se optó por utilizar la metodología del process tracing o rastreo de procesos, la cual se centra en reconstruir los hechos históricos y las decisiones de los actores involucrados a través del análisis de evidencias empíricas y la formulación de hipótesis causales, poniendo un énfasis en el cómo y el porqué de fenómenos complejos. En relación con el fenómeno de estudio, esta metodología permite identificar los mecanismos causales y las conexiones entre eventos en una cadena causal, que conducen a un resultado específico, que en este caso se refiere a los mencionados cambios dentro de la derecha peruana.

## 2.2. Posibles explicaciones del fenómeno de estudio

Ahora bien, para poder responder la mencionada pregunta de investigación inicialmente se plantearon por lo menos tres hipótesis correspondientes a los componentes de la crisis que atravesaba el país durante el periodo de estudio y que habrían tenido un impacto lo suficientemente significativo en los líderes y partidos de la derecha peruana como para generar cambios en su discurso y práctica política. Siguiendo esto, la primera hipótesis se refería a que la crisis política vigente desde 2016 en el Perú empeoró el vacío de representación ya existente, el cual sumado a un sistema de partidos sumamente débil habría creado un ambiente propicio para la adopción por parte de varios líderes de derecha de discursos más radicales en lo económico y social, así como el surgimiento de liderazgos de derecha populista radical que buscaban capitalizar el descontento ciudadano.

Según esta hipótesis, los partidos políticos en el Perú y sus líderes han sufrido un proceso de desgaste y deslegitimación debido a su incapacidad para ofrecer propuestas programáticas coherentes y consistentes a sus posibles electores, su dificultad para representar los intereses y demandas de la ciudadanía, y su ineptitud para enfrentar los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados. Siguiendo esto, esta hipótesis se basa en la idea de que el populismo se nutre de la debilidad o ausencia de partidos políticos institucionalizados, que genera una fragmentación, inestabilidad y personalización de la política. Así, esta situación habría

dado paso al surgimiento de liderazgos carismáticos y personalistas que han logrado captar el descontento popular con un discurso de corte populista que apela a las emociones, las expectativas y, sobre todo, los miedos de sus electores. Frente a esto, incluso los partidos de derecha más institucionalizados habrían adoptado discursos crecientemente más socialmente autoritarios y conservadores, así como hostiles a cualquier propuesta de cambio al modelo económico vigente, con el fin de no quedarse atrás electoralmente.

Por otra parte, la segunda hipótesis señalaba que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del COVID-19 habrían exacerbado las desigualdades ya existentes en el país, así como la inseguridad ciudadana y la polarización ideológica, lo cual habría sido aprovechado por partidos y líderes de la derecha peruana para capitalizar electoralmente entre los sectores más vulnerables y marginados a partir de una radicalización de su discurso y práctica política, explotando los miedos existentes respecto a cualquier cuestionamiento del modelo político y económico vigentes. Así, esta hipótesis se basa en la idea de que el populismo se fortalece en el contexto de crisis sociales y económicas que generan malestar, incertidumbre y resentimiento en la población (Luna & Rovira Kaltwasser, 2014).

Siguiendo esto, los partidos políticos peruanos inevitablemente reaccionaron a las graves consecuencias de la pandemia del COVID-19 en el país, que no solo llevó al colapso del sistema sanitario y situó al país entre los de mayor tasa de mortalidad a nivel mundial, sino que también generó una recesión económica y exacerbó las desigualdades, la pobreza y la inseguridad ciudadana previamente existentes. Estas condiciones críticas habrían impulsado un discurso más autoritario y antipluralista por parte de estos representantes de la derecha, quienes proponían frecuentemente durante la campaña medidas de “mano dura” para lidiar con estos problemas.

Finalmente, la tercera hipótesis se refería al éxito de partidos y liderazgos de derecha populista radical a nivel internacional y regional como un factor que habría influido en el discurso y la práctica de los partidos y líderes de derecha en el Perú, que adoptaron elementos discursivos y simbólicos que habían tenido éxito en otros países para atraer a posibles electores, a la vez que tomaban como referencia a líderes como Donald Trump en EE.UU. o Jair Bolsonaro en Brasil. Estos elementos incluyen el uso de eslóganes simples y efectivos (Ej. “No al comunismo” o “Defendamos la democracia”), el recurso a las redes sociales y a los medios alternativos para difundir sus mensajes y movilizar a sus seguidores, la apelación al patriotismo o al cristianismo como valores fundamentales, la denuncia de fraudes electorales, de una conspiración internacional de izquierda o de la amenaza terrorista como estrategias para deslegitimar a sus adversarios, o incluso el empleo de la violencia simbólica o física como forma de acción política. Asimismo, estos líderes de derecha han recibido el

reconocimiento y/o la cooperación de otros líderes del mismo espectro ideológico en otros países, y han participado en eventos o redes internacionales vinculadas al populismo de derecha, como el Foro Madrid.

### 2.3. Recopilación de información

Ahora bien, originalmente se planeaba realizar la referida recopilación de información a través de tres estrategias: la revisión documental a partir de periódicos del periodo de estudio, la elaboración de cuestionarios y entrevistas a personajes clave dentro de la derecha peruana durante este periodo, y la realización de encuestas dirigidas a simpatizantes de la derecha peruana. Sin embargo, finalmente se descartó la elaboración de estas encuestas, principalmente debido a que el clima político del periodo durante el cual se realizó la investigación hacía particularmente difícil e incluso riesgoso establecer líneas de comunicación con estos posibles entrevistados. Este factor también tuvo cierta influencia en la dificultad para obtener entrevistas con personajes clave del periodo de estudio, lo cual se discutirá con mayor detalle en los siguientes párrafos.

En consecuencia, para recopilar la información que permitiera hacer una reconstrucción detallada de los hechos y, por lo tanto, verificar las hipótesis planteadas, se hizo uso de los dos métodos cualitativos mencionados: el análisis documental a partir de periódicos del periodo y las entrevistas a actores clave. Lo que se buscaba con este proceso era obtener una comprensión completa de los eventos y actores clave del periodo y su relevancia respecto al objeto de estudio. Por ello, se inició con la referida revisión de periódicos, poniendo énfasis en los titulares y las secciones políticas de cada día o, al menos, de cada mes. Se procuró hacer una reconstrucción de los hechos lo más detallada posible a partir de la información obtenida, pero que a la vez no se desviara del objetivo principal del trabajo, que es identificar cuáles serían los factores o posibles explicaciones detrás de los cambios en el discurso de los partidos de derecha peruanos durante las elecciones generales del 2021.

En esta revisión documental se utilizó principalmente el periódico El Comercio, y se recurrió a los ejemplares de este diario en la Biblioteca Nacional del Perú para obtener esta información, por lo cual se visitaron sus instalaciones recurrentemente entre los meses de agosto de 2023 y mayo de 2024. A pesar de que se debe reconocer su sesgo hacia la centroderecha, este es reconocido por su enfoque analítico, detallado y amplio de los acontecimientos políticos, nacionales, económicos y electorales. A partir de la información recopilada se construyó una cronología detallada que permitió la identificación de actores clave en diferentes momentos o situaciones importantes, así señalando con quiénes se debía establecer comunicación para obtener una comprensión más profunda de los eventos estudiados. Esta

reconstrucción temporal no solo sirve para mapear los eventos más relevantes cronológicamente, sino también para identificar los señalados patrones y cambios en el discurso y la práctica política de los partidos y liderazgos de derecha, así como para comprender cómo los contextos políticos y sociales durante este periodo habrían influido en esta radicalización.

En este mismo período, se comenzó a establecer contactos con personajes relevantes de la derecha peruana dentro del período de estudio, muchos de los cuales habían sido elegidos congresistas de la República para el período 2021-2026. Estos posibles entrevistados fueron seleccionados no solo en función de su visibilidad mediática, sino sobre todo basándose en su influencia y participación activa en los procesos de toma de decisiones dentro de sus respectivas agrupaciones, así como el impacto de estas decisiones sobre la política peruana durante el periodo de estudio. Así, para estas entrevistas se diseñó un cuestionario que contenía preguntas específicas que abordaban directamente las hipótesis planteadas en este estudio, centradas en las posibles explicaciones que impulsaron la evolución en el discurso y la práctica de los representantes de la derecha peruana en el período analizado.

Siguiendo esta idea, el referido cuestionario estaba originalmente estructurado en seis secciones: una introductoria, cuatro enfocadas en las hipótesis y una conclusión final de autoevaluación del entrevistado:

1. Introducción y Contexto: Incluía preguntas como las siguientes: “¿Cómo definiría su ideología actual y la de su partido y/o bancada, y cómo se diferencia de otros partidos o bancadas de derecha en el contexto peruano?”.
2. Crisis de Partidos y Oferta Electoral: Incluía preguntas como las siguientes: “En el contexto de la crisis política en Perú, ¿cómo cree que la dirección ideológica de [agrupación política] ha sido afectada, si es que lo ha sido?” y “Desde las elecciones de 2021, ¿cómo ha evolucionado la oferta electoral de [agrupación política], y cómo refleja esto cualquier cambio en la ideología o discurso del partido y/o bancada?”.
3. Crisis Política: Incluía preguntas como: “¿Cuál cree que ha sido el impacto de la crisis política en el Perú sobre la agenda y el discurso de [agrupación política], tanto el partido como la bancada, o su propia agenda y discurso?”.
4. Pandemia de COVID-19: Incluía preguntas como: “¿Cómo considera que la pandemia del COVID-19 ha influenciado en la retórica y las políticas de [agrupación política] y las suyas propias?”.

5. Influencia Internacional: Abordaba preguntas como: “Dada la tendencia de los recientes liderazgos de derecha en América Latina, ¿cree que esto ha tenido un efecto en el discurso político de [agrupación política] o el suyo propio?”.
6. Autoevaluación y Perspectivas: Incluía preguntas tales como: “¿Cuál considera que es la autopercepción de los miembros de [agrupación política] acerca de su ideología y su posición en el espectro político? Asimismo, ¿cuál sería su autopercepción?” y “¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que vislumbra para [agrupación política] o para usted en el contexto político actual del Perú?”.

Sin embargo, se hicieron también algunas modificaciones a este cuestionario por cuestiones de disponibilidad de tiempo, reduciéndolo a cuatro preguntas, dependiendo del congresista o entrevistado. Estas preguntas buscaban explorar temas referidos a las hipótesis que se buscaban validar, como las respuestas a eventos políticos significativos como la crisis política, las percepciones internas sobre la dirección y el futuro de su agrupación, entre otras. Además, este cuestionario se diseñó de manera que se pudiera ajustar según la información específica que se deseaba obtener de cada entrevistado y su agrupación política, incluyendo oportunidades para hacer repreguntas. Por ejemplo, se incluyeron preguntas abiertas para permitir a los entrevistados expresar sus opiniones y reflexiones personales, lo que podría revelar nuevas perspectivas o información no contemplada previamente.

Ahora, para conseguir estos objetivos, se estableció una línea de comunicación con la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, a la vez que se empezaron a enviar correos a diferentes congresistas del llamado Bloque Democrático, que agrupaba a las bancadas de derecha contrarias a Pedro Castillo incluso antes de su proclamación. Por ejemplo, se intentó contactar con Jorge Montoya, Alejandro Caveró, Rosangela Barbarán, Patricia Chirinos, José Williams y José Cueto, así como con excongresistas y figuras de la derecha peruana que habían participado en la campaña electoral, como la excongresista y expresidenta del Partido Popular Cristiano Lourdes Flores, el excongresista aprista Jorge del Castillo y la exparlamentaria y excandidata presidencial aprista Nidia Vílchez. Sin embargo, sólo se logró acordar entrevistas con la mencionada Patricia Chirinos, José Cueto, José Williams, Nidia Vílchez y Diego Bazán. Cabe resaltar que varios congresistas con los que se tuvo entrevista ya no están en la bancada o ya no pertenecen a la bancada o al partido por el que fueron elegidos en las elecciones de 2021, y asimismo muchas de estas entrevistas no serán utilizadas en esta versión final del trabajo de investigación, ya que a partir de la reconstrucción de los hechos que se realizaba simultáneamente se pudo determinar que éstas no serían tan relevantes para la investigación.

### 3. Reconstrucción de hechos y análisis documental

Como se señaló anteriormente, como parte de este recojo de información primero se llevó a cabo una revisión documental centrada en el diario "El Comercio". Esta revisión tuvo como objetivo principal reconstruir de manera detallada los eventos políticos en el Perú entre el inicio de la campaña electoral del 2021 en marzo de dicho año, pasando por la primera y segunda vuelta del proceso electoral, los cuestionamientos a los resultados electorales en el periodo hasta la proclamación oficial de Pedro Castillo como ganador. En relación a esto, se optó por incluir en la reconstrucción de los hechos a los acontecimientos suscitados desde noviembre del 2020, debido al impacto prolongado que tuvieron sobre la política peruana, y el inicio de la campaña electoral del 2021, pasando por las propias elecciones y sus diferentes fases, hasta el inicio del gobierno de Pedro Castillo tras su victoria electoral. Esta temporalidad fue clave para entender la evolución de la política peruana y la radicalización de los partidos de derecha. Así, se llevó a cabo un análisis detallado de los titulares y secciones de Política, Economía de cada diario, con especial atención en los artículos y reportajes que abordaban los eventos políticos más significativos.

Además, la revisión documental no solo se centró en los hechos políticos aislados, sino también en el contexto más amplio en el que estos ocurrieron. Se examinó cómo la crisis política y las sucesivas transiciones de poder afectaron la percepción pública y las estrategias de los partidos de derecha. También se analizó la cobertura de los eventos relacionados con la pandemia del COVID-19 y cómo estos influyeron en el escenario político y en la radicalización de los partidos. Asimismo, se consideró la relación entre los acontecimientos políticos y las movilizaciones sociales, así como la reacción de los partidos de derecha ante estos. A continuación, se presenta la mencionada reconstrucción de los hechos completada hasta ahora.

#### 3.1. Noviembre de 2020: Vacancia Presidencial, Protestas y Represión

El 10 de noviembre de 2020, el Perú se vio sumido en una crisis política profunda y sin precedentes en Lima desde la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori en el 2000. La destitución del presidente Martín Vizcarra por el Congreso bajo la causal de vacancia por "incapacidad moral permanente", justificada en las acusaciones de corrupción durante su mandato como gobernador de Moquegua y las críticas a su gestión de la pandemia del COVID-19, marcó un momento trascendental en este convulso periodo. Esta decisión, que fue tomada por una mayoría significativa de congresistas (105 votos a favor y 19 en contra) fue percibida por un gran sector de la población peruana como un "golpe parlamentario", y fue aún más criticada considerando que 68 de los 130 congresistas estaban siendo investigados por corrupción.

Sin embargo, esta destitución no fue un hecho aislado, sino el punto culminante de una lucha de poder entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que se extendía desde 2016. Como se mencionó, esta decisión fue impulsada a través de la causal de vacancia por "incapacidad moral permanente", una cláusula constitucional con una interpretación históricamente amplia y a menudo ambigua en la política peruana, y que ha sido un recurso recurrente en la política peruana para desafiar la autoridad del Ejecutivo, especialmente en escenarios de conflicto político agudo y polarización, como ocurrió con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo de 2018. Si bien este debilitamiento del Ejecutivo se puede explicar en parte por el agrio conflicto entre el gobierno de Kuczynski y el Congreso dominado por la bancada de Fuerza Popular, cuyos orígenes pueden encontrarse en la segunda derrota consecutiva de su lideresa Keiko Fujimori, también puede explicarse por la extrema debilidad del partido de gobierno en el Congreso (Dargent y Rousseau 2021: 379), razón por la cual PPK tuvo que gobernar en minoría, una dinámica que se mantendría durante el gobierno de su sucesor.

A este contexto de agitación política se le sumaron los devastadores efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia. Así, a pesar de que desde un inicio el gobierno implementó medidas de distanciamiento social muy estrictas para contener la propagación del virus, durante el 2020 el sistema de salud colapsó: la capacidad para la atención de emergencias, la hospitalización en cuidados intensivos y la disponibilidad de oxígeno no se dieron abasto con el número de contagios, y el Perú terminó posicionándose entre los países con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo (Barrenechea y Encinas 2022: 409). Esta situación evidenció las vulnerabilidades preexistentes del país no solo a nivel sanitario, sino también económico y social.

En ese sentido, en 2020 la economía peruana registró una contracción del PIB de 11.1%, la más pronunciada en tres décadas, en un contexto en el que las estrictas medidas de inmovilización social obligatoria paralizaron amplios sectores de la actividad productiva. Esta recesión, asociada también al desplome de la inversión extranjera y del consumo, se tradujo en una pérdida significativa de empleo formal y agravó las condiciones de quienes dependían de la economía informal, haciéndolas aún más vulnerables frente al shock sanitario y económico (Dargent & Rousseau, 2021, p. 381). En respuesta, el Congreso promovió iniciativas destinadas a aliviar los costos inmediatos de la crisis, como los retiros extraordinarios de los fondos de pensiones, aunque estas medidas buscaron a la vez capitalizar el malestar social con fines políticos y suscitaban críticas respecto de su racionalidad económica y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Este deterioro acelerado de las condiciones de vida de gran parte de la población reforzó las percepciones de inseguridad material

y desprotección estatal, creando un ambiente propicio para que discursos basados en el miedo empezaran a adquirir relevancia.

Como se referenció líneas arriba, el panorama político peruano antes de la vacancia de Vizcarra ya era bastante volátil, caracterizado por un sistema de partidos fragmentado, un legado de corrupción endémica y una intensa confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este conflicto se había profundizado desde la presidencia de Kuczynski, quien enfrentó dos mociones de vacancia por parte del Congreso que finalmente llevaron a su renuncia y al ascenso de Vizcarra, y continuó durante el gobierno de este último. Esta situación se agravó con su disolución del Congreso en 2019, justificada en una aún controvertida interpretación de la “denegación fáctica de la confianza” por parte del Ejecutivo, y la convocatoria a elecciones legislativas extraordinarias para enero de 2020, lo que resultó en un Congreso aún más fragmentado que sería el que eventualmente lo destituiría.

Ahora bien, la respuesta de los principales actores políticos a la destitución de Vizcarra fue muy polarizada, ya que el expresidente no contaba con un partido o coalición sólida que lo respaldara en el Congreso. Los grupos parlamentarios de derecha, muchos de cuyos miembros estaban siendo investigados por corrupción, apoyaron en gran medida la moción de vacancia, mientras que los grupos y políticos de izquierda la denunciaron como una amenaza para la democracia, argumentando que era una maniobra interesada de los legisladores para desestabilizar a un presidente que había sido un crítico abierto de la corrupción.

Sin embargo, esta vacancia no fue un hecho aislado, sino que cristalizó una tendencia iniciada en el quinquenio anterior: la pérdida de capacidad del Ejecutivo para conducir sus políticas frente a un Congreso que adquirió mayor protagonismo en materias presupuestarias y a través de controles parlamentarios empleados con mayor frecuencia. Al respecto, autores como Dargent y Rousseau señalan que este acontecimiento selló el quiebre de una de las continuidades del Perú postransición democrática y normalizó un equilibrio en el que el Congreso condiciona la agenda y, con sus acciones, eleva la inestabilidad (2021, p. 378). En este contexto, la mayoría parlamentaria encabezada por Fuerza Popular convirtió en práctica habitual el uso de instrumentos de control político que antes eran excepcionales, como la censura a ministros, la obstrucción de la agenda gubernamental y las amenazas de vacancia presidencial, frente a un Ejecutivo debilitado por la frágil posición del partido de gobierno y el enfrentamiento abierto entre el presidente (primero Kuczynski y posteriormente Vizcarra) y la bancada fujimorista.

Tras la destitución de Vizcarra, Manuel Merino de Lama, legislador de Acción Popular y presidente del Congreso, asumió la presidencia el mismo 10 de noviembre.

Merino, un político poco conocido proveniente de Tumbes, enfrentó casi de inmediato el rechazo ciudadano, ya que su gobierno fue percibido por muchos peruanos, analistas políticos y medios de comunicación como el resultado de un “golpe parlamentario”. Esto se confirmaba ante los ojos de muchos ciudadanos con la formación del gabinete de Merino, que incluía ultraconservadores y exfuncionarios del APRA. Es por ello que este gobierno vio una escalada de manifestaciones a nivel nacional, las cuales fueron descritas como las más grandes en el país en las últimas dos décadas y organizadas principalmente a través de redes sociales. Los ciudadanos, en su mayoría jóvenes sin afiliación política, salieron a las calles para mostrar su rechazo contra lo que consideraban una violación de las normas democráticas y una actuación desmedida del poder legislativo.

Sin embargo, la respuesta del gobierno, el cual se mantuvo aislado de la vista público y sin dialogar con la sociedad civil, estuvo caracterizada por una represión intensa hacia los manifestantes, y varias organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron que la policía estaba usando fuerza excesiva para sofocar las protestas, con decenas de heridos por balas de goma y el uso de gases lacrimógenos cerca de hogares y hospitales. Estos casos de brutalidad policial resultaron en la muerte de dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, el 14 de noviembre y aproximadamente cien heridos, incluyendo miembros de la prensa. Siguiendo esto, la desaprobación pública hacia Merino fue abrumadora, con encuestas mostrando que el 94% de los peruanos desaprobaba su llegada a la presidencia. La intensificación de las protestas y la pérdida de apoyo dentro de su propio gabinete llevaron a Merino a renunciar el 15 de noviembre, cinco días después de asumir el cargo. Esta renuncia sumió al país en una nueva crisis política, dejando un vacío de poder y una incertidumbre sobre el futuro inmediato del Perú.

Respecto a esto, la respuesta represiva del gobierno de Merino ante las protestas masivas evidenció una tendencia autoritaria, ya que el nivel de violencia policial utilizado contrastaba con actuaciones anteriores en manifestaciones urbanas, donde se ejercía mayor moderación en el uso de la fuerza. En este contexto, la naturaleza de esa represión se puede interpretar según lo mencionado por Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) acerca de una visión que considera cualquier manifestación de protesta como una violación del principio de autoridad y un ataque a la legitimidad estatal. Este episodio evidenció cómo los proyectos políticos autoritarios permanecen en estado de latencia en el Perú y pueden resurgir cuando las condiciones políticas lo permiten. La negativa a dialogar y la formación de un gabinete con figuras ultraconservadoras reflejaron el resurgimiento de estos proyectos que priorizaban la imposición de un orden autoritario sobre la respuesta a las demandas ciudadanas.

Frente a esto, el Congreso peruano se vio en la urgente necesidad de restablecer un gobierno que pudiera liderar al país hasta las próximas Elecciones Generales del 2021. Siendo que tras la renuncia de Merino también renunció la mesa directiva del Congreso, el Congreso tuvo una sesión extraordinaria para elegir una nueva Mesa Directiva. Tras varias horas de negociaciones se aprobó una lista multipartidaria liderada por Francisco Sagasti, un congresista del Partido Morado con un perfil tecnocrático y académico que representaba un intento de apaciguar las tensiones y ofrecer una figura de consenso. Su elección como presidente del Congreso, y por lo tanto como presidente interino del país, fue vista como un paso hacia una transición pacífica y democrática en un momento de profunda crisis política, social y sanitaria. Por su parte, Mirtha Vásquez, congresista del Frente Amplio, fue nombrada como primera vicepresidenta y primera ministra interina, sumándose al gobierno de transición. Este gobierno interino tendría que asumir la responsabilidad de gestionar la respuesta a la pandemia de una manera más efectiva y transparente que sus predecesores, así como restaurar la confianza en las instituciones del país, preparando el terreno para las elecciones del 2021.

### 3.2. Noviembre de 2020 a Febrero de 2021: Transición, Crisis y Precampaña Electoral

Tras la renuncia de Merino, el gobierno de transición de Francisco Sagasti tuvo que enfrentar una situación sumamente compleja, tanto a nivel de manejo sanitario como de conflictividad social. Así, el año había iniciado con una serie de enfrentamientos entre la Policía Nacional y los trabajadores agrarios en La Libertad, donde el 30 de diciembre dos personas, de 16 y 28 años, murieron por impactos de bala (El Comercio, 2 de enero de 2021). Esto formaba parte de las movilizaciones iniciadas a finales de noviembre de 2020 por los trabajadores del sector agroindustrial para exigir la derogación de la Ley de Promoción Agraria, alegando que esta favorecía desproporcionadamente a las grandes empresas y no les garantizaba derechos laborales adecuados. El Ejecutivo intentó abordar este conflicto mediante el diálogo con representantes de los trabajadores y los empresarios, y el Congreso aprobó la derogación de la ley el 3 de diciembre. Sin embargo, el paro agrario no se levantó hasta el día siguiente, tras el bloqueo de infraestructura vial clave como la carretera Panamericana Sur y el mencionado saldo de dos muertos tras enfrentamientos con la policía. Con ello las protestas se tornaron más violentas, y aunque el Congreso aprobó una nueva ley agraria que ofrecía mejores condiciones laborales, se reportaron 12 muertes adicionales producto de la represión policial hasta el 17 de enero de 2021, en un momento en el que la memoria de la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas de noviembre aún era reciente.

Asimismo, a pesar de los esfuerzos desde el Ejecutivo por impedir la expansión del virus, los contagios y decesos seguían creciendo inexorablemente. Así, Diciembre marcó el inicio de un nuevo rebrote de coronavirus, con un aumento en la mortalidad y en la positividad de las pruebas moleculares. El promedio diario de muertes por COVID-19 ascendió a 55, con picos de 91 y 77 decesos los días 4 y 14 de diciembre, respectivamente; y la tasa de positividad creció de un 5,6% a un 14,5% en un solo mes (El Comercio, 2 de enero de 2021). Posteriormente, la entonces Ministra de Salud Pilar Mazzetti confirmaría un rebrote significativo y advirtió sobre el posible inicio de una “segunda ola”. Este aumento continuó en los primeros días de enero, con los decesos diarios alcanzando los 96, la cifra más alta en tres meses, y los contagios diarios subiendo a 2804, cifras no vistas desde noviembre. Además, la detección del primer caso de una nueva variante del virus en Lima metropolitana, hasta un 70% más contagiosa, amenazaba con empeorar la ya compleja crisis sanitaria (El Comercio, 6 y 10 de enero de 2021).

Hacia el 12 de enero, la ministra Mazzetti confirmaba que el país ya estaba experimentando una segunda ola del virus, con un ascenso rápido en el número de casos. Simultáneamente, la Defensoría del Pueblo anunciaba que la ocupación de camas UCI en Lima y Callao había alcanzado el 99%. Todo este repunte estaba vinculado a la mencionada nueva variante del virus, por lo que el gobierno también se preparaba para anunciar nuevas medidas focalizadas para combatir esta expansión del virus. Al día siguiente, el presidente Sagasti y su gabinete presentaban un plan que segmentaba al país en tres niveles de alerta (moderado, alto y muy alto) basados en indicadores como la tasa R, la mortalidad y la positividad de las pruebas moleculares. Por ejemplo, se estableció que en regiones como Arequipa, Callao, Lima Metropolitana, entre otras clasificadas en el nivel alto, el toque de queda sería de 9 de la noche a 4 de la mañana (El Comercio, 13 y 14 de enero de 2021).

A pesar de esto, hacia el 22 de enero el país se mantenía entre los diez países con mayor mortalidad por COVID-19 a nivel mundial, con una tasa de 122.1 víctimas por cada 100,000 habitantes. Hasta ese momento, el Ministerio de Salud había reportado un total acumulado de 39,157 muertes, aunque existía una discrepancia significativa con los datos de las 25 Direcciones Regionales de Salud que contabilizaban 54,109 fallecimientos (El Comercio, 22 de enero de 2021). Posteriormente, el Ministerio de Salud reportó que durante los primeros 23 días del año 1,928 personas habían fallecido por COVID-19 en Perú, con una tasa de mortalidad alarmante: 3.5 peruanos morían cada hora debido al virus. Esta cifra devastadora y en aumento constante superaba los promedios diarios de víctimas de los últimos meses del año anterior, con un promedio diario en enero de 84 muertes (El Comercio, 25 de enero de 2021).

En respuesta a esta escalada de casos, al borde del colapso hospitalario y frente a las críticas de que las anunciadas medidas de contención eran insuficientes, en la noche del 26 de enero el presidente Sagasti anunciaba una nueva cuarentena desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero para Lima y otras nueve regiones clasificadas en el nivel extremo de riesgo, que incluía inmovilización social obligatoria y limitaciones severas a todas las actividades fuera del hogar, excepto las esenciales como supermercados y farmacias con un aforo del 40%, y operación exclusiva de delivery para restaurantes. Además, se prohibieron los viajes terrestres y aéreos, permitiéndose solo salidas peatonales de una hora diaria. También se anunciaron apoyos económicos y tributarios para las familias y empresas afectadas en las regiones de mayor riesgo (El Comercio, 27 de enero de 2021). También se prohibieron los vuelos desde Europa y Brasil, con lo cual se buscaba no solo contener la propagación del virus, sino también prevenir la llegada de nuevas cepas más contagiosas.

Ahora bien, en el ámbito político, el primer mes del año también iniciaba con una suerte de epílogo de casi tres décadas de desintegración del sistema de partidos. En ese sentido, el APRA, uno de los partidos históricos de la política peruana, enfrentaba su peor crisis hasta el momento. Luego de no alcanzar la valla electoral en las elecciones de 2020, el futuro del partido dependía de una decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a sus listas parlamentarias para las Elecciones de 2021, las cuales no habían terminado de ser inscritas dentro del plazo previsto. La trágica muerte de Alan García en abril de 2019 y las persistentes acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Odebrecht habían dejado al PAP en una posición vulnerable. Sin embargo, tras el rechazo de los recursos por parte del JNE, y la consecuente decisión del partido de retirar la candidatura presidencial de Nidia Vílchez y las listas parlamentarias que se llegaron a inscribir, el APRA tenía básicamente garantizada la pérdida de la inscripción (El Comercio, 15 y 16 de enero de 2021), ya pensando en un posible relanzamiento.

Este fenómeno también se manifestaba en el hecho de que a inicios de la carrera electoral varios partidos políticos enfrentaban serias irregularidades en la inscripción y antecedentes de sus candidatos. Así, los Jurados Electorales Especiales habían detectado que 30 candidatos fueron inscritos incorrectamente como si hubieran sido elegidos en comicios internos, cuando en realidad no participaron en las internas celebradas entre noviembre y diciembre de 2020 (El Comercio, 4 de enero de 2021), a pesar de los intentos por fortalecer la democracia interna dentro de las organizaciones políticas. Además, se encontró que más de 200 candidatos habían sido procesados por delitos como hurto, estafa y violencia familiar, incluyendo a un candidato en Piura con hasta 16 procesos judiciales. Esto evidenciaba deficiencias en

los procesos de selección interna de los partidos, quienes a menudo ignoraban o minimizaban la relevancia de antecedentes penales y civiles en sus candidatos, y si bien partidos como Juntos por el Perú señalaron que separarían a los candidatos tras la revelación de sus antecedentes, otros como Unión por el Perú justificaban su permanencia (El Comercio, 12 y 13 de enero de 2021).

Por otra parte, durante el mes de enero se observaron múltiples tachas por parte del JNE a diferentes candidaturas para los comicios del 11 de abril. El 6 de enero, una solicitud de tacha contra la candidatura presidencial de George Forsyth, de Victoria Nacional, fue admitida a trámite por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. La solicitud, presentada por el mismo ciudadano que pidió la tacha de otro candidato, Daniel Urresti, alegaba que Forsyth había formado un comité electoral de manera antirreglamentaria y presentaba deficiencias en sus elecciones internas. Dos días después, la situación de César Acuña, candidato por Alianza para el Progreso, también se complicó cuando el mismo JEE decidió excluirlo de las elecciones por no haber declarado un predio en su declaración jurada de bienes y rentas, y aunque este señaló que apelarían la decisión, sería difícil que el JNE la revocara dada su línea de adherirse estrictamente a la normativa (El Comercio, 7 y 9 de enero de 2021). Posteriormente, otro caso prominente sería el de Martín Vizcarra, cuya exclusión se debió a la omisión en su declaración de ingresos de bienes y rentas de acciones en una empresa, la cual también apelaría. Incluso Hernando de Soto, conocido por su trayectoria académica a nivel internacional, estuvo en riesgo de no poder participar en los comicios al revelarse irregularidades al consignar sus estudios académicos. Y así, la carrera electoral recién empezaba.

En relación a ello, el politólogo Fernando Tuesta señalaba en un artículo que la implementación de estos requisitos y prohibiciones electorales podrían estar limitando el derecho a la participación política en el país. Si bien una mayor regulación apuntaba a mejorar la transparencia y reducir la corrupción, limitar las inscripciones y excluir candidatos podría estar restringiendo derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Según Tuesta, esta sobrerregulación sería, sobre todo, consecuencia de un sistema de partidos débil, poco representativo y percibido como propenso a la corrupción. Así, argumentaba que, en lugar de excluir candidatos por omitir información en sus hojas de vida u otorgar dádivas, sería más adecuado informar a los votantes de estas faltas a través de advertencias públicas para que estos pudieran tomar decisiones informadas en las urnas. Es decir, un enfoque menos restrictivo y más informativo que evitaría el paternalismo y protegería mejor los derechos fundamentales de candidatos y electores (Tuesta, 2021, en El Comercio, 4 de enero de 2021).

Ahora bien, aunque hechos como la mencionada conflictividad social y las exclusiones de candidatos fueron importantes precedentes, no se podía negar que la pandemia y sus efectos fueron lo que más directamente impactó el desarrollo del proceso electoral. El anuncio de la futura vacunación hecho por el presidente Francisco Sagasti el 6 de enero tras la firma de acuerdos con Sinopharm y AstraZeneca hizo que la gestión de la pandemia y el acceso a las vacunas se convirtieron en temas centrales de discusión. Como señalaba Fernando Vivas, las vacunas "les robaron la cámara a los candidatos", ya que la atención del público y los medios se desvió significativamente hacia las perspectivas de inmunización y las implicaciones de las políticas de salud del futuro gobierno (El Comercio, 9 de enero de 2021). Además, la adaptación de las campañas a las restricciones sanitarias debido a la pandemia y el traslado forzoso hacia plataformas digitales reconfiguró las estrategias de los candidatos, quienes ahora tenían que optimizar su presencia en redes sociales y reimaginar sus métodos de conexión con el electorado.

En ese sentido, la campaña electoral experimentó un inicio más lento debido a las mencionadas restricciones sanitarias, pero la dinámica electoral ya estaba en curso. Así, según la Encuesta Nacional Urbano-Rural realizada por Ipsos el 17 de enero, George Forsyth lideraba las preferencias con un 17% de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori con un 8%, y luego por Julio Guzmán y Verónica Mendoza, ambos con un 7%. Más abajo se encontraban Daniel Urresti, Yohny Lescano y Hernando de Soto, con 6%, 6% y 5% respectivamente, mientras que César Acuña, Ollanta Humala y Daniel Salaverry registraban un 4% de intención de voto cada uno. Además, el antivoto para candidatos como Humala (73%), Fujimori (71%), Acuña (62%) y Guzmán (52%) reflejaba un rechazo considerable dentro del electorado, con Guzmán y Forsyth experimentando un aumento en su rechazo desde diciembre del año pasado (El Comercio, 17 de enero de 2021).

Por otra parte, en este punto también se comenzaban a escuchar propuestas de "mano dura" desde ciertas candidaturas frente a temas como la inseguridad ciudadana. Si bien el propio Forsyth y Daniel Urresti comenzaban a proponer políticas de este estilo, la candidata que volvió la "mano dura" el centro de su campaña fue Keiko Fujimori, que prometía aplicar este enfoque no solo a los problemas de inseguridad ciudadana, sino también a áreas como la economía y el manejo de la pandemia. Sin embargo, Fujimori Higuchi no solo se enfocó en la seguridad y la pandemia, sino que empezó a recuperar el legado de su padre Alberto Fujimori como parte de su campaña, apelando explícitamente al recuerdo del gobierno de este último en los años noventa. En esta línea, Fujimori modificó su postura respecto al indulto de su padre, prometiendo su liberación en caso de ser electa, a pesar de haberse opuesto a esta opción en las campañas de 2011 y 2016 (El Comercio, 19 de enero de 2021).

Este cambio discursivo se debería a que oponerse al indulto de su padre no le habría sido útil en estas campañas anteriores, por lo que con ello Keiko busca recuperar el apoyo del sector “albertista”, intentando trazar un paralelismo entre las crisis económicas de aquel entonces y la actual situación causada por la pandemia.

Esta radicalización en los discursos y estrategias de exponentes de la derecha peruana como Keiko Fujimori se enmarca en una tendencia más amplia observada en el entorno político peruano. Como se mencionó, la propuesta de "mano dura" se convirtió en un eje central de las campañas de otros candidatos, como Forsyth y Urresti, quienes también abogaban por políticas de seguridad más estrictas. Respecto a esto, Mayka y Smith (2021) destacan que la derecha moviliza apoyos en torno a estos temas de seguridad y lucha contra el crimen, lo que incluye la demanda de una represión policial más severa y la oposición a reformas que buscan limitar el poder de las fuerzas del orden. Por su parte, Gil (2022) señala que estos actores aprovechan el descontento ciudadano y el temor al crimen para promover agendas autoritarias, enfatizando valores como el orden y la autoridad. Así, el giro de Fujimori hacia un discurso que apelaba a estos valores reflejaría esta tendencia, en la medida que buscaba consolidar el apoyo de sectores que añoraban el orden y la estabilidad asociados al régimen de su padre durante los años noventa.

En este contexto, la crisis política y social que atravesaba el Perú, agudizada por la pandemia de COVID-19, sirvió como caldo de cultivo para que los partidos de derecha cambiaran sus agendas hacia estas posiciones. Como señalan Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), en contextos de debilidad institucional y decepción con la democracia, los proyectos autoritarios pueden ganar terreno al presentarse como soluciones eficaces ante el desorden. La insistencia en medidas punitivas y la apelación al miedo frente a la inseguridad ciudadana son manifestaciones del autoritarismo que, según Norris e Inglehart (2019), busca explotar las ansiedades sociales para minar la confianza en las instituciones democráticas y promover soluciones simplistas a problemas complejos. Asimismo, Mayka y Smith (2021) argumentan que la aparición de nuevos desafíos, como la inseguridad ciudadana y el descontento económico, ha sido fundamental en el auge de la derecha radical en América Latina.

Ahora bien, febrero comenzó en el Perú con la opinión pública centrada en la esperada llegada de las vacunas de Sinopharm, la anunciada campaña de vacunación y cómo todo esto afectaría la campaña electoral. Como se había anunciado, el Ministerio de Salud aprobó y publicó un protocolo sanitario detallado para la campaña electoral, el cual establecía medidas de seguridad estrictas para evitar la propagación del COVID-19 durante las actividades de campaña. Según el protocolo, los partidos políticos debían asegurar un distanciamiento de al menos dos metros entre las

personas, evitar contactos físicos y promover el uso constante de mascarillas y escudos faciales en ambientes cerrados. Además, se exhortaba a la realización de actividades de campaña de manera virtual o digital para divulgar los planes de gobierno y perfiles de los candidatos, mientras que las actividades presenciales que generaran aglomeraciones quedaban suspendidas, excepto en determinados casos (El Comercio, 1 de febrero de 2021).

Finalmente, y a pesar del alto grado de incertidumbre que rodeaba su llegada, el 7 de febrero en la noche llegó el avión que transportaba los contenedores con las primeras 300 000 dosis de la vacuna desarrollada por Sinopharm. Esta llegada marcó un momento crucial casi un año después de que el expresidente Martín Vizcarra anunciara por primera vez la posibilidad de inmunizar a la población contra el COVID-19. Al día siguiente comenzaría la distribución de las vacunas en 13 hospitales de Lima y otros centros en las diferentes regiones del país, con un padrón nominal para los 150 mil profesionales de la salud que recibirían la primera dosis (El Comercio, 8 de febrero de 2021). Con ello también iniciaba un largo y difícil proceso para lograr la inmunización completa de la ciudadanía, tanto a nivel logístico como en términos de planificación, pero que despertaba la esperanza de poder sobreponerse a la expansión del virus.

Sin embargo, rápidamente se pasó de la esperanza a la indignación días después, cuando salió a la luz que Martín Vizcarra, el expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, había sido vacunado junto a su esposa irregularmente con dos dosis de la vacuna de Sinopharm en octubre de 2020, aprovechando su posición. Vizcarra afirmó haber participado como voluntario en los ensayos clínicos de la vacuna, pero investigaciones periodísticas y declaraciones de fuentes cercanas a los ensayos desmintieron esta versión, indicando que no formaba parte del grupo de voluntarios, así confirmando que había recibido la vacuna en Palacio de Gobierno de forma irregular. Consecuentemente, el expresidente habría cometido delitos de cohecho pasivo, colusión y falsedad genérica, al haber obtenido un beneficio indebido. Asimismo, se presentó una denuncia constitucional desde el Congreso que imputaba a Vizcarra por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo (El Comercio, 12 y 13 de febrero de 2021).

Sin embargo, Vizcarra y su esposa no habrían sido los únicos en vacunarse antes de tiempo. El escándalo se extendió al revelarse que otros altos funcionarios, incluyendo a la Ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también se habían vacunado irregularmente. Astete, que renunció tras admitir haber recibido una dosis el 22 de enero, justificó su acción en la necesidad de mantenerse saludable debido a su rol en las negociaciones de vacunas. Mazzetti, por su parte, recibió su vacuna en secreto el 12 de enero, y la segunda dosis

el 6 de febrero, poco antes de que el primer lote de vacunas llegara oficialmente al país, lo cual contrastaba con su promesa pública de ser la última en vacunarse. Tras esto, Oscar Ugarte asumió como Ministro de Salud en reemplazo de Mazzetti, y Alan Wagner se convirtió en el nuevo canciller. Asimismo, en la madrugada del 16 de febrero se reveló una lista con más de 470 nombres de personas que, al igual que Vizcarra, se beneficiaron con dosis adicionales de la vacuna Sinopharm (El Comercio, 15 y 16 de febrero de 2021).

El escándalo que sería bautizado como “Vacunagate” fue un duro golpe para la legitimidad del gobierno de Sagasti, que había incluido a las dos mencionadas exministras en su gobierno, quien aseguró que todos los involucrados serían separados de sus cargos y que estos hechos no detendrían el proceso de negociación y adquisición de más vacunas para el país. Asimismo, el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora con el mandato de investigar la vacunación irregular de altos funcionarios, incluyendo a Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete. Paralelamente, la Fiscalía amplió la investigación preliminar a estas exministras, quienes, junto con Vizcarra, podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión por los delitos de concusión y negociación incompatible. Además, se consideraba la posibilidad de inhabilitar a Vizcarra de ejercer cualquier función pública por diez años, lo cual le impediría asumir el cargo de congresista de ser elegido (El Comercio, 17, 18 y 20 de febrero de 2021). Sin embargo, era evidente que el daño estaba hecho, y sus implicaciones serían otro factor que influenciaría el próximo proceso electoral.

Paralelamente, en un contexto marcado por el mencionado escándalo del “Vacunagate” y la campaña de vacunación en curso, la campaña electoral comenzaba a tomar impulso. En el caso de Yohny Lescano, quien en la última encuesta aparecía en el segundo lugar de las preferencias electorales, este decidió desarrollar su campaña de forma independiente, desmarcándose de la dirección del partido y rechazando cualquier coordinación con la bancada parlamentaria (El Comercio, 3 de febrero de 2021). Esta decisión estaría motivada en buscar distanciarse de las facciones de Acción Popular que el año anterior apoyaron la vacancia de Martín Vizcarra y la polémica presidencia de Manuel Merino, también militante de Acción Popular y aun congresista de la república, así buscando ganar el apoyo de un electorado que de otra forma no apoyaría una marca partidaria todavía controversial.

Por otro lado, Julio Guzmán, tras recuperarse de un cuadro de COVID-19, decidió revitalizar su campaña para recuperar el terreno perdido, planificando un recorrido por el sur del país, donde Lescano había ganado bastante presencia. Guzmán, consciente de su caída en las encuestas y la necesidad de reconectar con las bases fuera de Lima, optó por abandonar los eventos virtuales y enfocarse en una campaña más en el terreno. Sin embargo, quizás era muy tarde para ello,

considerando que a pesar de los esfuerzos por descentralizar su propuesta política, su agenda era demasiado limeña (El Comercio, 13 de febrero de 2021).

Un día después, se verían los resultados de la apuesta de Lescano por el voto sureño y una campaña autónoma de su partido. Según la última Encuesta Nacional Urbano Rural de Ipsos publicada el 14 de febrero, Yonhy Lescano de Acción Popular experimentó un notable aumento en su intención de voto, alcanzando el 10%, situándose apenas un punto por debajo de George Forsyth, quien aún lideraba con un 11%, es decir, un empate técnico entre ambos candidatos. Por otro lado, la encuesta también destacó un descenso significativo para Julio Guzmán del Partido Morado, quien pasó del 7% al 4%, cayendo al séptimo lugar en la lista de preferencias. También se reveló que Keiko Fujimori y Verónica Mendoza estaban empatadas, con un 8% cada una. Daniel Urresti seguía de cerca con un 7%, y más abajo en la lista, Rafael López Aliaga, César Acuña y Daniel Salaverry se encontraban empatados al 3%. Finalmente, Ollanta Humala tenía 2% de la preferencia electoral, muy lejos de sus resultados en anteriores campañas. Asimismo, aparecía por primera vez fuera de “otros” el candidato Pedro Castillo del partido Perú Libre, también con 2% (El Comercio, 14 de febrero de 2021).

Sin embargo, este mes tampoco se libraba de controversias respecto a exclusiones de candidatos por los tribunales electorales. Así, Daniel Urresti y su plancha presidencial fueron excluidos del proceso electoral tras la declaración fundada de una tacha por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que señaló irregularidades en las elecciones internas de Podemos Perú, citando la falta de autonomía del Tribunal Electoral Nacional del partido (El Comercio, 5 de febrero de 2021). Simultáneamente, George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, también enfrentaba problemas con el JEE por haber omitido información clave en su declaración de hoja de vida, específicamente sobre sus ingresos y participación en empresas durante el año 2019. Esta omisión lo llevó a ser excluido en primera instancia, aunque la decisión era apelable ante el JNE, que tendría la última palabra sobre su participación en las elecciones. Por otro lado, Rafael López Aliaga de Renovación Popular también era excluido en primera instancia por hacer promesas de dádivas que excedían lo permitido por la ley, como la donación de su sueldo presidencial y el 50% de sus ganancias a obras caritativas, infringiendo la Ley de Organizaciones Políticas (El Comercio, 11 de febrero de 2021).

Ahora bien, escándalos como el Vacunagate solo exacerbaron la ya existente desconfianza pública en las instituciones, proporcionando terreno fértil para que varios candidatos en carrera adoptaran posiciones menos respetuosas o directamente opuestas a ellas. Como señala Sosa-Villagarcía (2022), esta crisis generó un escenario que combinaba una creciente polarización afectiva e ideológica en la

demanda electoral y el incremento en la fragmentación de la oferta política. Es decir, este contexto habría favorecido que muchos actores políticos de derecha incorporaran estos elementos en su discurso en dos sentidos fundamentales: primero, exacerbando sus ideas antidistributivas en lo económico y de conservadurismo social y cultural; y segundo, adoptando estrategias políticas que incluían amenazas abiertas al orden democrático liberal. Así, varios exponentes de la derecha peruana pasaron de enfocarse en defender el modelo económico vigente hacia retóricas más autoritarias, populistas y menos comprometidas con las reglas de juego democráticas, buscando posicionándose como suerte de alternativa moral frente a una élite corrupta.

El ejemplo más evidente de esta evolución fue el ya mencionado Rafael López Aliaga, un candidato conocido por sus posiciones ultraconservadoras que adoptó desde un inicio esta narrativa, prometiendo medidas drásticas y presentándose como la encarnación de las frustraciones del pueblo. Según Sosa-Villagarcía (2022), su candidatura es un ejemplo de la radicalización del conservadurismo que buscó emular el éxito electoral de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, adoptando discursos que enfatizaban valores tradicionales y nacionalistas. Asimismo, se podría afirmar que su retórica coincidía con la conceptualización de derecha populista radical de Mudde (2007), presentando elementos del nativismo, autoritarismo y populismo, aunque adaptados a la realidad peruana. Siguiendo esto, sus constantes referencias a la investigada empresa brasileña Odebrecht como actor detrás de toda la corrupción en el Perú, así como sus ataques a la prensa y a las élites "caviaristas", a quienes responsabilizaba de las múltiples crisis vigentes en el país, resonaban con votantes desilusionados por la crisis política y los escándalos de corrupción.

### 3.3. Marzo a Abril de 2021: Campaña electoral en marcha y primera vuelta

A inicios de marzo de 2021, la carrera electoral ya se veía marcada por la incertidumbre y la fragmentación política, a medida que los candidatos presidenciales ajustaban sus estrategias para atraer a un electorado polarizado en un contexto de crisis múltiples. Yonhy Lescano lideraba las encuestas de intención de voto con un discurso populista que resonaba especialmente en el sur del país, aprovechando su imagen como congresista opositor a las élites, aunque enfrentaba dificultades para consolidar su apoyo en Lima, una región crucial para todos los candidatos. Por otro lado, George Forsyth, quien inicialmente lideró las encuestas, sufría una caída sostenida en su popularidad, siendo que a pesar de su carisma y su perfil de outsider, los vacíos en su discurso sumados a su impericia política personal no le permitieron sostener su ventaja inicial.

Ahora bien, este momento de la campaña mostró la fragmentación de la derecha peruana en hasta tres vertientes: una opción de continuidad con énfasis en políticas de mano dura, representado por Keiko Fujimori; un discurso conservador

populista con tintes religiosos, encarnado por Rafael López Aliaga; y una propuesta de modernización del modelo vigente, liderada por Hernando de Soto (Pajuelo Teves, 2021, p. 158). En el caso de Fujimori, si bien mantenía un voto duro y una fuerte presencia a nivel nacional, también se enfrentaba a un alto nivel de rechazo, mientras que López Aliaga capitalizaba coyunturalmente el malestar económico y el empleo como temas de campaña (El Comercio, 1 de marzo de 2021).

Esta fragmentación política también se reflejaba en las proyecciones para el Congreso, con al menos nueve partidos perfilándose para superar la valla electoral del 5% según un simulacro de votación de El Comercio-Ipsos de fines de marzo (El Comercio, 22 de marzo de 2021). Aquí Acción Popular mostraba una notable fuerza territorial, especialmente en regiones, y se perfilaba como una de las principales bancadas en el próximo parlamento, mientras que la posibilidad de una bancada oficialista como primera minoría, liderada por Lescano, parecía cada vez más probable. Sin embargo, la falta de cohesión y la alta tasa de candidatos recientemente afiliados a sus partidos sugerían un período legislativo complicado y fragmentado, con posibles dificultades en la toma de decisiones y una agenda legislativa desordenada.

Asimismo, esta campaña electoral también estuvo influenciada por temas sociales y morales, especialmente entre los candidatos que disputaban el voto conservador. López Aliaga y Fujimori centraron o incluyeron en sus campañas la defensa de valores provida y profamilia, abordando temas sensibles como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Sin embargo, López Aliaga enfatizaba la coherencia de su vida con sus posturas políticas, mientras Fujimori buscaba diferenciarse asegurando que su partido no confundía religión con política. Hernando de Soto de Avanza País, aunque menos involucrado en esta disputa directa, también se posicionaba con una orientación conservadora moderada (El Comercio, 2 de marzo de 2021). El potencial del voto evangélico también jugaba un papel importante en las estrategias de campaña, con intentos de acercamiento por parte de varios candidatos, especialmente desde los candidatos de derecha, aunque no todos los evangélicos se alineaban exclusivamente con estos (El Comercio, 7 de marzo de 2021).

Durante este mes, Rafael López Aliaga y George Forsyth lograron superar los intentos de exclusión de la contienda electoral. Forsyth consiguió la anulación de su exclusión por parte del JEE Lima Centro, mientras que López Aliaga recibió una votación unánime a su favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) (El Comercio, 6 de marzo de 2021). En el caso de López Aliaga, esta decisión estuvo respaldada por una manifestación de apoyo que reunió a más de 700 personas, evidenciando no solo que el discurso conservador populista de este candidato encontraba apoyo en

ese contexto, sino que también atraía a movimientos más radicales de derecha como La Resistencia, que también le brindó su apoyo (El Comercio, 6 de marzo de 2021).

Por otra parte, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) enfrentaba un panorama complejo a comparación de 2016, disputando el pase a la segunda vuelta con Rafael López Aliaga, George Forsyth y Verónica Mendoza, por lo que tenía que ajustar su estrategia. Tras recibir la autorización judicial para viajar por distintas regiones del país, su campaña se enfocó en el norte del país, donde buscaba consolidar su base de apoyo, evitando áreas dominadas por rivales como Puno (El Comercio, 2 de marzo de 2021). Fujimori necesitaba aumentar su intención de voto en cinco puntos porcentuales para asegurar su lugar en el balotaje, por lo que se dirigía estratégicamente a sus nichos de apoyo y buscaba atraer el voto pragmático de los indecisos.

Asimismo, aunque George Forsyth logró superar la exclusión de su candidatura, desde febrero sufrió una caída significativa en las encuestas que lo colocó en un empate técnico con Yohny Lescano, perdiendo la ventaja que había mantenido durante casi nueve meses consecutivos. Esto llevó a una renovación casi total de su comando de campaña para recuperar terreno en la recta final hacia las elecciones de abril, centrándose en mejorar la comunicación y aumentar las apariciones mediáticas de Forsyth, siendo que el principal error habría sido mantener una estrategia de silencio durante gran parte de la campaña (El Comercio, 5 de marzo de 2021). Su campaña enfatizaba un mensaje dicotómico, presentando a Forsyth como la opción de cambio frente a los "mismos de siempre" en la política, una estrategia que incluía críticas directas a otros candidatos (El Comercio, 23 de marzo de 2021).

Mientras tanto, Somos Perú enfrentaba tensiones internas debido a la prominencia de Martín Vizcarra, cuyo controvertido perfil eclipsaba al candidato presidencial Daniel Salaverry. Aunque esta estrategia parecía beneficiar al partido en términos de intención de voto, con un notable aumento en las encuestas a favor de su lista congresal, también lo exponía a las críticas y controversias asociadas con Vizcarra señaladas anteriormente (El Comercio, 5 de marzo de 2021). Por otra parte, la campaña presidencial de Yohny Lescano, aunque lideraba las encuestas, también enfrentaba críticas internas dentro de Acción Popular, siendo que algunos miembros del partido consideraban que el trabajo proselitista en la capital había sido insuficiente y que los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia debieron tener un rol más activo, a la vez que se señalaba la necesidad de mayor cohesión entre Lescano y los aspirantes al Congreso para reforzar la imagen de unidad del partido (El Comercio, 24 de marzo de 2021).

Durante este mes las controversias judiciales que involucraban a diversos actores políticos, incluidos algunos participantes en la carrera electoral, no cesaron. Así, la Comisión Permanente del Congreso había aprobado por unanimidad el informe de calificación de las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra por su vacunación irregular contra el COVID-19, las cuales incluían acusaciones por varios delitos, entre ellos organización criminal y peculado doloso (El Comercio, 2 de marzo de 2021). La situación se complicó aún más cuando, el 13 de marzo, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó 18 meses de prisión preventiva para Vizcarra por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (El Comercio, 13 de marzo de 2021). La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho evaluó este pedido en una audiencia pública (El Comercio, 17 de marzo de 2021), durante la cual el fiscal Juárez presentó pruebas como registros de llamadas y testimonios de colaboradores eficaces que afirmaban haber entregado dinero a Vizcarra a cambio de licitaciones (El Comercio, 18 de marzo de 2021). Sin embargo, la jueza rechazó la prisión preventiva para Vizcarra, determinando que no existía un peligro de fuga ni de obstaculización por parte del investigado, aunque sí impuso medidas de comparecencia con restricciones y una caución de 100 mil soles (El Comercio, 19 de marzo de 2021).

Sin embargo, las controversias para Vizcarra no se detuvieron en ese punto. Así, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso también debatió un informe que proponía inhabilitar a Martín Vizcarra por diez años debido a su implicación en el Caso Vacunagate. Este informe acusaba a Vizcarra de haber mentido y abusado de su poder al vacunarse con dosis de la vacuna de Sinopharm en octubre de 2020, además de interceder para que su esposa y su hermano también recibieran las mismas dosis. El informe también sugería la inhabilitación de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y de la excanciller Elizabeth Astete debido a que se vacunaron sin formar parte del ensayo clínico (El Comercio, 31 de marzo de 2021). En ese sentido, Vizcarra continuaba su campaña electoral enfrentando tanto el escrutinio público como los procesos judiciales, con el riesgo de que, si se aprobaba su inhabilitación, podría no poder ejercer como congresista en caso de ser elegido.

Por su parte, Keiko Fujimori también enfrentaba serias acusaciones del Ministerio Público que complicaron su campaña electoral. El fiscal José Domingo Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori por presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016, basándose en acusaciones de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Además, se pidió la prohibición de salida del país por 36 meses y otras 19 medidas restrictivas. La fiscalía también implicó a otros 39 investigados, incluyendo a figuras cercanas a Fujimori como Vicente Silva Checa, Pier

Figari y Jaime Yoshiyama (El Comercio, 12 de marzo de 2021). Entre los testigos clave para esta acusación estaban catorce colaboradores eficaces que admitieron su culpabilidad y detallaron el esquema de ocultamiento de dinero, destacando el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien señaló directamente a Fujimori y describió su rol en el encubrimiento de aportes de Odebrecht (El Comercio, 22 de marzo de 2021). Estas controversias legales no ayudaban a reducir el significativo antivoto en su contra, lo cual podía afectar negativamente sus chances electorales, como ocurrió en las elecciones de 2011 y 2016.

Ahora bien, casi todas las candidaturas y agrupaciones políticas incurrieron en discursos controversiales e incluso engañosos durante el periodo electoral. Por ejemplo, las campañas de Daniel Salaverry (Somos Perú) y George Forsyth (Victoria Nacional) utilizaron discursos antiinmigrantes, proponiendo la deportación de extranjeros como solución a problemas nacionales. Sin embargo, la campaña de Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular fue notable por la mayor presencia de estos elementos. Así, Neldy Mendoza, candidata a la primera vicepresidencia, fue señalada por sus declaraciones sobre el rol de las mujeres y la violencia familiar. Otros candidatos del partido, como Milagros Aguayo y Pablo Lazo, también fueron criticados por sus comentarios sobre el "liderazgo masculino" y el origen de la pandemia del COVID-19, respectivamente. Fabiola Morales, candidata al Congreso, había hecho declaraciones polémicas sobre la homosexualidad, que intentó justificar citando supuestos médicos sin especificar fuentes. Esta agrupación también recurrió a la desinformación cuando, por ejemplo, su líder López Aliaga difundió en Twitter un supuesto apoyo del Frepap a su candidatura, lo cual fue desmentido por el propio partido. Asimismo, Fabiola Morales publicó una portada de El Comercio, editada para favorecer a su partido, lo que fue rápidamente señalado como falso (El Comercio, 16 de marzo de 2021).

Sin embargo, no solo actores en carrera electoral se vieron envueltos en acusaciones legales y controversias éticas este mes, sino también quienes habían sido altos funcionarios del gobierno. A finales de marzo, la excanciller Elizabeth Astete acusó a la primera ministra Violeta Bermúdez de pedirle en febrero que no involucrara al presidente Francisco Sagasti en el escándalo por las vacunaciones irregulares. La primera ministra Bermúdez y la exministra de Salud Pilar Mazzetti desmintieron las declaraciones de Astete, mientras que la Presidencia de la República reiteró su rechazo a las afirmaciones mediante un comunicado en el que Sagasti negó haber autorizado la vacunación y afirmó que solo tomó conocimiento de esta cuando Astete presentó su renuncia (El Comercio, 23 de marzo de 2021). A pesar de esto, estas acusaciones no ayudaron a reducir la tensión política en un mes ya cargado de conflictos y controversias, mientras el país se acercaba a las elecciones generales.

Adicionalmente, a finales de marzo, los debates presidenciales organizados por el JNE se convirtieron en un escenario crucial para que los 18 candidatos a la presidencia presentaran sus propuestas sobre temas clave como la pandemia, la educación, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Debido al elevado número de candidaturas, los debates se llevaron a cabo en tres jornadas consecutivas a partir del 29 de marzo, dividiendo a los candidatos en grupos de seis, y su importancia radicaba en el contexto vigente de fragmentación de las intenciones de voto y alto porcentaje de indecisos, siendo que podían influir significativamente en las preferencias de los electores y perfilar candidaturas (El Comercio, 29 de marzo de 2021). Paralelamente, la disputa por un lugar en la segunda vuelta se intensificó en las últimas semanas de la campaña: Yonhy Lescano y un emergente Pedro Castillo mostraban un ascenso en el sur del país, a expensas de Verónica Mendoza y Julio Guzmán; Rafael López Aliaga y Hernando de Soto competían por consolidar su posición, con De Soto ganando tracción en sectores juveniles; y Keiko Fujimori buscaba recuperar terreno aprovechando la caída de otros candidatos y apelando a un discurso conservador que resonaba más allá de su base tradicional.

Así, en la primera jornada de debates del 29 de marzo, destacaron las críticas por parte de Keiko Fujimori y Verónica Mendoza hacia George Forsyth, destacándose en sus propuestas pero debilitado en los enfrentamientos verbales, que se enfocaron sobre todo en su renuncia a la alcaldía del distrito limeño de La Victoria para participar en estos procesos electorales. Fujimori, por su parte, señaló que las cuarentenas habían sido un fracaso, e hizo énfasis en su postura de “mano dura” contra la delincuencia y la “ideología de género”, mientras que Mendoza abogó por una vacunación sin favoritismos y una redistribución del personal policial. César Acuña se enfocó en su propuesta de instalar plantas de oxígeno en cada distrito y mejoras en la seguridad. Alberto Beingolea criticó la gestión estatal de la pandemia y propuso una mayor participación privada en la adquisición de vacunas, mientras que Marco Arana hizo énfasis en la necesidad de una nueva constitución y mejoras en la educación.

En la segunda jornada de debates presidenciales del 31 de marzo, el desempeño fue disparejo. De Soto, considerado el favorito, reiteró sus propuestas sobre formalización de la economía y la habilitación para las compras privadas de vacunas, aunque el tono autorreferencial de sus intervenciones redujo su impacto persuasivo. Pedro Castillo, quien para entonces había crecido en las encuestas, centró su discurso en la necesidad de una nueva Constitución, pero sin lograr una interacción efectiva con los demás candidatos. Daniel Urresti dejó de lado su habitual tono provocador y se centró en sus propuestas de seguridad ciudadana, como el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional e incluso un “toque de queda contra la criminalidad”. Ollanta Humala, con amplia experiencia en estos debates,

aprovechó para cuestionar a De Soto y reforzar su imagen de exmandatario con experiencia en el gobierno, y fue el único que criticó activamente a De Soto. En general, esta jornada fue una larga secuencia de exposiciones en las que lo verdaderamente decisivo siguió siendo el clivaje en torno al modelo económico y a la idea de una nueva Constitución (Pajuelo Teves, 2021, p. 159).

Ahora bien, como también se señaló anteriormente, el énfasis de Rafael López Aliaga en valores provida y profamilia y su oposición a temas como el matrimonio igualitario y el aborto resonaron con sectores conservadores y reflejaron un giro hacia posiciones más extremas dentro de la derecha peruana. Esta estrategia se alinea con la observación de Gil (2022) sobre cómo actores de derecha buscan defender las jerarquías sociales tradicionales y valores conservadores, a menudo conectados con instituciones religiosas, como en el caso de López Aliaga y su cercanía al cristianismo más conservador. Esto sería parte de un proceso más amplio de politización dentro del espectro conservador peruano, donde este tipo de actores incorporan agendas de grupos religiosos en su plataforma política. Además, la campaña de este último mostró durante este mes una mayor disposición a emplear discursos controversiales e incluso engañosos, siendo la difusión de falsos apoyos y la manipulación de portadas de medios ejemplos del uso de la desinformación y las noticias falsas para movilizar apoyos. Esta radicalización destaca aún más considerando el apoyo de movimientos de derecha más radicales como "La Resistencia", indicando una convergencia entre partidos de derecha y grupos más extremos y abiertamente antidemocráticos.

Por su parte, la campaña de Keiko Fujimori acentuó sus posiciones conservadoras para competir por el electorado de derecha frente a candidatos como López Aliaga. Así, Fujimori reforzó un discurso que se oponía a políticas sociales progresistas, reafirmando su rechazo a la llamada "ideología de género" y reivindicando enfoques de "mano dura" en seguridad ciudadana. Las graves acusaciones legales en su contra y el pedido de más de 30 años de prisión por parte del Ministerio Público no detuvieron su uso de una retórica divisiva, sino que muy probablemente lo intensificaron, alineándose con la estrategia populista de presentarse como víctima de unas élites corruptas. Al mismo tiempo, fueron apareciendo los primeros elementos de un discurso de defensa del status quo que vinculó el recuerdo de la derrota de Sendero Luminoso con la advertencia de un posible retorno del terrorismo. El uso de esta "memoria salvadora" brindó elementos simbólicos para el denominado "terruqueo" en medios y redes sociales durante la campaña (Pajuelo Teves, 2021, p. 158; Mendoza, 2022). Esto se vería con mayor claridad en etapas posteriores del proceso electoral.

Asimismo, la mayor disposición de estos candidatos a usar estrategias como la difusión de desinformación, ataques a oponentes con noticias falsas y el

cuestionamiento de las instituciones refleja una tendencia más amplia donde estos líderes buscan movilizar apoyos sin tomar en cuenta el impacto que estas estrategias tienen en las instituciones democráticas. En el Perú, esto se manifestó en las tácticas agresivas de candidatos como López Aliaga y Fujimori para deslegitimar a sus oponentes y una mayor disposición a saltarse los procesos democráticos para alcanzar el poder. El énfasis en temas sociales y morales por parte de estos candidatos también ilustra este proceso, ya que buscaron movilizar a votantes conservadores oponiéndose a amenazas percibidas de movimientos progresistas. Como señala Kahhat (2024), la construcción de un enemigo común les permite a estos actores posicionarse como defensores de valores tradicionales frente a supuestas amenazas existenciales, como el "marxismo cultural" o la "ideología de género", y de esta forma movilizar apoyos frente a estas "agendas subversivas". Gil (2022) también destaca que en esta elección la derecha peruana comenzó a utilizar más frecuentemente narrativas como el "anticomunismo" para deslegitimar a la oposición y promover la defensa cerrada del status quo que representaban la Constitución y el modelo económico vigente. En este contexto en particular, al enmarcar la elección como parte de una "batalla cultural", estos exponentes de la derecha peruana contribuyeron a intensificar la ya existente polarización e incertidumbre en este escenario preelectoral.

Siguiendo esto, el domingo 4 de abril, una semana antes de los comicios del 11 de abril, el último simulacro de votación realizado por Ipsos reveló un escenario muy competitivo, con apenas 3.5 puntos porcentuales de diferencia entre el primer y el quinto lugar. Yonhy Lescano lideraba la intención de voto con un 14.7%, seguido por Hernando de Soto con un 13.9%, Verónica Mendoza con un 12.4%, George Forsyth con un 11.9%, Keiko Fujimori con un 11.2% y Rafael López Aliaga con un 8.2%. Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, mostraba un crecimiento significativo con un 7.9%. Alfredo Torres, analista político, describió este proceso como "la elección más fraccionada de la historia", indicando que había un virtual empate estadístico entre los principales candidatos (El Comercio, 4 de abril de 2021).

En cuanto a la distribución del voto a nivel regional, el simulacro mostró una caída en la popularidad de algunos candidatos en Lima, como Lescano, López Aliaga y Forsyth, mientras que Hernando de Soto ganaba apoyo en la capital. Verónica Mendoza y Keiko Fujimori también experimentaron un ligero aumento en su intención de voto en Lima. En el interior del país, Lescano experimentó una caída significativa, especialmente en el sur y el centro, mientras que Pedro Castillo y Verónica Mendoza incrementaron su respaldo, particularmente en la región sur, donde la intención de voto de los candidatos de izquierda (Lescano, Mendoza y Castillo) alcanzaba el 42% (El Comercio, 4 de abril de 2021).

Pedro Castillo, quien había estado en un segundo plano durante gran parte de la campaña, comenzó a ganar terreno de manera considerable en las zonas rurales del centro y sur del Perú en las semanas previas a los comicios, lo que lo posicionó como una figura emergente. Este avance se produjo tras la caída de otros candidatos, como Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga, quienes perdieron apoyo en estas zonas. La competencia se volvió más reñida entre Hernando de Soto y López Aliaga, quienes luchaban por captar al electorado de derecha, que migraba de un candidato a otro a medida que avanzaban los últimos días de campaña.

En consecuencia, hacia la segunda semana de abril de 2021, las actividades de campaña fueron afectadas tanto por los protocolos sanitarios como por las restricciones electorales que comenzaron a regir esa semana. A partir del 5 de abril, se prohibió la publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación y, desde el viernes 9, se restringieron las manifestaciones públicas y la venta de bebidas alcohólicas, todo ello con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad de los comicios (El Comercio, 5 de abril de 2021). Estas restricciones llevaron a que los partidos programaran sus actividades de cierre de campaña hasta el jueves 8 de abril.

Durante esos días, varios candidatos ajustaron sus estrategias de campaña. George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, dio positivo por COVID-19, lo que lo obligó a aislarse y modificar sus actividades públicas, afectando considerablemente su visibilidad en los últimos días de campaña. Su partido optó por realizar mitines virtuales para reforzar su presencia en la recta final (El Comercio, 5 de abril de 2021). Keiko Fujimori, por otro lado, organizó una gira por el norte del país, enfocándose en las regiones donde obtuvo mayor respaldo en elecciones pasadas. Verónica Mendoza priorizó el contacto con dirigentes y organizaciones sociales en Lima, mientras que Rafael López Aliaga continuó con caravanas y reuniones en el interior del país (El Comercio, 6 de abril de 2021). Todo esto se desarrollaba en un contexto agitado por los rumores y sondeos difundidos por redes sociales acerca del crecimiento del respaldo a Castillo (Pajuelo Teves, 2021, p. 161).

Hacia el final de la semana, los candidatos cerraron sus campañas con caravanas, mitines y eventos virtuales. Yonhy Lescano realizó una caravana vehicular en Lima, donde se congregaron cientos de simpatizantes. Hernando de Soto cerró su campaña en Arequipa, donde reiteró su crítica al "estado fallido" del Perú y abogó por articular condiciones para que la población pueda "salir adelante" por sí misma. Verónica Mendoza culminó su campaña en Cusco, convocando a una "segunda independencia" del país, mientras que George Forsyth, debido a su aislamiento, clausuró su campaña a través de una videoconferencia. Keiko Fujimori cerró su tercera campaña presidencial con un mitin virtual desde Villa El Salvador, pidiendo a

los peruanos rechazar un "modelo estatista". Rafael López Aliaga también recurrió a un evento virtual con música en vivo, reiterando la necesidad de "refundar" el país, mientras que Pedro Castillo irrumpió a caballo en la Plaza San Martín e hizo un llamado a la unidad y a una nueva constitución desde la plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima (El Comercio, 9 de abril de 2021).

Como se mencionó anteriormente, la fragmentación de la derecha peruana se vio con mayor claridad en estos últimos días de la campaña, mostrando una división en tres opciones principales que complicó la coordinación del voto conservador. Analistas como Mauricio Zavaleta y Eduardo Dargent destacaron que, a diferencia de procesos anteriores, el electorado derechista no tenía un favorito claro. Keiko Fujimori, quien había liderado este sector en años anteriores, ahora enfrentaba una competencia directa con Rafael López Aliaga y Hernando de Soto (El Comercio, 10 de abril de 2021).

Finalmente, el 11 de abril más de 26 millones de peruanos estaban llamados a votar en unas elecciones generales marcadas por la fragmentación y la polarización. El padrón electoral reflejaba una ligera mayoría de mujeres y un importante grupo de adultos mayores de 60 años, un segmento vulnerable ante la pandemia. Lima Metropolitana y regiones como La Libertad, Piura y Arequipa concentraban el mayor número de electores. La participación de peruanos en el exterior también se destacaba, aunque enfrentaron altos niveles históricos de ausentismo y restricciones adicionales debido a la pandemia en países como Chile y Venezuela (El Comercio, 11 de abril de 2021).

Todo este proceso se desarrollaba en el marco de estrictas medidas de bioseguridad, incluyendo el distanciamiento social y el uso de mascarillas, entre otras normas para proteger a los votantes y al personal electoral. Hubo demoras en la instalación de algunas mesas de votación debido a la ausencia de miembros de mesa, especialmente durante las primeras horas, cuando estaba recomendado que los adultos mayores acudieran a votar. A pesar de estos desafíos, el proceso electoral avanzó y hubo una participación significativa a lo largo del país.

Finalmente, para sorpresa de muchos, el conteo rápido al 90% realizado por Ipsos reveló a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, como el ganador de la primera vuelta, con un 18.1% de los votos. Castillo se posicionó como una figura clave en las últimas semanas de la campaña, logrando un rápido avance en las preferencias electorales, particularmente en las regiones del centro y sur del país (El Comercio, 12 de abril de 2021). Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ubicó en segundo lugar con un 14.5%, perfilándose como la principal rival de Castillo para la segunda vuelta. Más atrás quedaron Rafael López Aliaga (12.2%) y Hernando de Soto (10.7%), que se

disputaban el tercer lugar (El Comercio, 12 de abril de 2021). Aquí se evidenciaba el nivel de la fragmentación del voto, ya que los porcentajes obtenidos por los candidatos fueron los más bajos registrados en una primera vuelta. El voto a favor de Castillo, en particular, fue interpretado como un grito de protesta por parte de los sectores más excluidos, especialmente en las regiones andinas y rurales del sur del país.

En paralelo, Keiko Fujimori ya comenzaba a planificar su estrategia para la segunda vuelta, posicionándose en defensa del modelo económico vigente y de la Constitución de 1993. Fujimori mencionó a Hernando de Soto como un posible aliado, y también se proyectó buscar el apoyo de figuras como César Acuña y George Forsyth (El Comercio, 13 de abril de 2021). Por su parte, Pedro Castillo dejó claro que no tenía intención de moderar su discurso como lo había hecho Ollanta Humala en 2011, manteniendo su postura sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución.

El conteo rápido al 100% realizado por Ipsos mostró un claro dominio de Pedro Castillo en 16 regiones del centro y sur del país, mientras que Keiko Fujimori lideró en ocho regiones de la costa norte y la selva. En Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Cusco, Castillo logró un amplio respaldo, consolidándose como la principal figura política en estas áreas. En contraste, Fujimori obtuvo una victoria significativa en regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque (El Comercio, 13 de abril de 2021). El apoyo a Castillo en las regiones del centro y sur fue interpretado por analistas como un voto antisistema y de protesta. Paulo Vilca, analista político, destacó que el voto en el sur reflejaba una demanda por mayor presencia del Estado y políticas públicas más efectivas, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. Por otro lado, el respaldo a Fujimori en el norte fue visto como un voto pragmático, motivado por la percepción de que el fujimorismo podía ofrecer estabilidad y desarrollo (El Comercio, 13 de abril de 2021).

Así, en las semanas posteriores a la primera vuelta, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori comenzaron a definir sus estrategias de cara al balotaje del 6 de junio. Ambos se embarcaron en una intensa campaña para buscar alianzas políticas y el respaldo de diferentes sectores que no habían votado inicialmente por sus candidaturas, con el objetivo de ampliar sus bases de apoyo y consolidarse como las opciones más viables para la presidencia. Mientras Castillo buscaba consolidar su apoyo en las zonas rurales y fortalecer su presencia en Lima, Fujimori se enfocaba en captar el voto de centro y atraer a los electores de derecha que respaldaron a López Aliaga y De Soto. De esa forma, la segunda vuelta se perfilaba como un enfrentamiento decisivo entre dos modelos de desarrollo claramente opuestos, con un electorado polarizado y un escenario en el que la incertidumbre era la única constante.

Ahora bien, considerando los hechos previos a la primera vuelta, se puede afirmar que la fragmentación de la oferta electoral de derecha fue una de las principales características de este proceso electoral. Coronel (2024) mencionaba que el "archipiélago conservador" se resquebrajó aún más en estas elecciones, dando lugar a múltiples expresiones de derecha relativamente distantes entre sí. Asimismo, Barrenechea y Encinas (2022) señalaban que el debilitamiento del fujimorismo tras sucesivos escándalos y su responsabilidad en el caos político de los últimos años incentivaron la aparición de otras candidaturas de derecha que disputaron su electorado tradicional, dificultando la concentración del voto en un solo candidato. Así, el último simulacro de votación de Ipsos publicable antes del 11 de abril mostraba una competencia reñida entre candidatos como Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, con porcentajes de intención de voto muy cercanos.

En esta disputa por el voto de los sectores conservadores y en medio de las restricciones impuestas para contener la pandemia, la adopción de discursos y estrategias más alineadas con la derecha populista radical se hizo más visible. En particular, López Aliaga intensificó su retórica conservadora, apelando directamente a la defensa de los valores tradicionales y adoptando una postura dura contra la izquierda peruana para movilizar a sus simpatizantes contra la "amenaza comunista". En este contexto también aparecieron colectivos abiertamente radicales de extrema derecha, siendo La Resistencia la agrupación más conocida, que compartían un ferviente anticomunismo y criticaban al fujimorismo por su cercanía con la corrupción y por ser demasiado moderados frente a dicha "amenaza". Además, el contramovimiento religioso conservador, que previamente había respaldado al fujimorismo, comenzó a alejarse debido a diferencias en su agenda, debilitando aún más la cohesión ideológica de este sector (Coronel, 2024).

Sin embargo, el acontecimiento que actuó como catalizador para una mayor radicalización y, a la vez, cohesión entre los exponentes de la derecha peruana fue, sin lugar a dudas, el éxito de Pedro Castillo en la primera vuelta. En respuesta, Keiko Fujimori buscó posicionarse como la representante orgánica de la derecha peruana, defendiendo el modelo económico vigente y la Constitución de 1993, en contraposición directa con las propuestas de Castillo. Como señala Coronel (2024), las derechas resolvieron sus fricciones momentáneamente ante el shock que implicó la victoria del candidato de Perú Libre, a quien veían como la encarnación de todos los males de los dos siglos de República. Sin embargo, su campaña no se basaba en un "sí a Keiko Fujimori" sino en un "no al comunismo". La narrativa "anticomunista" se intensificó, construyendo una fantasía de polarización que ocultaba diferencias irreconciliables dentro de la derecha. Así, Fujimori y otros líderes intensificaron su discurso, presentando la elección como un juego de suma cero donde la victoria del

opponente significaría el fin del país. Este enfoque polarizador buscaba unificar temporalmente a las diversas facciones de la derecha contra un enemigo común, aunque ocultaba las profundas divisiones internas del sector.

#### 3.4. Abril a Junio de 2021: Alianzas y polarización en la segunda vuelta

El 14 de abril, Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín condenado por corrupción y líder de Perú Libre, empezó a asumir un rol protagónico en la campaña de Castillo. Cerrón manifestó su apertura a dialogar con cualquier agrupación que estuviera dispuesta a conversar, independientemente de su postura ideológica, pero enfatizó que la base de cualquier acuerdo sería apoyar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tanto, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, expresó la necesidad de buscar consensos con agrupaciones afines y con la sociedad civil, con miras a formar una gran unidad nacional y evitar que el voto en segunda vuelta se limitara a un rechazo a Castillo (El Comercio, 14 de abril de 2021).

El mismo día, surgieron tensiones dentro de Renovación Popular debido a declaraciones de su líder, Rafael López Aliaga, quien inicialmente pareció mostrar apertura hacia Pedro Castillo al señalar que "habría que ayudarlo" si llegaba a ser presidente, destacando que era "provida, profamilia", aunque posteriormente aclaró que no había dado apoyo a ningún candidato presidencial (El Comercio, 14 de abril de 2021). Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas dentro de su partido, y figuras como José Cueto y Jorge Montoya aclararon que Renovación Popular no apoyaría a Castillo debido a sus posiciones comunistas.

Por otra parte, en la primera vuelta de las elecciones, Lima mostró una clara preferencia por los candidatos de derecha, con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga obteniendo una cantidad significativa de votos. Pedro Castillo, quien ganó en 16 regiones del centro y sur del país, se ubicó en el quinto lugar en la capital, evidenciando una fractura entre Lima y el resto del país (El Comercio, 17 de abril de 2021). Lima, que representa el 29% del padrón electoral, se convertiría en una plaza fundamental tanto para Castillo como para Keiko Fujimori. Esta importancia era aún mayor considerando que ninguno de los dos candidatos obtuvo más del 20% de respaldo en la primera vuelta, lo cual representaba el nivel de apoyo más bajo en las últimas cuatro décadas para candidatos en una primera vuelta electoral en el Perú.

Según la ONPE, Castillo obtuvo el 10.6% del total del padrón electoral, mientras que Fujimori alcanzó el 7.4%. La crisis política, los escándalos de corrupción y el impacto de la pandemia fueron identificados como factores que explican estos bajos niveles de apoyo y la fragmentación del voto. Respecto a ello, analistas como Omar Awapara señalaban que la desafección hacia el sistema político generaron una falta

de representación genuina, creando riesgos para la legitimidad de los futuros gobiernos. En este contexto, los votantes tienden a refugiarse en liderazgos personales antes que en partidos, facilitando la aparición de narrativas populistas y contribuyendo a la fragmentación del sistema político (El Comercio, 17 de abril de 2021).

De esta forma, como señala Pajuelo Teves (2021), las intenciones de voto presentaban una segunda vuelta marcada por divisiones territoriales y de clase: pobres versus ricos, limeños versus provincianos, y población urbana versus rural. Adicionalmente, a medida que la campaña avanzaba, emergió una confrontación directa entre dos visiones ideológicas para el país, particularmente en lo referido al modelo económico. Por un lado, Pedro Castillo proponía cambios estructurales profundos, promoviendo la participación estatal en la economía y convocando a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, y argumentaba que la crisis del país requería un modelo donde el Estado tenga un papel protagónico en la economía y se enfoque en cerrar las brechas sociales, planteando la posible estatización de sectores estratégicos como el minero y el gasífero (El Comercio, 18 de abril de 2021). Keiko Fujimori, por su parte, defendió la continuidad del modelo de economía social de mercado establecido por la Constitución de 1993, pero mostró apertura a realizar reformas parciales para mejorar la gestión del Estado. Fujimori sostuvo que el problema no estaba en el diseño del modelo económico, sino en la ineficiencia del Estado para gestionar los recursos y ejecutar políticas públicas efectivas, enfatizando la importancia de fomentar la inversión privada (El Comercio, 18 de abril de 2021).

Durante la cuarta semana de abril, Castillo y Fujimori competían por atraer a los electores indecisos. El 19 de abril, una encuesta de Ipsos para América Televisión mostró que Pedro Castillo lideraba la intención de voto con un 42%, superando por 11 puntos a Keiko Fujimori, quien obtenía el 31% de las preferencias. El estudio también reveló que Castillo tenía una fuerte aceptación en el centro y sur del país, alcanzando un 68%, mientras que Fujimori lograba un 43% en Lima, región decisiva para la segunda vuelta. Sin embargo, ambos candidatos enfrentaban altos niveles de rechazo: el 33% de los encuestados afirmó que definitivamente no votaría por Castillo, mientras que un 55% expresó lo mismo sobre Fujimori (El Comercio, 19 de abril de 2021). Respecto a esto último, varios analistas políticos sugerían que ambos aspirantes debían enfocarse en convencer a los indecisos y suscribir compromisos que garantizaran el respeto a la institucionalidad democrática (El Comercio, 21 de abril de 2021).

Mientras tanto, Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular, declaró públicamente su apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta,

argumentando que su decisión buscaba evitar que Perú se convirtiera en "un régimen comunista". Fujimori, por su parte, continuó con sus esfuerzos para reducir el "antivoto" que la afectaba, enfatizando que no buscaba alianzas formales, sino coincidencias con otros actores políticos. Además, reiteró su promesa de indultar a su padre Alberto Fujimori si ganaba las elecciones, en caso no lograra su libertad mediante un recurso judicial (El Comercio, 19 de abril de 2021).

Pedro Castillo, por otro lado, enfrentaba presiones para moderar su discurso y acercarse al centro político, una estrategia que Ollanta Humala adoptó con éxito en 2011 mediante su "Hoja de Ruta". Sin embargo, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, afirmó que no habría ninguna "hoja de ruta" en esta campaña, destacando la intención de mantenerse fieles a sus planteamientos originales. Esto limitaba la capacidad de Castillo para atraer a votantes moderados o construir alianzas más amplias, afectando su potencial de crecimiento en un electorado más diverso. Cerrón subrayó que el enfoque del partido seguía siendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, sin concesiones hacia el centro (El Comercio, 19 de abril de 2021).

El 20 de abril, Keiko Fujimori enfrentó un obstáculo adicional en su campaña: restricciones legales que le impedían salir de Lima debido a su condición de investigada en el caso Odebrecht. Esta situación fue criticada por Fujimori, quien argumentó que la ponía en desventaja frente a Castillo, quien podía realizar campaña en el interior del país sin limitaciones. La imposibilidad de viajar afectaba su capacidad de conectar con votantes fuera de la capital, y a la vez impactaba negativamente en la percepción pública de su campaña. Finalmente, el 22 de abril, una jueza autorizó a Fujimori a ausentarse de Lima durante la campaña electoral, lo que le permitió igualar las condiciones con su oponente (El Comercio, 20-22 de abril de 2021).

En cuanto a las alianzas, el Frente Amplio expresó su disposición a dialogar con Pedro Castillo con miras a la segunda vuelta, y señaló que el pase de Castillo al balotaje era una expresión del descontento de las mayorías populares con el modelo vigente en el país. Sin embargo, la propuesta de Castillo de convocar a una Asamblea Constituyente y sus críticas al modelo de economía social de mercado generaban incertidumbre respecto a las alianzas que podría concretar en las semanas restantes antes de la elección (El Comercio, 20 de abril de 2021).

Sin embargo, el 23 de abril surgieron revelaciones sobre el pasado de Pedro Castillo al frente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú), gremio que, según informes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), contaba con afiliados y adherentes al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de Sendero Luminoso (El

Comercio, 23 de abril de 2021). Castillo lideró este gremio hasta octubre de 2020, y entre sus colaboradores se encontraban personas vinculadas al Movadef, complicando aún más su capacidad de apaciguar los temores en torno a su candidatura. Ante estas controversias y ciertas declaraciones de miembros de Perú Libre, Castillo se autoproclamó como el único vocero autorizado de su candidatura, desautorizando incluso a Vladimir Cerrón de hablar en nombre de su eventual gobierno. Asimismo, buscó distanciarse de algunas propuestas radicales, negando intenciones de estatizar empresas o disolver el Congreso y asegurando que respetaría la voluntad popular y la Constitución vigente (El Comercio, 23 de abril de 2021).

A estas controversias en la campaña de Castillo se sumaron los intentos desde ciertos sectores de atizar más las tensiones sociales, incluyendo estrategias para amplificar el sentimiento anticomunista y la evocación del terrorismo. En este contexto, y cuando las encuestas mostraban una competencia reñida con ventaja o empate estadístico favorable a Castillo, la candidatura de Fujimori agilizó su despliegue y centró sus esfuerzos en una estrategia orientada a generar miedo frente a las diversas amenazas que representaba la candidatura de Castillo, con el fin de convertir dicho temor en intención de voto a su favor (Pajuelo Teves, 2021, p. 175).

Frente a esto, hacia el 24 de abril, Pedro Castillo mantuvo una estrategia orientada a moderar su imagen, buscando desmarcarse de las voces más radicales dentro de su partido y proyectarse como el único líder de su movimiento. La declaración de Castillo en la que afirmaba que "el que va a gobernar soy yo y no Cerrón" no solo era una señal de distanciamiento del líder de su partido, Vladimir Cerrón, sino que también tenía como objetivo calmar los temores de los votantes más moderados, quienes temían un posible cambio radical en el modelo económico y político, así como ganar el respaldo de sectores preocupados por el radicalismo de Cerrón y otros miembros de la agrupación (El Comercio, 24 de abril de 2021). Por su parte, Keiko Fujimori intensificó su retórica contra Castillo al adoptar, y en un nuevo spot de campaña calificó sus propuestas como "comunistas" y alertó sobre los peligros de un eventual gobierno de izquierda radical en el país. Sin embargo, algunos analistas, como Paula Távara, cuestionaron la efectividad de esta estrategia, señalando que recurrir a una "campaña del miedo" podía ser percibido como divisivo, lo cual podría limitar su capacidad para conquistar votos en regiones donde Castillo contaba con un fuerte respaldo (El Comercio, 24 de abril de 2021).

Finalmente, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa intervino en la campaña electoral el fin de semana posterior a la primera vuelta haciendo público su apoyo a Keiko Fujimori. En un artículo y posteriores declaraciones, el escritor calificó un eventual triunfo de Pedro Castillo como "una verdadera catástrofe" para el Perú y presentó a Fujimori como "el mal menor" frente al riesgo que para él suponían el

comunismo y el chavismo asociados al candidato de Perú Libre (El Comercio, 25 de abril de 2021). Asimismo, justificó su cambio de postura respecto a décadas de oposición al fujimorismo alegando que los comicios habían colocado a la ciudadanía ante la disyuntiva de preservar la democracia liberal o caer en un régimen de inspiración comunista semejante a los de Venezuela o Cuba. Tampoco descartó la posibilidad de un golpe militar si el país se dirigía hacia un modelo autoritario (Pajuelo Teves, 2021, pp. 173-174).

Ahora, al revisar los acontecimientos de esta segunda mitad del mes, se puede afirmar que la derecha peruana continuó evidenciando una notable radicalización en su discurso y estrategias políticas, reflejando una inclinación hacia posturas más autoritarias. En concreto, Keiko Fujimori intensificó su retórica durante este período, calificando las propuestas de Castillo como comunistas y alertando sobre los peligros de un gobierno de izquierda radical, acercándose gradualmente al discurso y las estrategias de una derecha populista más radical. Mediante el uso de una retórica polarizadora y al construir una narrativa de amenaza existencial, buscaba posicionarse como defensora de la democracia y la estabilidad frente a la candidatura de Castillo.

Siguiendo esta idea, las declaraciones de figuras influyentes como Vargas Llosa demuestran la efectividad de esta narrativa a la hora de movilizar apoyos a favor de la candidata fujimorista y ponen de manifiesto la mayor disposición de la derecha, incluso la más liberal, a considerar soluciones extrainstitucionales. Como se señaló anteriormente, esto no es un hecho aislado, ya que, como indica Kahhat (2024), la derecha radical latinoamericana está dispuesta a subvertir las normas democráticas a pesar de que se autodefine como defensora de la democracia, e incluso figuras como Vargas Llosa pueden apoyar medidas que amenazan ese mismo orden democrático. Esto también puede interpretarse desde lo señalado por Norris e Inglehart (2019), respecto a que líderes de estas nuevas derechas utilizan discursos que exacerban los miedos y ansiedades sociales para justificar acciones que pueden socavar las instituciones democráticas.

Ahora bien, el primer gran evento de los primeros días de mayo fue el debate presidencial no oficial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el cual se realizó el 1 de mayo en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, convocado con muy poca anticipación y bajo cuestionamientos sobre las garantías de seguridad y el cumplimiento de los protocolos sanitarios en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Los voceros de ambos partidos confirmaron el encuentro apenas horas antes, tras varias horas de negociación entre autoridades municipales y representantes de ambas candidaturas (El Comercio, 1 de mayo de 2021). El debate comenzó con mensajes generales y ataques mutuos, llevándose a cabo más como un mitin doble que como

un intercambio profundo de propuestas, con un formato improvisado debido a la falta de réplicas y la débil moderación (El Comercio, 2 de mayo de 2021). Las intervenciones incluyeron ataques directos entre ambos candidatos y culminaron con un breve enfrentamiento entre simpatizantes de ambos bandos. Considerando esto, el resultado fue ambivalente. Por un lado, Fujimori consiguió forzar el cara a cara con un contrincante que hasta entonces había evitado el enfrentamiento directo. Al mismo tiempo, este escenario le permitió a Castillo enfrentarse a su oponente en igualdad de condiciones, criticar su trayectoria pasada y reafirmar su narrativa de transformaciones estructurales para el país (Pajuelo Teves, 2021, pp. 176-177).

En los días siguientes, la encuesta nacional urbano-rural de Ipsos Perú mostraba que Pedro Castillo lideraba las preferencias con un 43%, mientras que Keiko Fujimori obtenía un 34%, reduciendo la brecha entre ambos a nueve puntos (El Comercio, 3 de mayo de 2021). Sin embargo, ambos candidatos enfrentaban un alto nivel de rechazo: el "antivoto" de Fujimori se redujo del 55% al 50%, mientras que el de Castillo aumentó del 33% al 36% (El Comercio, 3 de mayo de 2021).

Paralelamente, las conversaciones para definir la cantidad de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continuaron sin llegar a un acuerdo. Mientras que Fuerza Popular proponía cuatro debates (dos presidenciales, uno de vicepresidencias y uno de equipos técnicos), Perú Libre solo aceptaba dos (un debate presidencial y otro de candidatos a vicepresidencia) (El Comercio, 3 de mayo de 2021).

Mientras tanto, los apoyos políticos también jugaron un papel clave durante esta primera semana de mayo. Alianza para el Progreso (APP), Victoria Nacional y el Partido Popular Cristiano (PPC) expresaron su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori, señalando que su decisión se basaba en elegir el "mal menor" y en defender el modelo económico vigente frente al ideario marxista-leninista de Perú Libre (El Comercio, 3 de mayo de 2021). Por otro lado, como señala Pajuelo Teves (2021), las expectativas en torno a la unidad de la izquierda coincidieron sumado al ascenso del respaldo a Fujimori en las encuestas impulsaron a Verónica Mendoza, excandidata presidencial de Juntos por el Perú, a anunciar públicamente su apoyo a Castillo, tras una serie de conversaciones en las que se acordaron puntos comunes relacionados con la "refundación del país".

El respaldo de Mendoza a Castillo implicó también compromisos por parte de este último. Castillo firmó un acuerdo en el que se comprometía a respetar el marco jurídico vigente, dejar el poder en 2026 de ser elegido, y respetar los derechos humanos y la libertad de expresión, a pesar de que previamente había expresado intenciones de desactivar la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional (El

Comercio, 6 de mayo de 2021). Sin embargo, en temas como el enfoque de género, las diferencias entre Perú Libre y Juntos por el Perú eran evidentes. Castillo declaró que el enfoque de género no era una prioridad en su agenda, a pesar de que el acuerdo firmado garantizaba la igualdad y el respeto a las minorías (El Comercio, 7 de mayo de 2021).

Por otro lado, el discurso de Castillo se mantuvo contradictorio en relación con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Mientras Cerrón abogaba por la disolución del Congreso como una vía para una reforma total de la Constitución, Castillo intentó distanciarse de estas declaraciones, afirmando que "lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón no está en agenda" (El Comercio, 5 de mayo de 2021). Sin embargo, las muestras de cercanía entre ambos persistieron, como en la reunión que sostuvieron con el embajador de Rusia en el Perú.

En relación con los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el organismo anunció el que reduciría el número de debates propuestos de cuatro a dos, citando la cercanía de la fecha de los comicios y las dificultades logísticas para organizar un mayor número de encuentros antes del 6 de junio (El Comercio, 8 de mayo de 2021). En las negociaciones con los partidos, se acordó que habría un debate presidencial y otro entre los equipos técnicos, incluyendo a los candidatos a la vicepresidencia (El Comercio, 8 de mayo de 2021). Eduardo Bendezú, secretario nacional de prensa de Perú Libre, indicó que el partido estaba de acuerdo con realizar estos dos debates, mientras que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, expresó su preferencia por al menos un tercer debate, considerando insuficiente un solo encuentro entre los candidatos (El Comercio, 8 de mayo de 2021).

En una reunión de preacuerdo, se discutió también la posibilidad de realizar los debates de manera descentralizada, sugiriéndose que el debate presidencial se llevara a cabo fuera de Lima, mientras que el debate técnico se realizaría en la capital. Las fechas propuestas para ambos encuentros eran los dos últimos domingos de mayo, el 23 y el 30 (El Comercio, 9 de mayo de 2021).

Estas discusiones sobre la cantidad de debates y las posiciones de los candidatos reflejaban también la preocupación sobre los riesgos para la institucionalidad democrática en el Perú. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori representaban posibles amenazas a la democracia. Castillo había hablado explícitamente de cerrar instituciones clave como el Congreso y el Tribunal Constitucional, lo cual generaba preocupaciones sobre una posible ruta hacia el autoritarismo. Por otro lado, los antecedentes del fujimorismo, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, también mostraban intenciones de cooptar instituciones, como el

sistema de justicia, a través del control de nombramientos y la manipulación del Poder Judicial (El Comercio, 8 de mayo de 2021).

El politólogo Mauricio Zavaleta destacó que ambos candidatos representaban riesgos diferentes: en el caso de Castillo, se esperaba una confrontación directa contra las instituciones democráticas, mientras que Fujimori podría optar por un enfoque más gradual para debilitar la autonomía institucional. Asimismo, Zavaleta apuntó que Keiko Fujimori tenía más probabilidades de formar una coalición en el Congreso que le diera estabilidad, mientras que Castillo no contaría con el respaldo de los medios de comunicación ni de las fuerzas armadas para imponer una agenda autoritaria (El Comercio, 8 de mayo de 2021).

Otro evento significativo del fin de semana fue la audiencia judicial en la que se evaluó el recurso presentado por la defensa de Keiko Fujimori para anular el cierre de la investigación por presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular. La audiencia se llevó a cabo ante el juez Víctor Zúñiga Urday, quien debía decidir si el proceso retrocedía a la etapa de investigación o si continuaba con la etapa de control de acusación (El Comercio, 8 de mayo de 2021). El fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso, argumentó que la investigación había respetado el derecho a la defensa y que retroceder en el proceso afectaría la autonomía del Ministerio Público. Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló que el cierre de la investigación vulneraba el derecho de su defendida a presentar pruebas (El Comercio, 8 de mayo de 2021). La decisión final del juez podría tener un impacto significativo en la campaña electoral, ya que la candidata de Fuerza Popular enfrenta una posible condena de 30 años y 10 meses de prisión por varios delitos, incluyendo lavado de activos y obstrucción a la justicia.

Por su parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, generó gran controversia al declarar "muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo" durante una manifestación pública, lo cual fue severamente criticado por representantes de la sociedad civil (El Comercio, 9 de mayo de 2021). Las declaraciones de López Aliaga fueron calificadas como antidemocráticas y peligrosas por fomentar el odio y la violencia, especialmente al ser dichas frente a una multitud. Se sugirió que el Tribunal de Honor del JNE debería intervenir, a pesar de que Renovación Popular no había firmado el pacto ético electoral (El Comercio, 9 de mayo de 2021).

En medio de la tensión política, Alianza para el Progreso (APP) reafirmó su apoyo a Keiko Fujimori, entregando sus propuestas de campaña para ser incluidas en el plan de gobierno ampliado de Fuerza Popular. Aunque el respaldo de APP podría no representar un gran número de votos, Mauricio Zavaleta destacó que la

infraestructura partidaria de APP podría ser de gran utilidad para la campaña de Fujimori, especialmente a nivel subnacional (El Comercio, 9 de mayo de 2021).

Así, en un contexto donde ambos candidatos tienen una representación baja en el electorado, la reducción del "antivoto" ha sido un factor clave para intentar mover las cifras a favor de cada uno en la recta final de la campaña. Según encuestas realizadas por Ipsos, el antivoto de Keiko Fujimori se redujo en 5 puntos, mientras que el de Pedro Castillo aumentó en 3 (El Comercio, 10 de mayo de 2021). A pesar de esta reducción, Fujimori aún tenía un porcentaje de rechazo superior al que tuvo en las dos elecciones anteriores, y su "antivoto" fue uno de los elementos más característicos de su candidatura. En contraste, el rechazo hacia Castillo se mantenía en niveles inferiores a los de otros candidatos de segunda vuelta en los últimos 20 años. Asimismo, el potencial voto se mostró con un 53% para Castillo frente a un 42% para Fujimori (El Comercio, 10 de mayo de 2021).

Durante la segunda semana de mayo, los debates entre los candidatos continuaron siendo un tema central de discusión. Aunque se llegó a un preacuerdo para realizar dos debates, uno presidencial y otro con los equipos técnicos, los candidatos se lanzaron retos públicos que añadieron tensión a la negociación. Keiko Fujimori aceptó el reto de Castillo de debatir en la puerta del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, y propuso como fecha el sábado 15 de mayo. Sin embargo, el candidato de Perú Libre luego rechazó participar en el encuentro (El Comercio, 11 de mayo de 2021).

Mientras tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, exhortó a ambos candidatos a llegar a un acuerdo definitivo sobre los debates, insistiendo en que es fundamental que los electores puedan escuchar sus propuestas antes del 6 de junio (El Comercio, 12 de mayo de 2021). Finalmente, el 13 de mayo se alcanzó un acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular para realizar dos debates: uno con los equipos técnicos el 23 de mayo y otro con los candidatos presidenciales el 30 de mayo (El Comercio, 13 de mayo de 2021).

En el caso de Rafael López Aliaga, días atrás este había hecho polémicas declaraciones durante un mitin, gritando "muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo". Estas palabras fueron condenadas tanto por Keiko Fujimori como por representantes de Fuerza Popular, quienes buscaron distanciarse de sus declaraciones. Fujimori agradeció el respaldo de López Aliaga, pero dejó en claro que no compartía su mensaje violento (El Comercio, 10 de mayo de 2021). Pedro Castillo también rechazó las declaraciones, indicando que el empresario "había cruzado una línea" (El Comercio, 10 de mayo de 2021). Estas declaraciones llevaron a Vladimir Cerrón a presentar una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de grave

perturbación de la actividad pública e instigación en grado de tentativa (El Comercio, 11 de mayo de 2021).

Asimismo, el Partido Morado anunció que no respaldaría a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta. Según el excandidato Julio Guzmán, ambos generaban dudas sobre su capacidad para respetar el orden democrático y luchar contra la corrupción (El Comercio, 11 de mayo de 2021). A pesar de no apoyar públicamente a Castillo ni a Fujimori, el Partido Morado se mostró dispuesto a colaborar de manera técnica con ambos partidos si se llegaba a algún acuerdo.

Por otro lado, el apoyo al candidato Pedro Castillo continuó creciendo. Ricardo Repetto, hijo de la esposa de Antauro Humala, confirmó que el movimiento etnocacerista brindaría apoyo activo a la candidatura de Castillo, destacando que las bases etnocaceristas pasarían a ser parte del respaldo a Perú Libre (El Comercio, 13 de mayo de 2021). Además, se confirmó que el Frente Amplio, liderado por Marco Arana, firmó un acuerdo político con Castillo que incluía puntos como la convocatoria a un referéndum para una nueva constitución y reformas en educación y salud (El Comercio, 14 de mayo de 2021).

En medio de estos desarrollos, Keiko Fujimori solicitó al juez Víctor Zúñiga permiso para viajar a Quito del 22 al 24 de mayo, con el fin de participar en el Foro Iberoamericano "Desafíos de la Libertad" organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y dirigido por Mario Vargas Llosa (El Comercio, 13 de mayo de 2021). El fiscal José Domingo Pérez se opuso a esta solicitud, argumentando que Fujimori se encontraba bajo restricciones legales y que existía un riesgo de fuga (El Comercio, 14 de mayo de 2021). Fujimori, por su parte, declaró que no había riesgo de fuga y que esperaba la decisión del juez.

La campaña de Pedro Castillo también experimentó tensiones internas, principalmente entre los comandos regionales del partido, cercanos a Vladimir Cerrón, y los nuevos simpatizantes y responsables de la campaña en cada región. Castillo decidió reprogramar sus viajes al sur para enfocarse en la organización de su plan de gobierno y abordar las prioridades del país. Estas tensiones también se reflejaron en la indefinición sobre el equipo técnico que lo acompañaría en un eventual gobierno (El Comercio, 13 de mayo de 2021).

Pedro Castillo y el Frente Amplio acordaron reforzar la colaboración durante la campaña, lo cual incluía apoyo técnico y logístico. Además, Castillo sostuvo una serie de encuentros con científicos y especialistas, incluyendo a Modesto Montoya, para definir propuestas concretas en diversas áreas (El Comercio, 13 de mayo de 2021). También se anunció el desarrollo del "Plan 200", un proyecto que detalla las acciones que se llevarían a cabo durante los primeros doscientos días de gobierno de Castillo,

y que habría contado con la colaboración de Miguel del Castillo, hijo del exministro aprista Jorge del Castillo (El Comercio, 14 de mayo de 2021).

Finalmente, en el ámbito judicial, el Poder Judicial rechazó el recurso de amparo presentado por el expresidente Martín Vizcarra contra su inhabilitación para ejercer cargos públicos debido al caso Vacunagate, lo cual lo dejó sin posibilidad de asumir como legislador por Somos Perú (El Comercio, 13 de mayo de 2021). Vizcarra anunció que apelaría la decisión, aunque expertos consideraron que no podría participar en los próximos cinco procesos electorales (El Comercio, 13 de mayo de 2021).

Así, en un contexto donde ambos candidatos tienen una representación baja en el electorado, la reducción del "antivoto" ha sido un factor clave para intentar mover las cifras a favor de cada uno en la recta final de la campaña. Según encuestas realizadas por Ipsos, el antivoto de Keiko Fujimori se redujo en 5 puntos, mientras que el de Pedro Castillo aumentó en 3 (El Comercio, 10 de mayo de 2021). A pesar de esta reducción, Fujimori aún tiene un porcentaje de rechazo superior al que tuvo en las dos elecciones anteriores, y su "antivoto" ha sido uno de los elementos más característicos de su candidatura. En contraste, el rechazo hacia Castillo se mantiene en niveles inferiores a los de otros candidatos de segunda vuelta en los últimos 20 años. Asimismo, el potencial voto se mostró con un 53% para Castillo frente a un 42% para Fujimori (El Comercio, 10 de mayo de 2021).

Durante la segunda semana de mayo, los debates entre los candidatos continuaron siendo un tema central de discusión. Aunque se llegó a un preacuerdo para realizar dos debates, uno presidencial y otro con los equipos técnicos, los candidatos se lanzaron retos públicos que añadieron tensión a la negociación. Keiko Fujimori aceptó el reto de Castillo de debatir en la puerta del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, y propuso como fecha el sábado 15 de mayo. Sin embargo, el candidato de Perú Libre luego rechazó participar en el encuentro (El Comercio, 11 de mayo de 2021).

Mientras tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, exhortó a ambos candidatos a llegar a un acuerdo definitivo sobre los debates, insistiendo en que es fundamental que los electores puedan escuchar sus propuestas antes del 6 de junio (El Comercio, 12 de mayo de 2021). Finalmente, el 13 de mayo se alcanzó un acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular para realizar dos debates: uno con los equipos técnicos el 23 de mayo y otro con los candidatos presidenciales el 30 de mayo (El Comercio, 13 de mayo de 2021).

En el caso de Rafael López Aliaga, días atrás este había hecho polémicas declaraciones durante un mitin, gritando "muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a

Castillo". Estas palabras fueron condenadas tanto por Keiko Fujimori como por representantes de Fuerza Popular, quienes buscaron distanciarse de sus declaraciones. Fujimori agradeció el respaldo de López Aliaga, pero dejó en claro que no compartía su mensaje violento (El Comercio, 10 de mayo de 2021). Pedro Castillo también rechazó las declaraciones, indicando que el empresario "había cruzado una línea" (El Comercio, 10 de mayo de 2021). Estas declaraciones llevaron a Vladimir Cerrón a presentar una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de grave perturbación de la actividad pública e instigación en grado de tentativa (El Comercio, 11 de mayo de 2021).

Asimismo, el Partido Morado anunció que no respaldaría a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta. Según el excandidato Julio Guzmán, ambos generaban dudas sobre su capacidad para respetar el orden democrático y luchar contra la corrupción (El Comercio, 11 de mayo de 2021). A pesar de no apoyar públicamente a Castillo ni a Fujimori, el Partido Morado se mostró dispuesto a colaborar de manera técnica con ambos partidos si se llegaba a algún acuerdo.

Por otro lado, el apoyo al candidato Pedro Castillo continuó creciendo. Ricardo Repetto, hijo de la esposa de Antauro Humala, confirmó que el movimiento etnocacerista brindaría apoyo activo a la candidatura de Castillo, destacando que las bases etnocaceristas pasarían a ser parte del respaldo a Perú Libre (El Comercio, 13 de mayo de 2021). Además, se confirmó que el Frente Amplio, liderado por Marco Arana, firmó un acuerdo político con Castillo que incluía puntos como la convocatoria a un referéndum para una nueva constitución y reformas en educación y salud (El Comercio, 14 de mayo de 2021).

En medio de estos desarrollos, Keiko Fujimori solicitó al juez Víctor Zúñiga permiso para viajar a Quito del 22 al 24 de mayo, con el fin de participar en el Foro Iberoamericano "Desafíos de la Libertad" organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y dirigido por Mario Vargas Llosa (El Comercio, 13 de mayo de 2021). El fiscal José Domingo Pérez se opuso a esta solicitud, argumentando que Fujimori se encontraba bajo restricciones legales y que existía un riesgo de fuga (El Comercio, 14 de mayo de 2021). Fujimori, por su parte, declaró que no había riesgo de fuga y que esperaba la decisión del juez.

La campaña de Pedro Castillo también experimentó tensiones internas, principalmente entre los comandos regionales del partido, cercanos a Vladimir Cerrón, y los nuevos simpatizantes y responsables de la campaña en cada región. Castillo decidió reprogramar sus viajes al sur para enfocarse en la organización de su plan de gobierno y abordar las prioridades del país. Estas tensiones también se reflejaron en

la indefinición sobre el equipo técnico que lo acompañaría en un eventual gobierno (El Comercio, 13 de mayo de 2021).

Pedro Castillo y el Frente Amplio acordaron reforzar la colaboración durante la campaña, lo cual incluía apoyo técnico y logístico. Además, Castillo sostuvo una serie de encuentros con científicos y especialistas, incluyendo a Modesto Montoya, para definir propuestas concretas en diversas áreas (El Comercio, 13 de mayo de 2021). También se anunció el desarrollo del "Plan 200", un proyecto que detalla las acciones que se llevarían a cabo durante los primeros doscientos días de gobierno de Castillo, y que habría contado con la colaboración de Miguel del Castillo, hijo del exministro aprista Jorge del Castillo (El Comercio, 14 de mayo de 2021).

En el ámbito judicial, el Poder Judicial rechazó el recurso de amparo presentado por el expresidente Martín Vizcarra contra su inhabilitación para ejercer cargos públicos debido al caso Vacunagate, lo cual lo dejó sin posibilidad de asumir como legislador por Somos Perú (El Comercio, 13 de mayo de 2021). Vizcarra anunció que apelaría la decisión, aunque expertos consideraron que no podría participar en los próximos cinco procesos electorales (El Comercio, 13 de mayo de 2021).

Por su parte, Pedro Castillo anunció que el sábado 15 de mayo presentaría las propuestas de su plan de gobierno para los primeros 100 días de una posible gestión. Sin embargo, en el evento realizado en la Plaza Manco Cápac, el candidato no llegó a detallar dichas propuestas, limitándose a presentar a algunos de los integrantes de su equipo técnico. Entre ellos se encontraban Hernando Cevallos, quien lideraría el área de salud; Juan Pari, encargado de la reactivación económica; y Celeste Rosas, responsable de temas de producción y desarrollo (El Comercio, 16 de mayo de 2021). Castillo también mencionó al exfiscal Avelino Guillén y al físico Modesto Montoya como parte de su equipo, aunque no estuvieron presentes en el mitin. A pesar de la falta de detalles en sus propuestas, Castillo se comprometió a tomar medidas urgentes para los primeros 100 días de gobierno, enfocándose en la pandemia y la reactivación económica (El Comercio, 16 de mayo de 2021).

Al mismo tiempo, Keiko Fujimori llevó a cabo una acción simbólica, esperando durante más de media hora a su contendor Pedro Castillo en el exterior del Penal de Mujeres de Chorrillos para un debate que había sido planteado previamente por el candidato de Perú Libre. La candidata de Fuerza Popular armó un estrado y se sentó a esperar a Castillo, quien había confirmado con antelación que no acudiría al encuentro, continuando su campaña en el distrito de La Victoria. A pesar de la ausencia de su oponente, Fujimori aprovechó la situación para realizar un mitin, el cual incluyó la participación de su hermano menor, Kenji Fujimori, quien había estado

alejado de la vida política durante los últimos meses (El Comercio, 16 de mayo de 2021).

En cuanto a los preparativos para los debates oficiales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los partidos Perú Libre y Fuerza Popular continuaron afinando los detalles para los dos encuentros que se realizarían antes de la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Las ciudades y las temáticas de los debates ya habían sido definidas, y se acordó que el debate presidencial tendría lugar en Arequipa, mientras que el debate técnico se llevaría a cabo en Lima el 23 de mayo (El Comercio, 15 de mayo de 2021). La modalidad de ambos encuentros incluiría bloques temáticos, exposiciones individuales de tres minutos y preguntas entre los candidatos, además de un bloque de "Pregunta Ciudadana" (El Comercio, 15 de mayo de 2021).

El ámbito de los sondeos electorales también reflejó cambios significativos durante ese fin de semana. Según un simulacro de votación realizado el 14 de mayo, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se había reducido al margen de error, lo cual mostraba un empate estadístico. Castillo lideraba en el interior del país con un 60% de los votos, mientras que Fujimori mantenía una fuerte ventaja en Lima con un 65.3% (El Comercio, 16 de mayo de 2021). Además, se observó una disminución del "antivoto" de Fujimori y un crecimiento del rechazo hacia Castillo, lo cual reflejaba los esfuerzos de ambas campañas por cambiar la percepción del electorado en la recta final de la contienda.

Aquí se debe considerar que uno de los episodios que evidencia más claramente los cambios dentro de la derecha peruana durante este mes es el protagonizado por Rafael López Aliaga, quien al declarar públicamente "muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo" mostró un nivel de hostilidad hacia sus opositores políticos no visto en anteriores procesos electorales. Esto se alinea con la definición de derecha populista radical que señala Mudde (2007), concretamente en su dimensión autoritaria, por la cual el orden establecido se mantendría mediante una represión severa de aquellos percibidos como amenazas. Asimismo, como mencionan Mayka y Smith (2021), estos actores utilizan marcos discursivos que enfatizan temas como el patriotismo, la seguridad y la oposición a ideologías percibidas como amenazas al orden social, lo cual les permite movilizar a una base más amplia y desafiar las propuestas progresistas, adoptando incluso el lenguaje de los derechos para legitimar sus demandas. Sin embargo, la reacción de la sociedad civil y de otros actores políticos, que calificaron estas expresiones como antidemocráticas y peligrosas, mostró la creciente tensión entre este tipo de discursos y los valores democráticos que este tipo de líderes decían defender.

En el caso de Fuerza Popular, si bien Keiko Fujimori buscó distanciarse de las declaraciones de López Aliaga, insistió en utilizar la narrativa del anticomunismo como elemento central de su campaña. De forma similar a la narrativa de las nuevas derechas en otros contextos, el fujimorismo recurrió a una dicotomía simple: la defensa de la "patria" contra la "amenaza comunista". La adopción de símbolos nacionales, como los colores de la bandera y la camiseta de la selección nacional era parte de este uso estratégico de un framing o enmarcamiento unificador que buscaba vincular la candidatura fujimorista con el patriotismo, llamando a los votantes a "ponerse la camiseta del Perú". En relación a esto, Mayka y Smith (2021) también señalan que el uso de estos marcos discursivos es común en las derechas de base latinoamericanas, que buscan unificar diversos grupos bajo una causa común mediante el uso de tácticas de movilización masiva y estrategias como la repolitización de identidades religiosas y nacionales para construir un frente contra las propuestas progresistas. En relación al fenómeno estudiado en concreto, los respaldos de Alianza para el Progreso, Victoria Nacional y el PPC hacia Fujimori evidenciaron la efectividad de estas narrativas en construir su candidatura como la "alternativa democrática" en esta segunda vuelta.

Por otra parte, durante la tercera semana de mayo de 2021, las tensiones crecían en torno a los esfuerzos de ambos candidatos por afianzar sus posiciones de cara a la segunda vuelta presidencial. Por una parte, Pedro Castillo difundió parte de su nuevo programa, el "Plan de Gobierno Perú al Bicentenario Sin corrupción", concebido como una hoja de ruta para los primeros cien días y organizado en torno a cuatro prioridades: control de la pandemia, reactivación económica, reapertura progresiva de los colegios y apertura de un itinerario hacia el cambio constitucional mediante referéndum (El Comercio, 17 de mayo de 2021). Estas propuestas diferían del ideario original de Perú Libre y contemplaban cambios como la nacionalización de recursos mediante regalías y nuevos impuestos, lo que suponía un esfuerzo por moderar su imagen sin renunciar a la crítica del modelo vigente. Además, basándose en una interpretación de la Ley General de Salud, mencionó la posibilidad de utilizar recursos tanto del sector público como privado para frenar la pandemia si fuera necesario. Pese a estas promesas, varios analistas consideraron que el candidato había alcanzado su techo electoral y que su falta de claridad acerca de los integrantes de su equipo técnico y de su plan de gobierno afectaba a su crecimiento en las encuestas (El Comercio, 17 de mayo de 2021).

Mientras tanto, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, mostró un ascenso en las encuestas, alcanzando el 37% de intención de voto frente al 40% de Castillo, reduciendo la brecha a solo tres puntos porcentuales (El Comercio, 17 de mayo de 2021). Según especialistas como Paula Távara, esto se habría debido en

parte a los errores de Castillo y a la falta de un plan de gobierno claro, lo que favoreció a Fujimori, especialmente en el norte del país, donde logró captar más votos de los indecisos. Los analistas también señalaron que la activación del antifujimorismo podría ser determinante en el cierre de la campaña, ya que la polarización entre ambos candidatos seguía siendo un factor crucial (El Comercio, 17 de mayo de 2021).

El 17 de mayo, ambos candidatos firmaron la "Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia", un compromiso de 12 puntos para garantizar el respeto a la democracia y la institucionalidad. Entre los puntos acordados se encontraban la defensa de los derechos humanos, el respeto a los poderes del Estado y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este acto fue considerado por muchos como un gesto principalmente protocolar y limitado, ya que los antecedentes de ambos candidatos, sus partidos y sus allegados generaban dudas sobre su voluntad real de cumplir con dichos compromisos (El Comercio, 18 de mayo de 2021).

Una de las mayores controversias de la semana involucró a Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, quien en un audio difundido por Willax Televisión afirmó que si el partido llegaba al poder, no lo dejaría (El Comercio, 18 de mayo de 2021). Bermejo confirmó que se trataba de su voz, aunque alegó que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. Estas afirmaciones fueron a su vez rechazadas por representantes de los partidos aliados de Perú Libre, como Juntos por el Perú y el Frente Amplio (El Comercio, 19 de mayo de 2021). A pesar de la presión pública, Pedro Castillo evitó referirse directamente a Bermejo o tomar medidas en su contra, lo cual generó críticas por parte de sus opositores, incluyendo a Keiko Fujimori, quien cuestionó su falta de contundencia al deslindar de tales expresiones.

Por otra parte, durante un mitin en Puente Piedra, Castillo presentó a los nuevos integrantes de su equipo técnico, incluyendo a Hernando Cevallos, Juan Pari, Celeste Rosas, y a la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, entre otros. También se incorporaron al equipo el exfiscal Avelino Guillén, el exprocurador Julio Arbizu, y la exjefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú, Anahí Durand, quienes se encargarían de coordinar temas relacionados con la justicia y la lucha anticorrupción (El Comercio, 19 de mayo de 2021). De forma paralela, Keiko Fujimori presentó a su equipo ampliado, compuesto por varios políticos y profesionales de distintos sectores, entre los cuales se encontraban Carlos Bruce, Francisco Tudela y Óscar Valdés, quienes aportarían experiencia en diferentes áreas de gestión pública (El Comercio, 19 de mayo de 2021).

La semana también estuvo marcada por denuncias de agresiones contra periodistas que cubrían las actividades de Castillo. En Ayacucho, un grupo de simpatizantes de Perú Libre atacó a periodistas tras declaraciones del candidato en

las que señaló que daría a conocer los sueldos de quienes conducían programas de televisión. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones vinculadas a la prensa rechazaron estos actos de violencia y alertaron sobre la escalada de ataques contra la prensa durante la campaña electoral (El Comercio, 21 de mayo de 2021). Aunque rechazó los ataques, el candidato de Perú Libre no emitió un pronunciamiento contundente, y posteriormente borró un tuit en el que tuvo expresiones agraviantes hacia los medios de comunicación. Estos incidentes podrían afectar la percepción pública de la campaña de Castillo, mostrando un entorno menos tolerante hacia la prensa y generando preocupación sobre su compromiso con la libertad de expresión.

Finalmente, se confirmó que los debates entre los candidatos se realizarían el 23 y 30 de mayo. El primero estaría dedicado a los equipos técnicos, mientras que el segundo sería entre los candidatos presidenciales. La organización de estos encuentros estuvo marcada por desacuerdos y dificultades para llegar a un consenso sobre las fechas y la modalidad, pero finalmente se logró acordar la realización de ambos debates con el objetivo de que los electores pudieran conocer las propuestas de cada partido antes del 6 de junio (El Comercio, 21 de mayo de 2021).

En esta etapa de la campaña electoral, la cohesión interna de las agrupaciones en competencia también era puesta en cuestión. Aunque el fujimorismo se presentaba unido, al menos en apariencia, con la reconciliación entre la candidata Keiko Fujimori, su padre Alberto Fujimori, y su hermano Kenji Fujimori, las divisiones dentro de la bancada emergente eran evidentes. Los congresistas independientes que se sumaron recientemente al fujimorismo, como Ernesto Bustamante, mostraban discrepancias con otros miembros de la bancada. Entre los albertistas, destacaban figuras como Martha Moyano y Alejandro Aguinaga, quienes mantenían diferencias con el equipo de Keiko Fujimori, particularmente con Fernando Rospigliosi (El Comercio, 22 de mayo de 2021). Por otro lado, Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia de Perú Libre, reafirmaba su cercanía a Pedro Castillo y sus diferencias con Vladimir Cerrón (El Comercio, 23 de mayo de 2021).

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también empezaba a ser objeto de críticas. Un grupo de congresistas de Acción Popular presentó una moción para exigir la renuncia de su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, debido a supuestos vínculos pasados con movimientos de izquierda radical y decisiones cuestionadas en casos previos, como el del expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, la ley orgánica del JNE establece que el cargo de miembro del pleno es irrenunciable durante los procesos electorales, por lo que dichas exigencias no tenían sustento legal (El Comercio, 22 de mayo de 2021).

En cuanto a las actividades de campaña, Keiko Fujimori anunció que viajaría a Huancayo para "buscar" a Vladimir Cerrón, quien se encontraba en esa ciudad. Aunque luego aclaró que se trataba de una afirmación metafórica, la candidata fujimorista se refirió a Cerrón como "un maltratador de mujeres" y lo criticó por su gestión en Junín, así como por una publicación ofensiva hacia la deportista Inés Melchor (El Comercio, 22 de mayo de 2021). En paralelo, Pedro Castillo realizó un mitin en Manchay, donde reiteró su propuesta de eliminar la "planilla dorada" que beneficia a altos funcionarios del Estado (El Comercio, 22 de mayo de 2021).

Asimismo, según el periodista Fernando Vivas, la campaña de Keiko Fujimori incorporó un cambio de imagen deliberado: en la primera vuelta relegó el color naranja característico de su partido y optó por vestir de blanco, buscando proyectar una imagen de limpieza y renovación personal. Sin embargo, para la segunda vuelta, añadió el rojo al adoptar como símbolo la camiseta de la selección peruana de fútbol, prenda que terminó ocupando un lugar central en la iconografía de su campaña. Esta estrategia se consolidó con la publicación de un video el 22 de abril, en el que Fujimori reconocía su desventaja en las encuestas y convocaba a una unidad nacional "por encima de ella" frente al comunismo, mientras se intercalaban imágenes de la clasificación de la selección peruana al mundial de Rusia 2018 (El Comercio, 23 de mayo de 2021). Es decir, la campaña fujimorista dejó de centrarse en temas económicos, que fueron relevantes en la primera vuelta, y comenzaba a girar hacia una narrativa de defensa de la patria, alimentando el temor al comunismo como una amenaza extranjera que podría destruir la esencia nacional. Sin embargo, Castillo también recurrió con frecuencia a recursos visuales, como polos y casacas con el logotipo de la Marca Perú, aunque no de manera tan sistemática como su competidora. Así, mientras Fujimori se presentaba como defensora de la continuidad del orden político y económico vigente desde la década de 1990, Castillo buscaba cuestionar dicho orden con un relato en el que los sectores populares y rurales aparecían como actores llamados a salvar al país (Pajuelo Teves, 2021, p. 174).

El debate entre equipos técnicos del 23 de mayo, organizado por el JNE como antesala al debate presidencial del domingo 30, reunió a representantes de Perú Libre y Fuerza Popular para exponer sus propuestas en seis ejes: reforma del Estado, recuperación económica, salud, desarrollo regional, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente. Entre las propuestas presentadas por Perú Libre destacaron la convocatoria para elaborar una nueva Constitución (Dina Boluarte), el acceso al crédito para emprendedores informales (Juan Pari), una campaña masiva de vacunación (Hernando Cevallos), la reactivación de proyectos inconclusos (Andrés Alencastre), la prevención de delitos con el apoyo de las rondas campesinas (Avelino Guillén) y una minería respetuosa con el medio ambiente (Celeste Rosas). Por su

parte, Fuerza Popular propuso un gobierno digital (Patricia Juárez), la ampliación de Pensión 65 (Luis Carranza), pruebas moleculares y vacunación masiva (José Recoba), destrabar proyectos mediante contratos gobierno a gobierno (Carlos Bruce), reforzar la seguridad ciudadana con patrullaje inteligente (Fernando Rospigliosi) y avanzar hacia energías renovables y una bioeconomía (Hernando Guerra García) (El Comercio, 24 de mayo de 2021). Un balance del encuentro mostraba que el equipo técnico fujimorista logró presentar un discurso más coherente y encadenado, mientras que las intervenciones del equipo de Perú Libre resultaron más dispersas y con menor consistencia interna, especialmente en los bloques dedicados a la política económica y la agenda ambiental (Pajuelo Teves, 2021, p. 181).

Al día siguiente, se publicaron los resultados de un simulacro de votación realizado por Ipsos para América Televisión, que mostraba a Pedro Castillo aventajando a Keiko Fujimori por 5.2 puntos porcentuales, obteniendo el 52.6% de los votos válidos frente al 47.4% de su contrincante de Fuerza Popular, lo que lo colocaba por encima del margen de error. Castillo lideraba en todas las regiones del país excepto en Lima, donde Fujimori alcanzaba el 78.1% de los votos. En el interior del país, Castillo obtenía un 63.7% frente al 36.3% de Fujimori, con amplias ventajas en el centro, sur y oriente del país (El Comercio, 24 de mayo de 2021).

A nivel nacional, el contexto de tensión se agravó con una violenta matanza ocurrida la noche del 23 de mayo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), atribuida al Militarizado Partido Comunista del Perú, conformado por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico. El ataque, que se llevó a cabo en dos cantinas del distrito de Vizcatán del Ene, dejó al menos dieciséis muertos, incluidos dos niños, y fue considerado uno de los más graves de los últimos años. Los atacantes dejaron panfletos llamando a boicotear las elecciones del 6 de junio, advirtiendo sobre la ejecución de "elementos de mal vivir" y amenazando a aquellos que votaran por Keiko Fujimori (El Comercio, 25 de mayo de 2021). La respuesta de las autoridades y candidatos no se hizo esperar; Pedro Castillo condenó enérgicamente el ataque, mientras que Keiko Fujimori señaló que los terroristas buscaban generar miedo en la población (El Comercio, 25 de mayo de 2021).

Por otro lado, Keiko Fujimori presentó a nuevos miembros de su equipo técnico, incluyendo a Carlos Neuhaus, militante del Partido Popular Cristiano y conocido por su gestión de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Fujimori destacó que Neuhaus tendría un papel clave en la ejecución de obras públicas en un eventual gobierno suyo (El Comercio, 24 de mayo de 2021). Asimismo, Fujimori participó mediante un video pregrabado en el Foro Iberoamericano "Desafíos de la libertad", organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y presidido por Mario Vargas Llosa, donde

reiteró su compromiso con la democracia y alertó sobre el peligro del proyecto político de su rival, al que calificó de comunista (El Comercio, 24 de mayo de 2021).

El sábado 29 de mayo se reveló que un total de 249 militantes de Perú Libre habían firmado los planillones del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), organismo de fachada de Sendero Luminoso, durante su intento de inscripción como partido político en 2011. Entre ellos figuraban Hilso Ramos y Marilú Yanarico, quienes fueron candidatos al Congreso por Perú Libre en las elecciones de 2021, aunque no resultaron elegidos (El Comercio, 29 de mayo de 2021). Esta noticia generó una fuerte reacción de críticos del partido de Castillo, quienes señalaron la presunta influencia del Movadef dentro de la agrupación.

Hilso Ramos, en respuesta, negó cualquier vinculación con el Movadef y atribuyó su firma a un simple acto de recolección de firmas sin compromiso ideológico (El Comercio, 29 de mayo de 2021). Sin embargo, al día siguiente se conocieron nuevas vinculaciones entre militantes de Perú Libre y el Movadef. Dos personas adicionales del padrón de afiliados del partido de Castillo fueron identificadas como miembros de los comités del Movadef en 2011, lo cual reforzó las críticas hacia el entorno del candidato de izquierda (El Comercio, 30 de mayo de 2021). Todas estas polémicas hicieron que aumentaran los ataques hacia la campaña de Castillo, y a pesar de sus esfuerzos por deslindar del terrorismo, el "terruqueo" continuó siendo utilizado como recurso por sus oponentes.

En paralelo, los candidatos presidenciales se preparaban para el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se llevaría a cabo el domingo 30 de mayo en Arequipa. La llegada de ambos aspirantes estuvo marcada por contrastes en el recibimiento que recibieron. Pedro Castillo fue acogido por una multitud de simpatizantes, incluyendo reservistas etnocaceristas que actuaron como su resguardo, mientras que Keiko Fujimori enfrentó incidentes en los que detractores lanzaron frutas y piedras contra los vehículos de su comitiva, además de agredir a periodistas presentes en el lugar (El Comercio, 29 de mayo de 2021).

El simulacro de votación realizado el 30 de mayo mostraba que la diferencia entre los candidatos se había reducido, con Pedro Castillo obteniendo el 51.1% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 48.9%. Castillo lideraba en las regiones del interior del país, mientras que Fujimori dominaba en Lima (El Comercio, 30 de mayo de 2021). Ambos candidatos llegaban al debate con promesas electorales que habían sido reiteradas durante sus mitines, aunque sin explicar cómo se llevarían a cabo en la práctica. Según el politólogo Mauricio Zavaleta, para los candidatos era más conveniente políticamente generar miedo o criticar al oponente que sustentar sus propuestas con detalles técnicos (El Comercio, 30 de mayo de 2021).

Respecto al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este se llevó a cabo el domingo 30 de mayo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y fue un momento decisivo en la campaña. Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentaron en seis bloques temáticos, intercambiando propuestas y ataques políticos. Fujimori se mostró más segura y estructurada, apoyándose en su experiencia previa en debates, mientras que Castillo, pese a sus intentos de preparación, mostró nerviosismo y cometió errores que los medios resaltaron. En un gesto simbólico, Fujimori llevó al debate una piedra, refiriéndose a los ataques que su caravana había recibido por parte de simpatizantes de Castillo (El Comercio, 31 de mayo de 2021).

Durante el debate, Castillo presentó propuestas como una economía popular de mercado, acceso al crédito para emprendedores informales, una campaña masiva de vacunación, reactivación de proyectos de infraestructura, prevención de delitos, minería sostenible, y promover la inclusión social y de género. Por su parte, Fujimori desplegó propuestas como un gobierno digital, duplicar Pensión 65, incrementar la vacunación mediante centros accesibles como farmacias y colegios, destrabar proyectos con contratos gobierno a gobierno, mejorar la seguridad ciudadana con patrullaje inteligente y avanzar hacia energías renovables. Sin embargo, los analistas cuestionaron la falta de detalles concretos en ambas candidaturas.

Analizando los hechos de esta parte del mes, un evento clave fue la mencionada masacre en Vizcatán del Ene, en el VRAEM, donde 16 personas fueron asesinadas por remanentes de Sendero Luminoso, lo cual fue utilizado por la campaña de Keiko Fujimori para intensificar su retórica anticomunista, vinculando a su oponente con grupos extremistas e incluso filoterroristas. Y es que desde la campaña de Castillo tampoco se ayudaba a despejar estas dudas, ya que declaraciones como las de Guillermo Bermejo respecto a que si obtenían el poder no lo iban a dejar evidenciaban también un compromiso limitado con los principios democráticos. Asimismo, se reveló que varios miembros de Perú Libre estaban vinculados al Movadef, organización de fachada de Sendero Luminoso. Estas situaciones generaban temores respecto a que un posible gobierno de Castillo no iba a respetar las reglas de juego democráticas, de forma similar a países como Venezuela o Cuba.

En este escenario, en lugar de limitarse a diferenciarse programáticamente de su contendor, la campaña de Keiko Fujimori se reconfiguró para presentarse como garante del orden democrático y de la seguridad nacional, asociando la eventual llegada de Castillo al poder con el “comunismo chavista” y el retorno del terrorismo. Con esto, Fujimori buscaba consolidar una base más amplia, utilizando el miedo y el patriotismo como elementos unificadores. Este posicionamiento se apoyó en una

intensa ofensiva comunicativa que combinaba propaganda electoral, intervenciones directas de la candidata y una cobertura favorable en los principales medios. En este contexto, el “terruqueo” se convirtió en uno de los ejes centrales del discurso opositor a Castillo, que fue reproducido y amplificado por otros actores políticos y grupos de poder aliados a la candidatura fujimorista (Pajuelo Teves, 2021). Sin embargo, estas tácticas también contribuyeron a exacerbar las tensiones sociales y la polarización ya existentes, evidenciadas en los enfrentamientos y actos de violencia desde ambos bandos durante la campaña de segunda vuelta.

Aquí resulta útil el concepto de miedo político desarrollado por Corey Robin, quien lo entiende como el uso del miedo como instrumento de movilización y control en la competencia política, sobre todo cuando se basa en el “temor de la gente a que su bienestar colectivo resulte perjudicado” (Robin, 2018, citado en Pajuelo Teves, 2021, p. 176). En un contexto como el señalado, la repolitización de símbolos e identidades nacionales, el uso de estas narrativas centradas en amenazas existenciales y la adopción de una lógica de asedio frente al adversario no solo profundizaron la polarización entre los votantes, sino que debilitaron aún más los ya frágiles principios de pluralismo y debate abierto en la democracia peruana.

En los días siguientes de la primera semana de junio, Pedro Castillo dio declaraciones controvertidas en Puno sobre la violencia de género, al sugerir que los feminicidios estarían vinculados a la “ociosidad que genera el Estado”. Estas expresiones generaron críticas incluso entre quienes respaldaban su candidatura: Ruth Luque, congresista electa por Juntos por el Perú, cuestionó públicamente dichas afirmaciones y subrayó la necesidad de una agenda clara para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Esto puso de manifiesto las fricciones programáticas dentro de la alianza entre Perú Libre y Juntos por el Perú, en particular con el bloque de Nuevo Perú. Por otra parte, Keiko Fujimori realizó un acto en Arequipa donde firmó un “juramento por la democracia”, avalado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa y el opositor venezolano Leopoldo López, con el propósito de reforzar su imagen como defensora de las libertades democráticas (El Comercio, 1 de junio de 2021).

La prensa también reveló información comprometedor sobre el partido de Castillo. Se informó que 545 militantes de Perú Libre habían sido contratados como proveedores por el gobierno regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón (El Comercio, 3 de junio de 2021), generando aún más controversia en torno a su figura. Por otro lado, la semana también estuvo marcada por las restricciones electorales que comenzaron a regir, prohibiendo la difusión de encuestas y la realización de propaganda política en los días previos a la elección (El Comercio, 31 de mayo de 2021).

El cierre de campaña de ambos candidatos el 3 de junio estuvo marcado por el cambio de locaciones debido a la negativa de las autoridades de permitir actos multitudinarios en la Plaza San Martín debido a las restricciones sanitarias. Castillo cerró su campaña en la Plaza Dos de Mayo con un discurso lleno de promesas, entre ellas el respetar el orden democrático, recuperar los recursos estratégicos y convocar una Asamblea Constituyente. Por su parte, Fujimori celebró su último mitin en Villa El Salvador, respaldada por políticos afines y simpatizantes, en el cual ratificó el encuadre que había construido en semanas previas: presentar la candidatura de Castillo como manifestación del “comunismo” y su propia postulación como una defensa de la democracia, apoyándose en la idea de que el país enfrentaba una encrucijada crítica más que una contienda electoral convencional (El Comercio, 4 de junio de 2021).

Asimismo, en esta recta final de la campaña, ambos candidatos se enfocaron en organizar a sus personeros para asegurar la defensa del voto el día de la elección. Fuerza Popular contaba con el apoyo de aliados como Alianza para el Progreso y Renovación Popular, mientras que Perú Libre, de forma menos organizada, buscaba el apoyo de simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú y Frente Amplio (El Comercio, 3 de junio de 2021). Adicionalmente, se reveló que algunos coordinadores de personeros de Perú Libre habían firmado planillones del Movadef, lo cual generó más críticas hacia la agrupación por la posible vinculación con el movimiento prosenderista (El Comercio, 4 de junio de 2021).

Finalmente, el 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú, en la cual Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se disputaban la presidencia. Más de 25 millones de peruanos pudieron votar en un horario extendido, con medidas preventivas para evitar aglomeraciones debido a la pandemia de COVID-19 (El Comercio, 6 de junio de 2021). La ONPE estableció más de 11 000 locales de votación a nivel nacional, lo cual representó un gran esfuerzo logístico para garantizar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto de manera segura y ordenada (El Comercio, 6 de junio de 2021).

La jornada de Pedro Castillo comenzó temprano con un desayuno electoral junto a su familia y simpatizantes, mostrando confianza en que los resultados le serían favorables. Posteriormente, se dirigió al Colegio Salomón Díaz, en Tacabamba, Cajamarca, donde emitió su voto y saludó a la población que lo acompañaba (El Comercio, 6 de junio de 2021). Keiko Fujimori, por su parte, comenzó la jornada con un desayuno en San Juan de Lurigancho, acompañada por su familia, incluyendo a su madre Susana Higuchi y a sus hermanos Kenji y Sachi. Luego, acudió a votar en

el distrito de Surco, donde reafirmó su compromiso de respetar los resultados electorales y pidió calma a sus seguidores (El Comercio, 6 de junio de 2021).

La jornada electoral registró más de 148 incidencias reportadas por la ONPE, incluyendo la presencia de propaganda electoral cerca de los locales de votación y la detección de cédulas marcadas, lo cual generó la detención de ciertos personeros de ambas agrupaciones, quienes fueron acusados de manipular material electoral. Estos incidentes fueron reportados en varias regiones del país, siendo Lima la que presentó el mayor número de casos. A pesar de estos inconvenientes, la ONPE aseguró que la mayoría de los incidentes fueron resueltos de manera oportuna y que el proceso continuó con normalidad (El Comercio, 7 de junio de 2021). Además, Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia de Perú Libre, fue agredida al salir de su local de sufragio, lo cual requirió la intervención policial.

A nivel internacional, se observó una mayor participación de peruanos residentes en el extranjero en comparación con la primera vuelta, especialmente en países como Estados Unidos y España. En esta ocasión, se logró que los compatriotas en Chile, Venezuela, Paraguay y Aruba pudieran sufragar, algo que no había sido posible en la primera vuelta debido a restricciones locales (El Comercio, 7 de junio de 2021).

Al cierre de las mesas de votación y durante la difusión del primer sondeo a boca de urna a las siete de la noche, ambos candidatos se encontraban en escenarios diferentes. Keiko Fujimori recibió en la sede de Fuerza Popular los primeros resultados que la situaban por encima de Pedro Castillo, y dos horas y media después publicó un mensaje en el que llamaba a la prudencia y pedía esperar los resultados oficiales de la ONPE. No obstante, también exhortó a sus personeros a defender los resultados en cada mesa y apeló al diálogo con otras fuerzas políticas, ya que la campaña electoral había terminado (El Comercio, 7 de junio de 2021).

Mientras tanto, en Tacabamba, Pedro Castillo tardó menos en hacer un primer pronunciamiento. Cerca de las ocho de la noche, el candidato salió al segundo piso de su local de campaña para dirigirse a sus simpatizantes y pedirles que mantuvieran la calma ante unos resultados aún preliminares. Posteriormente, emitió un comunicado en el que cuestionó el flash electoral que lo colocaba en desventaja, exigiendo la revisión de las actas con la participación de sus personeros como mecanismo de resguardo del conteo. Antes de eso había recurrido a su cuenta de Twitter para instruir a los personeros de Perú Libre a mantenerse vigilantes durante el escrutinio y solicitar la presencia del fiscal de prevención del delito para que se brindara seguridad jurídica en el conteo de votos (El Comercio, 7 de junio de 2021). Es decir, mientras que la narrativa de su contrincante presentaba la elección como

una lucha contra una “amenaza comunista”, las intervenciones de Castillo configuraban un marco alternativo de riesgo centrado en la posible vulneración de la voluntad popular. En este sentido, ambos campos recurrieron a distintos tipos de amenazas políticas para movilizar apoyos.

El resultado del conteo rápido de América Televisión-Ipsos al 100% arrojó que Pedro Castillo obtenía el 50.2% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 49.8%. La diferencia entre los resultados se encontraba dentro de un estrecho margen, por lo que no se podía dar a ninguno de los dos por ganador, ya que se trataba de un empate técnico (El Comercio, 7 de junio de 2021).

En cuanto al mapa electoral, Pedro Castillo ratificó sus votos de primera vuelta en el sur y centro del país, mientras que Keiko Fujimori consolidó sus bastiones electorales en la capital y el norte. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, Fujimori obtuvo el 65.2% de los votos frente al 34.8% de Castillo. En regiones como Huancavelica, Castillo alcanzó el 87.3% y Fujimori el 12.7%. En Tumbes, Fujimori logró el 65.9% y Castillo el 34.1%. Los votos en el extranjero también favorecieron a Fujimori con un 68.3%, mientras que Castillo obtuvo un 31.7% (El Comercio, 7 de junio de 2021).

Así, el lunes 7 de junio el país amaneció con la tensión propia de un resultado electoral sumamente ajustado, ya que debido al empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori no se podía declarar un ganador definitivo. A nivel político, esta situación generó preguntas sobre las futuras negociaciones para lograr una gobernabilidad que se perfilaba como un desafío complejo. Ninguno de los dos candidatos tendría mayoría en el Congreso, lo cual les obligaba a formar coaliciones para garantizar la estabilidad del próximo gobierno. Además, un eventual gobierno de Castillo podría enfrentar una primera crisis con la presentación del gabinete ministerial, especialmente si se planteaban reformas controvertidas como la Asamblea Constituyente (El Comercio, 7 de junio de 2021).

En el ámbito económico, el panorama electoral reflejaba dos visiones muy distintas para el futuro del país. Mientras Pedro Castillo abogaba por un modelo más intervencionista con propuestas como la renegociación de contratos de estabilidad tributaria, la creación de un nuevo sistema nacional de pensiones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Keiko Fujimori proponía medidas orientadas a incrementar el gasto público, como duplicar el monto de Pensión 65 y otorgar un bono a las familias de fallecidos por COVID-19, pero manteniendo el modelo económico y la constitución vigentes. Estas diferencias marcadas entre los planes de ambos candidatos aumentaban los temores y la incertidumbre entre los electores por la naturaleza que tendrían sus posibles gobiernos (El Comercio, 7 de junio de 2021).

### 3.5. Junio a Julio de 2021: Acusaciones de fraude y la “tercera vuelta”

Así, durante la semana inmediatamente posterior a la segunda vuelta, el contexto político estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral, incertidumbre en los resultados y manifestaciones de ambas partes. Aunque el día de la elección Keiko Fujimori se había comprometido a respetar los resultados electorales, el lunes 7 de junio denunció en conferencia de prensa presuntas irregularidades en diversas mesas de votación, indicando que había "una clara intención de boicotear la voluntad popular", a la vez que invitó a sus simpatizantes a reportar más casos usando el hashtag #FraudeEnMesa (El Comercio, 8 de junio de 2021). Estas acusaciones fueron rechazadas por diversos actores, incluyendo la misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que consideró los comicios exitosos. Mientras tanto, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, retornó a la capital desde Tacabamba y se pronunció en favor del respeto a la voluntad popular, asegurando que sería "el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano" (El Comercio, 8 de junio de 2021).

El conteo de votos por parte de la ONPE avanzaba lentamente, con una gran cantidad de actas observadas y votos impugnados que debían ser resueltos por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Hasta el 8 de junio, se habían reportado 1,303 actas observadas, de las cuales más de 450 tenían votos impugnados. Las regiones de Lima, Piura, La Libertad, Callao y Loreto concentraban la mayoría de estas actas (El Comercio, 8 de junio de 2021). Los votos del extranjero también jugaban un papel importante, aunque la participación fue baja, con solo el 20% de los peruanos en el extranjero ejerciendo su derecho al voto en la primera vuelta, y cifras similares se proyectaban para la segunda vuelta.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, anunció que las sesiones donde el colegiado delibere y vote las resoluciones sobre las actas observadas serían públicas, con el objetivo de transparentar el proceso. Al 9 de junio, con el 98.28% de las actas procesadas, Pedro Castillo mantenía una ventaja de más de 107 mil votos sobre Keiko Fujimori, aunque el resultado definitivo aún dependía de la resolución de las actas observadas y los recursos de nulidad presentados (El Comercio, 9 de junio de 2021).

Mientras tanto, Fuerza Popular redobló sus esfuerzos legales, presentando 802 recursos de nulidad para anular los resultados de varias mesas de votación, alegando irregularidades y posibles fraudes, particularmente en zonas del centro y sur del país donde Castillo obtuvo una mayor votación (El Comercio, 10 de junio de 2021). Aquí, con el apoyo de diversos estudios de abogados de Lima, el fujimorismo puso en marcha una maquinaria jurídico-legal para detectar posibles irregularidades en las

mesas, particularmente en ámbitos rurales e indígenas alejados de la capital (Pajuelo Teves, 2021, p. 186). Miguel Torres, portavoz de la campaña de Fuerza Popular, afirmó que se buscaría dejar sin efecto aproximadamente 200,000 votos (El Comercio, 11 de junio de 2021). Por su parte, Perú Libre también presentó solicitudes de nulidad ante los jurados electorales especiales, aunque en menor cantidad que Fuerza Popular.

Por otra parte, en el aspecto judicial, el fiscal José Domingo Pérez solicitó que se revoque la orden de comparecencia con restricciones contra Keiko Fujimori y se dicte prisión preventiva en su contra, alegando que había incumplido la prohibición de comunicarse con testigos del caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016, como Miguel Torres. Fujimori respondió que este pedido tenía una clara intencionalidad de distraerla del proceso de conteo de votos (El Comercio, 11 de junio de 2021).

Siguiendo estos hechos, casi una semana después de la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se convirtió en el centro de atención al aprobar por unanimidad una ampliación del plazo para que los partidos pudieran presentar recursos de nulidad de las mesas de sufragio hasta las 8 de la noche del mismo día. La decisión inicial de ampliar el plazo fue resultado de un oficio presentado por Fuerza Popular el miércoles 9 de junio, donde solicitaban más tiempo para presentar expedientes de nulidad, alegando haber detectado vicios en las mesas de sufragio. Este hecho fue revelado por el portal Ideele Reporteros, indicando que la decisión beneficiaba a Fuerza Popular, lo cual generó una reacción inmediata, y bajo la presión de las críticas y movilizaciones el JNE daría marcha atrás a la decisión horas después, reconsiderándola por mayoría y optando por mantener el plazo original, lo cual generó reacciones de ambas partes. Por un lado, miembros de Perú Libre consideraron la ampliación como una muestra de favoritismo hacia Fuerza Popular, mientras que los simpatizantes de Keiko Fujimori vieron la revocación como un retroceso injusto (El Comercio, 12 de junio de 2021).

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, hizo un llamado al JNE para garantizar un proceso electoral limpio y justo, mientras que Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia, criticó la intención inicial de ampliar el plazo para presentar nulidades. Por su parte, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, afirmaba que la justicia electoral era más importante que la forma y aseguró que respetarían las decisiones del jurado. Galarreta enfatizó que su partido estaba dispuesto a aceptar los resultados siempre que estos fueran claros y transparentes, aunque seguía defendiendo el derecho de Fuerza Popular a presentar sus reclamos de manera legítima (El Comercio, 12 de junio de 2021).

Mientras el conteo de votos y la resolución de nulidades continuaban, Pedro Castillo recibió diversas visitas en su alojamiento en Breña. Entre los visitantes se encontraban excandidatos presidenciales como Daniel Salaverry, George Forsyth, Ciro Gálvez y el congresista José Vega. Además, también fue visitado por excancilleres y otras figuras públicas, como Óscar Maúrtua, Manuel Rodríguez Cuadros y el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont. Estas visitas fueron consideradas protocolares, sin que se llegaran a pactos formales, aunque dejaron en claro el interés de varios sectores por acercarse al candidato que parecía llevar la ventaja (El Comercio, 12 de junio de 2021). En cierto punto Daniel Salaverry, tras su reunión con Castillo, se autoproclamó vocero del candidato, algo que fue desmentido rápidamente por Hernando Ceballos, integrante del equipo de Perú Libre.

Mientras tanto, Vladimir Cerrón, líder del partido, mostró cierta incomodidad con algunas de las declaraciones y visitas recibidas por Castillo, sugiriendo que no todos los acercamientos eran bienvenidos. Castillo, por su parte, trató de mantenerse en una posición conciliadora, destacando la importancia de establecer alianzas y compromisos en un momento de incertidumbre electoral (El Comercio, 12 de junio de 2021).

Además de las visitas de exadversarios políticos, Castillo también recibió el apoyo de varios miembros de su equipo cercano, incluyendo a Dina Boluarte, la vocera parlamentaria Betssy Chávez, y otros miembros importantes del partido. Estas reuniones también incluyeron a líderes locales, como los alcaldes de La Molina y Comas, quienes manifestaron su respaldo y su disposición a colaborar con un eventual gobierno de Castillo. Estas visitas demostraban que Castillo estaba tratando de consolidar su liderazgo y establecer una base de apoyo sólida para un potencial futuro gobierno (El Comercio, 12 de junio de 2021).

Ese mismo fin de semana se programó para el lunes 21 de junio una audiencia para evaluar un nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, presentado por el fiscal José Domingo Pérez. El pedido se basaba en el presunto incumplimiento de reglas de conducta, después de que Fujimori apareciera junto a Miguel Torres, quien es testigo en el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de 2011 y 2016 (El Comercio, 12 de junio de 2021). Fujimori calificó este pedido como absurdo y arbitrario, señalando que Torres había estado involucrado en su campaña durante todo el proceso y que no se trataba de un contacto nuevo o irregular (El Comercio, 12 de junio de 2021).

Por otro lado, Keiko Fujimori acusó al presidente Francisco Sagasti de quebrar la neutralidad electoral al haber confirmado una comunicación con el escritor Mario Vargas Llosa para pedir que bajara la tensión en el ambiente político. Sagasti, por su

parte, declaró que su única intención era promover la calma y el respeto al proceso electoral, pero Fujimori interpretó este contacto como una interferencia directa en la campaña. Sin embargo, especialistas constitucionalistas consultados indicaron que dicha llamada no constituía una interferencia en el proceso electoral, ya que se trataba de un llamado a la calma y no a influir en los resultados. A pesar de ello, esta comunicación entre el presidente y el escritor tuvo el efecto contrario, incrementando la tensión entre Sagasti y la candidatura de Fujimori (El Comercio, 12 de junio de 2021).

Ese mismo día, Keiko Fujimori participó en una concentración convocada por colectivos afines a su candidatura en el Paseo de los Héroes Navales. Durante su discurso, reiteró las acusaciones de "fraude en mesa" y cuestionó al JNE, insinuando que había cedido ante presiones de Perú Libre para retroceder en la ampliación del plazo de nulidades. Además, criticó que los resultados del flash electoral y del conteo rápido no coincidieran, lo cual generaba, según ella, dudas razonables sobre la transparencia del proceso (El Comercio, 13 de junio de 2021). También acusó al presidente Sagasti de estar "interfiriendo" en el proceso electoral y llamó a sus seguidores a continuar manifestándose para defender sus votos. Más temprano, en una conferencia con la prensa extranjera, reiteró que "aún no hay ganadores ni perdedores" y acusó a la "izquierda internacional" de intervenir en los comicios, sugiriendo que había una campaña coordinada para favorecer a su oponente (El Comercio, 13 de junio de 2021). Esta concentración también contó con la presencia de varios líderes y simpatizantes de Fuerza Popular, quienes manifestaron su respaldo a Fujimori y se comprometieron a seguir movilizándose hasta que se diera una resolución justa.

Se debe considerar que Fuerza Popular solicitó la anulación de 887 actas de sufragio, equivalentes a cerca de 177,400 votos. Sin embargo, solo 165 solicitudes fueron ingresadas dentro del plazo límite del 9 de junio. Las causales para la anulación incluían la participación de hermanos como miembros de una misma mesa y la presunta suplantación de firmas de integrantes de mesa. No obstante, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, Luis Carrasco, desestimó 11 solicitudes de nulidad por no contar con pruebas periciales que demostraran la falsificación de firmas, y señaló que era necesario presentar evidencia contundente para respaldar tales afirmaciones (El Comercio, 13 de junio de 2021). Asimismo, el JEE indicó que la divergencia de firmas no podía basarse en simples dudas o suposiciones y que no era competencia del ente electoral realizar pericias grafotécnicas (El Comercio, 13 de junio de 2021).

Asimismo, el día sábado 12 cientos de seguidores de Fuerza Popular y de Perú Libre se congregaron en el centro de Lima para expresar su apoyo a sus respectivos

candidatos. Aunque hubo momentos de tensión entre ambos grupos, las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica gracias a la intervención de las fuerzas del orden (El Comercio, 13 de junio de 2021). En ambas concentraciones se evidenciaron las marcadas diferencias que dividían al país: los seguidores de Castillo, en su mayoría provenientes de regiones rurales y de sectores populares, coreaban consignas en favor del cambio y de la victoria de su candidato, un maestro provinciano; mientras que los partidarios de Fujimori se enfocaban en la defensa de la democracia y la lucha contra el comunismo que consideraban destruiría al país. En general, todo esto reflejaba el aumento de un peligroso clima de confrontación generado por la narrativa de fraude impulsada por Fujimori, lo cual a su vez activó la acción de la coalición opuesta, articulada en torno a la candidatura de Castillo (Pajuelo Teves, 2021, p. 185).

Considerando esto, adquiere mayor sentido que Keiko Fujimori haya obtenido su mayor respaldo en distritos de altos ingresos en Lima, mientras que Pedro Castillo arrasó en distritos rurales con alta conflictividad social y menores recursos. Analistas explicaron que el voto a favor de Castillo se relaciona con una agenda anticentralista y con la falta de presencia del Estado en dichas zonas. La falta de servicios básicos, la precariedad en la infraestructura y el abandono del Estado fueron factores que influyeron en el respaldo masivo hacia Castillo, quien representaba para muchos una esperanza de cambio (El Comercio, 13 de junio de 2021).

Ahora bien, la firma del mencionado "Juramento por la Democracia" por la candidata fujimorista, con el aval de figuras como Mario Vargas Llosa y el opositor venezolano Leopoldo López, sumada al respaldo de partidos afines como Alianza para el Progreso y Renovación Popular para la organización de personeros, así como el apoyo público de otros líderes políticos, no solo buscaba cimentar su imagen como defensora de las libertades democráticas frente a la amenaza que representaba para este sector la candidatura de Castillo, sino que también reflejaba una movilización conjunta de la derecha peruana en torno a su candidatura, y tal como señala Kahhat (2024), esto se logra a través de una metanarrativa que provee un mito movilizador contra una supuesta amenaza común. Esta movilización es consistente con la ya mencionada tendencia de las nuevas derechas a construir enemigos existenciales para unificar a actores diversos que, en un escenario diferente, no trabajarían juntos.

Siguiendo esto, tras conocerse los ajustados resultados de la segunda vuelta, Fujimori denunció presuntas irregularidades y acusó un "fraude en mesa", a pesar de que no tenía evidencia sólida para probarlo. Aquí ya se podía observar un cambio en el discurso de la candidata, quien pasó de invocar a la prudencia y esperar los resultados oficiales de la ONPE, a señalar una supuesta intención de boicotear la voluntad popular, cuestionar el trabajo de las instituciones electorales e invitar a sus

simpatizantes a reportar más casos de supuesto fraude. Es decir, se evidenciaba un cambio del discurso del miedo utilizado en campaña hacia una narrativa de fraude, que a partir de entonces fue empleada para justificar las acciones desplegadas por ella y sus aliados (Pajuelo Teves, 2021). Asimismo, la insistencia de su partido en presentar más de 800 recursos de nulidad para anular resultados en zonas donde Pedro Castillo obtuvo mayoría, particularmente en áreas rurales e indígenas, reflejaba el inicio de una estrategia de obstrucción e incluso desconocimiento de los resultados del proceso democrático que no le favorecían.

Además de las acciones legales, la coalición fujimorista intensificó su presencia en medios de comunicación y redes sociales para difundir su narrativa de fraude y movilizar a sus simpatizantes, e incluso se llegó a sugerir la intervención de las Fuerzas Armadas. Como señala Kahhat (2024), esto es característico de las derechas radicales, quienes utilizan estas estrategias antiinstitucionales, promoviendo acciones que van desde la presión mediática hasta llamados a la intervención militar para evitar la consolidación de gobiernos que consideran una amenaza. Todas estas acciones podrían interpretarse como parte de una "tercera vuelta" extraelectoral, donde se utilizaron diversos recursos para presionar a las instituciones electorales y socavar la confianza en el proceso democrático con el fin de evitar por todos los medios posibles la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo.

Así, durante la tercera semana de junio de 2021, la tensión política en Perú se mantuvo elevada mientras el proceso de resolución de las solicitudes de nulidad y la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial seguía en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este órgano electoral estimó que el anuncio oficial del presidente electo podría darse hacia finales del mes o a principios de julio, debido a las más de 1,090 solicitudes de nulidad presentadas, principalmente por Fuerza Popular. De todos estos pedidos, solo 270 ingresaron dentro del plazo establecido por la ley, antes de las 8 p.m. del miércoles 9 de junio. La mayoría de estas solicitudes fueron promovidas por Fuerza Popular, mientras que otras provinieron de Perú Libre. La mayor parte de los recursos presentados fuera del plazo probablemente serían declarados improcedentes; sin embargo, Fuerza Popular adelantó su intención de apelar los rechazos, incluso aquellos que se consideren extemporáneos (El Comercio, 14 de junio de 2021).

Mario Vargas Llosa también intervino en el debate público de esta semana, solicitando que se evitara hablar de fraude electoral hasta que las autoridades competentes resolvieran los pedidos de nulidad. Vargas Llosa, quien expresó su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori, mencionó que solo el JNE podía otorgar legitimidad al próximo presidente, rechazando las declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales que ya daban como ganador a Pedro Castillo (El Comercio, 14

de junio de 2021). Asimismo, el Nobel de Literatura destacó la importancia de aceptar los resultados oficiales para evitar un clima de crispación social.

En este contexto de disputas también se registraron tensiones internas dentro del equipo de Perú Libre. El economista Pedro Francke, quien forma parte del equipo técnico de Pedro Castillo, desestimó la existencia de tensiones dentro de la organización, señalando que se trataba de un esfuerzo colectivo por construir un gobierno de cambio. Sin embargo, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, expresó en redes sociales su descontento por el protagonismo de algunos técnicos invitados, enfatizando que "Perú Libre fue quien ganó las elecciones" (El Comercio, 14 de junio de 2021).

Durante las siguientes semanas, la tensión se concentró en la actuación del JNE, al tiempo que Fuerza Popular incrementó su campaña de desprestigio de la ONPE. En ese sentido, el lunes 14 de junio, Fuerza Popular solicitó a la ONPE la realización de una auditoría informática del proceso de digitalización de las actas electorales, alegando supuestas irregularidades difundidas por redes sociales. Aunque la ONPE ya había procesado el 100% de las actas, la solicitud buscaba reforzar la narrativa del fraude e incluso dilatar la proclamación de un ganador. Expertos en derecho electoral, como José Naupari, señalaron que el pedido era extemporáneo y difícil de sustentar (El Comercio, 15 de junio de 2021). Ese mismo día, el pleno del JNE resolvió nueve apelaciones sobre actas observadas, declarando infundadas varias de las presentadas por ambos partidos. En algunos casos, el JNE dio la razón tanto a Fuerza Popular como a Perú Libre, permitiendo validar las actas correspondientes. Sin embargo, la revisión de las apelaciones y nulidades pendientes continuaba, prolongando este clima de incertidumbre (El Comercio, 15 de junio de 2021).

En cuanto al avance del conteo oficial, la ONPE culminó el proceso con una ventaja de 44,058 votos a favor de Pedro Castillo, quien obtuvo el 50.125% de los votos válidos frente al 49.875% de Keiko Fujimori. A pesar de estos resultados, aún quedaban por resolver las apelaciones sobre las actas observadas y los pedidos de nulidad, lo cual generaba tensión en el país. Keiko Fujimori instó a sus simpatizantes a mantenerse vigilantes y continuar con las movilizaciones pacíficas, mientras que Pedro Castillo ya se presentaba como presidente electo del Perú, agradeciendo el apoyo de la ciudadanía (El Comercio, 16 de junio de 2021).

Por otro lado, Fuerza Popular se mantuvo como el único partido que seguía impulsando solicitudes de nulidad, después de que Perú Libre decidiera retirar los 160 pedidos que había presentado. Esta decisión dejó a Fuerza Popular como el principal actor en la lucha por la anulación de votos, basándose principalmente en acusaciones

de irregularidades y falsificación de firmas. Sin embargo, los JEE rechazaron varias de estas solicitudes, argumentando que las sospechas no estaban respaldadas por pruebas suficientes y que los peritajes presentados por Fuerza Popular no tenían el peso necesario para invalidar las actas (El Comercio, 17 de junio de 2021).

Por su parte, la fiscalía y la Policía Nacional desarrollaron un operativo para detener a más de 30 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal "Los Dinámicos del Centro", relacionada con el Gobierno Regional de Junín. Entre los investigados se encontraban militantes de Perú Libre, como Arturo Cárdenas Tovar y Eduardo Bendezú Butarra, quienes habían tenido participación activa en la campaña electoral de Pedro Castillo. Estos hechos generaron críticas hacia el partido, ya que los detenidos estaban implicados en trámites ilícitos en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, lo cual puso en tela de juicio a los antecedentes de algunos de los colaboradores cercanos a Castillo (El Comercio, 17 de junio de 2021).

En cuanto a la situación en el Congreso, las bancadas del nuevo período legislativo 2021-2026 comenzaron a definir sus estrategias para la conformación de la primera mesa directiva, cuya elección se llevará a cabo entre el 26 y 27 de julio. Por un lado, el bloque conservador, conformado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, buscaba consolidar una alianza para ganar la presidencia del Parlamento. Por otro lado, Perú Libre intentaba forjar alianzas con Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú para inclinar la balanza a su favor. En este contexto, el papel de la bancada de Acción Popular se perfilaba como clave para definir el futuro del Congreso (El Comercio, 17 de junio de 2021).

Mientras tanto, Keiko Fujimori continuó cuestionando el proceso electoral y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que reconsiderara las solicitudes de nulidad de actas de sufragio. Además, presentó a nuevos integrantes de su equipo legal, incluyendo a la excongresista Lourdes Flores Nano y al constitucionalista Domingo García Belaúnde, quienes respaldaron la postura del partido respecto a la ampliación del plazo para presentar nulidades. Sin embargo, expertos en derecho electoral consideraron que la interpretación de Fuerza Popular sobre la vigencia del plazo extra era forzada y carecía de sustento jurídico (El Comercio, 18 de junio de 2021).

Uno de los temas más destacados en esta misma semana fue la revelación de cómo algunos dirigentes de Perú Libre, como Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, estuvieron vinculados a "Los Dinámicos del Centro", una red integrada por funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. Dicha organización presuntamente cobraba cupos a cambio de favores y expedición de licencias de conducir. Se pudo conocer, mediante escuchas

telefónicas, cómo estos dirigentes coordinaban apoyo para la campaña presidencial de Pedro Castillo y cómo se organizaban actividades proselitistas usando recursos del Gobierno Regional de Junín. En ese momento, ambos se encontraban prófugos de la justicia luego de que se dictaran órdenes de detención en su contra (El Comercio, 19 de junio de 2021).

Además, el presidente Francisco Sagasti informó que remitiría al Ministerio Público la carta enviada por un grupo de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas a los comandantes generales, solicitando desconocer al próximo presidente si no se revisaban las denuncias de presuntas irregularidades. Sagasti fue enfático al afirmar que las Fuerzas Armadas son instituciones neutrales y no deliberantes, y que este tipo de acciones podrían constituir delito de sedición (El Comercio, 19 de junio de 2021).

Durante esta semana también se dieron a conocer detalles sobre la coordinación de un pago de 850 mil soles para evitar que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, fuera a prisión. En una conversación interceptada entre Guido Bellido y Arturo Cárdenas se escuchaba a ambos coordinar la manera de reunir ese dinero y destinarlo al pago de la reparación civil impuesta a Cerrón por una condena por negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo. La conversación también revelaba que cada dirección regional del partido debía aportar 35 mil soles para completar la cantidad requerida y que Cerrón pudiera quedar habilitado para ocupar un cargo público (El Comercio, 20 de junio de 2021).

En cuanto a las movilizaciones, la incertidumbre electoral continuaba manifestándose en forma de marchas y concentraciones de simpatizantes de ambos candidatos en diversas ciudades del país. Como señala Pajuelo Teves (2021), mientras los equipos legales de ambas agrupaciones disputaban los resultados ante los organismos electorales, se llevaban a cabo en paralelo acciones de presión en el espacio público, como plantones, movilizaciones, caravanas y mítines. En Lima, una de las acciones más visibles fue una concentración encabezada por Keiko Fujimori, en la que exigió a la ONPE la entrega del padrón de electores para cotejar firmas. A su lado estuvieron el secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y la abogada Lourdes Flores Nano, quien cuestionó públicamente la actuación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en un tono que algunos analistas consideraron irresponsable porque fomentaba la hostilidad contra las autoridades electorales. Por su parte, sectores afines a Perú Libre convocaron una multitudinaria reunión en la Plaza San Martín para expresar su respaldo a Pedro Castillo, actividad en la que la excandidata presidencial Verónica Mendoza llamó a que se respetara el conteo oficial de votos que en ese momento situaba a Castillo como ganador (El Comercio, 20 de junio de 2021).

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continuaba resolviendo las apelaciones presentadas por Fuerza Popular sobre la nulidad de actas electorales. La mayoría de estos recursos fueron rechazados por falta de pruebas suficientes que demostraran fraude. El pleno de este organismo, encabezado por Jorge Luis Salas Arenas, reiteró que las pruebas presentadas no cumplían con los requisitos necesarios para anular los resultados electorales y reafirmó la transparencia del proceso. Además, se informó que los casos atípicos identificados por Ipsos Perú en su investigación sobre las actas de la ONPE eran minoritarios y no afectaban significativamente los resultados de la segunda vuelta. Esta situación prolongaba la incertidumbre política, ya que el país seguía esperando la proclamación oficial del próximo presidente (El Comercio, 20 de junio de 2021).

Durante la cuarta semana de junio también se produjo una controversia dentro del JNE luego de que el fiscal supremo Luis Arce Córdoba anunciara su intención de “declinar” al pleno del JNE. Esta decisión se conoció poco después de que el colegiado fallara en contra de diez apelaciones presentadas por Fuerza Popular para la anulación de actas electorales. Arce señaló que su intención era evitar que su voto en minoría fuera utilizado para convalidar decisiones que, en su opinión, estaban parcializadas políticamente. La situación generó un nuevo obstáculo para el proceso electoral, ya que sin la presencia de Arce, el pleno no podría llevar a cabo las audiencias programadas por falta de quórum. Expertos en derecho electoral señalaron que la renuncia de Arce era ilegal y podría tener responsabilidades penales, además de desestabilizar al organismo electoral en un momento crítico para el país (El Comercio, 23 de junio de 2021).

En respuesta a ello, el Ministerio Público designó al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza para reemplazar a Arce en el JNE, después de que este último “declinara” sus funciones argumentando falta de transparencia en el organismo electoral. Si bien la ley no permite la renuncia de los miembros del JNE durante un proceso electoral en curso, aún así la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos decidió dar cumplimiento a un acuerdo anterior de la Junta de Fiscales Supremos y designó a Rodríguez Monteza como primer suplente de Arce (El Comercio, 25 de junio de 2021). Con la incorporación de este magistrado, el JNE pudo retomar sus labores para resolver las apelaciones pendientes. Hasta ese momento, solo habían logrado llevar a cabo la audiencia de 10 de las casi 80 apelaciones presentadas dentro del plazo establecido. Posteriormente, se esperaba que el pleno del JNE analizara las apelaciones de aproximadamente 200 recursos de nulidad que Fuerza Popular había presentado fuera del plazo legal y que ya habían sido declarados improcedentes (El Comercio, 25 de junio de 2021).

La situación de Luis Arce y su "declinación" fue fuertemente criticada por miembros de Perú Libre, quienes consideraron que su salida del JNE tenía como objetivo paralizar el trabajo del organismo electoral. Dina Boluarte, candidata a vicepresidenta por Perú Libre, encabezó una conferencia de prensa junto con otros miembros del partido, como la congresista electa Betsy Chávez y los abogados Aníbal Torres, Ronald Gamarra y Julio Arbizu. Durante la conferencia, Boluarte acusó a Arce de formar parte de una "banda delincuencia" que buscaba favorecer a Keiko Fujimori y sus intenciones de desconocer el proceso electoral (El Comercio, 25 de junio de 2021).

Desde el lado contrario, Fuerza Popular y sus aliados políticos buscaron apoyo internacional para avalar sus cuestionamientos al proceso electoral. En una conferencia liderada por el excongresista aprista Jorge del Castillo, se pidió al presidente Francisco Sagasti que solicitara la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso electoral peruano. Del Castillo comparó la situación con lo ocurrido en Bolivia en 2019, donde la OEA realizó una auditoría de los comicios. Sin embargo, expertos en derecho internacional señalaron que el caso peruano no era comparable y que era poco probable que la OEA aceptara intervenir (El Comercio, 25 de junio de 2021). Por el contrario, tanto la OEA como la Unión Europea emitieron pronunciamientos avalando la transparencia del proceso electoral peruano (El Comercio, 25 de junio de 2021).

El 25 de junio se reveló que Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, realizó llamadas desde su reclusión en la Base Naval del Callao. En dichas comunicaciones, reveladas por el exlegislador Fernando Olivera, Montesinos recomendaba sobornar a magistrados del JNE para favorecer las apelaciones de nulidad de Fuerza Popular (El Comercio, 26 de junio de 2021). Las conversaciones se llevaron a cabo entre Montesinos, el militar en retiro Pedro Rejas y el abogado Guillermo Sendón, quienes discutieron la posibilidad de sobornar a jueces del JNE con el objetivo de influir en los fallos respecto a las apelaciones de Fuerza Popular. La Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmaron las llamadas y anunciaron una investigación para determinar responsabilidades. Asimismo, el Ministerio de Defensa decidió relevar a los oficiales implicados en las llamadas indebidas de Montesinos (El Comercio, 27 de junio de 2021).

El mismo fin de semana, el JNE esperaba que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza jurara como nuevo miembro del pleno del organismo, en reemplazo del fiscal Luis Arce Córdoba, quien declinó su cargo argumentando falta de imparcialidad en el tribunal (El Comercio, 26 de junio de 2021). La declinación de Arce había generado una situación de incertidumbre, poniendo en riesgo el quórum necesario para resolver las apelaciones pendientes de Fuerza Popular. Sin embargo,

con la aceptación de Rodríguez Monteza, el pleno del JNE logró retomar las audiencias para analizar las apelaciones presentadas por Fuerza Popular (El Comercio, 27 de junio de 2021).

Por otro lado, el aún candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, manifestó desde Cusco que se encontraba a la espera de la proclamación de los resultados por parte del JNE para continuar con sus actividades políticas. Castillo enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y reiteró su propuesta de convocar a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución (El Comercio, 26 de junio). Además, se refirió a la necesidad de descentralizar al Estado, particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas, para fortalecer la gestión regional.

Durante ese fin de semana, también se conocieron detalles de las investigaciones en curso sobre la organización Los Dinámicos del Centro, vinculada al partido Perú Libre y de la cual Arturo Cárdenas, uno de los hombres de confianza de Vladimir Cerrón, era un miembro destacado. Las escuchas legales revelaron cómo Cárdenas ejercía influencia en la designación de puestos laborales en la región Junín y en la estructura del partido (El Comercio, 26 de junio).

Asimismo, la encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el 27 de junio reveló que el 54% de los ciudadanos prefería que el próximo gabinete ministerial fuera multipartidario, mientras que solo el 16% consideraba que debería estar compuesto por miembros del partido ganador. Además, se reflejó una preocupación generalizada respecto al futuro político del país, con un 96% de los encuestados opinando que quien asuma la presidencia debía gobernar para todos los peruanos y no solo para sus seguidores (El Comercio, 27 de junio).

El 28 de junio, una encuesta de El Comercio-Ipsos mostró que la aprobación del presidente Francisco Sagasti había aumentado al 52%, un crecimiento de 22 puntos porcentuales comparado con mayo. Este repunte fue atribuido a la estabilidad que ofrecía su administración en medio de la incertidumbre electoral, así como al avance del proceso de vacunación contra el COVID-19 (El Comercio, 28 de junio). Analistas como Kathy Zegarra y Jeffrey Radzinsky señalaron que la gestión de la vacunación y el contraste con las propuestas de los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori fueron factores clave para este aumento en la aprobación (El Comercio, 28 de junio de 2021).

Por otro lado, el informe de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) recomendó la destitución del fiscal supremo Luis Arce Córdova, quien había declinado a su cargo como miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La JNJ señaló que Arce había cometido infracciones en el ejercicio de sus funciones, incluyendo

conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza, vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual representaba una falta ética grave (El Comercio, 28 de junio de 2021).

Por otro lado, el escándalo conocido como Vacunagate volvía a las noticias luego de que se descubriera que 58 personas involucradas, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra, habían recibido nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19, a pesar de haber sido vacunados irregularmente con dosis de Sinopharm en 2020. El Ministerio de Salud admitió que no retiró a estas personas del padrón de vacunación, lo que permitió que se inocularan nuevamente durante el proceso oficial (El Comercio, 29 de junio de 2021). El ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, reconocieron este error y calificaron de reprobable la actitud de Vizcarra (El Comercio, 30 de junio de 2021).

En el caso de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, este continuó inhabilitado para ejercer funciones públicas tras la resolución de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que declaró improcedente la anulación de la sentencia de corrupción en su contra. El Poder Judicial también anunció una investigación contra el juez que intentó anular la sentencia original de Cerrón (El Comercio, 29 de junio de 2021). Con ello, cualquier aspiración del líder de Perú Libre de participar en el gobierno de Castillo, en caso se concretase su proclamación, quedaba sepultada.

Mientras tanto, se mantuvieron las tensiones en torno a las denuncias de fraude electoral promovidas por Fuerza Popular. El Poder Judicial declaró inadmisibile el recurso de habeas data presentado por Fuerza Popular para acceder a la lista de electores de las mesas de sufragio (El Comercio, 26 de junio de 2021). Keiko Fujimori, quien anteriormente se había pronunciado en contra de interferencias desde el Ejecutivo, cambió de postura y solicitó al presidente Francisco Sagasti que pidiera a organismos internacionales una auditoría electoral para garantizar la legitimidad de los resultados, lo cual en ese punto podría interpretarse como un intento de seguir dilatando la proclamación de resultados (El Comercio, 29 de junio de 2021).

El 29 de junio, el JNE declaró infundadas siete apelaciones adicionales de Fuerza Popular relacionadas con la nulidad de actas de la segunda vuelta, sumando un total de 27 apelaciones rechazadas. Las apelaciones se referían a presuntas irregularidades, como la falsificación de firmas de miembros de mesa, pero el JNE consideró que los argumentos presentados no eran suficientes para anular los resultados. Además, el pleno del JNE decidió remitir los actuados al Ministerio Público para que investigara las acusaciones penales relacionadas (El Comercio, 30 de junio).

Durante esta segunda mitad del mes, la radicalización de los principales representantes de la derecha peruana se hizo mucho más evidente debido a sus ataques directos a la legitimidad del sistema electoral. Así, Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular cuestionaron persistentemente la integridad de la ONPE y del JNE, acusándolos de parcialidad y alegando fraude generalizado, a la vez que presentaron más de 1090 solicitudes de nulidad, la mayoría fuera del plazo legal, buscando dilatar la proclamación oficial y sembrar desconfianza en las instituciones democráticas. La persistencia del fujimorismo en la presentación de solicitudes de nulidad, incluso tras el retiro de las impugnaciones por parte de Perú Libre, evidenciaba aún más su intención de obstaculizar la proclamación del ganador. Al mismo tiempo, el hecho de que figuras como Lourdes Flores, Domingo García Belaúnde y Julio César Castiglioni respaldaran esta narrativa del fraude, así como que oficiales militares retirados instaban a desconocer al próximo presidente si no se revisaban las denuncias de irregularidades, revelaban una mayor agresividad en el discurso de este sector a medida que se acercaba el mes de julio.

Asimismo, la erosión de las normas de tolerancia mutua se evidenció en la negativa de Fuerza Popular a aceptar los resultados electorales y en su insistencia en promover movilizaciones y acciones legales que, aunque estaban dentro del marco legal, evidenciaban incluso la posibilidad de que no reconociesen los resultados oficiales. Como señalan Levitsky y Ziblatt (2019), cuando los actores políticos dejan de verse como rivales legítimos y se consideran enemigos, se debilita la base para una competencia política pacífica. Consecuentemente, la polarización alcanzó niveles preocupantes, con ambas partes realizando marchas y mítines que intensificaron el clima de hostilidad, y en el caso de las movilizaciones de simpatizantes de Fuerza Popular, estas exigían la revisión de actas y cuestionaban la transparencia del proceso electoral. En este mismo contexto, la "declinación" del fiscal Luis Arce Córdova del JNE y las presiones para paralizar el proceso electoral reflejaban la disposición de esta parte de la derecha peruana en socavar las normas democráticas con el fin de evitar la victoria de actores percibidos como amenazas para el status quo político y económico, lo cual también se podría interpretar a partir de lo señalado por Gil (2022) sobre la tendencia histórica de la derecha latinoamericana a recurrir a salidas antidemocráticas con el fin de defender sus intereses.

Así, el mes de julio comenzó en un contexto de intensa actividad política, en medio de las tensiones poselectorales tras la segunda vuelta y las acusaciones de fraude electoral por parte de la campaña de Keiko Fujimori y sus aliados. Siguiendo esto, una delegación de simpatizantes de la candidatura fujimorista viajó a Washington D.C. con la intención de entrevistarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y solicitar una auditoría internacional de los comicios del 6 de junio. Sin

embargo, no lograron reunirse con Almagro y solo pudieron dejar una carta con su petitorio (El Comercio, 1 de julio de 2021). La comitiva estaba conformada por el economista Daniel Córdova, la excandidata presidencial aprista Nidia Vilchez y los congresistas electos Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Renovación Popular), quienes presentaron su viaje como un esfuerzo por obtener respaldo externo a lo que describían como evidencia estadística de un supuesto fraude.

En el ámbito judicial, el 29 de junio fue detenida Marina Vásquez López, fundadora y dirigente de Perú Libre, tras haber permanecido 15 días en la clandestinidad (El Comercio, 1 de julio de 2021). Vásquez era acusada de participar en la presunta organización criminal "Los Dinámicos del Centro", que operaba en Junín y estaba dedicada a la emisión ilícita de licencias de conducir. Según el Ministerio Público, habría utilizado su cargo en la Dirección Regional de Transportes de Junín para favorecer la contratación de militantes y simpatizantes de Perú Libre, coordinando con dirigentes como Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú (El Comercio, 1 de julio de 2021).

Mientras tanto, el equipo legal de Fuerza Popular continuó su estrategia jurídica solicitando al JNE la realización de más audiencias públicas para resolver las más de 240 apelaciones pendientes sobre solicitudes de nulidad presentadas fuera de plazo y otros pedidos sin el pago de la tasa correspondiente (El Comercio, 1 de julio de 2021). Julio César Castiglioni, integrante del equipo legal de FP, insistió en la necesidad de otorgar el uso de la palabra en todos los casos pendientes, basándose en los principios de equidad y derecho a la defensa (El Comercio, 1 de julio de 2021).

El 2 de julio, se conoció que la Fiscalía de Lavado de Activos inició diligencias preliminares por ocho meses contra quienes resulten responsables por presuntos aportes de origen ilícito a las campañas políticas de Perú Libre, en el marco del caso "Los Dinámicos del Centro" (El Comercio, 2 de julio de 2021). La investigación apuntaba a dirigentes del partido y funcionarios del Gobierno Regional de Junín, quienes habrían conformado una organización criminal para financiar ilegalmente actividades políticas (El Comercio, 2 de julio de 2021). Como parte de ello, la fiscal Bonnie Bautista afirmaba que dinero ilícito financió la campaña de Perú Libre, basándose en testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces y en evidencias obtenidas de escuchas telefónicas legales y dispositivos incautados. Según la tesis fiscal, la presunta organización criminal "Los Dinámicos del Centro" habría incrementado sus actividades para recaudar fondos destinados al partido tras pasar a la segunda vuelta electoral (El Comercio, 4 de julio de 2021).

En medio de este panorama, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que no descartaba permanecer al frente de la entidad durante el próximo gobierno, indicando que conversaría con Pedro Castillo una vez que se proclamen los resultados electorales. Este anuncio se dio luego de que Castillo manifestara su voluntad de ratificar a Velarde en el cargo, lo cual fue bien recibido por los mercados locales e internacionales (El Comercio, 2 de julio de 2021). Sin embargo, el mismo 2 de julio, Pedro Castillo anunció que solicitaría al Congreso, el 28 de julio, la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución (El Comercio, 2 de julio de 2021). Esta propuesta generó debate entre expertos constitucionalistas, quienes advirtieron la inviabilidad legal de convocar una asamblea constituyente, ya que esta no existe como órgano dentro del ordenamiento jurídico peruano (El Comercio, 3 de julio de 2021).

Por su parte, el Ejecutivo optó por desestimar la petición de Keiko Fujimori de que el gobierno solicitara a organismos internacionales una auditoría de la segunda vuelta. En un oficio, el ministro de Justicia, Eduardo Vega Luna, fundamentó la negativa en el principio de neutralidad que rige a las entidades del Estado y en el hecho de que el proceso electoral aún estaba en curso, por lo que, en esas condiciones, no existían bases jurídicas para impulsar dicha solicitud. Fujimori expresó su rechazo a esta decisión, afirmando que su lucha no se detendría (El Comercio, 3 de julio de 2021).

En la interna de Perú Libre surgieron voces disonantes respecto a la posible ratificación de Julio Velarde en el BCRP. El congresista electo Guido Bellido manifestó su desacuerdo, señalando que no puede haber personas imprescindibles y abogando por una renovación de economistas (El Comercio, 4 de julio de 2021). Jaime Quito, también congresista electo de Perú Libre, coincidió en que era oportuno hacer cambios y que existían miles de economistas capaces de asumir el cargo (El Comercio, 4 de julio de 2021).

Durante la segunda semana de julio de 2021, Perú continuó sumido en tensiones políticas tras las persistentes acusaciones de fraude electoral y un proceso electoral que no parecía terminar. El 4 de julio, Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y fundador de Perú Libre, intentó desvincular a su partido del caso "Los Dinámicos del Centro", calificando la investigación como una "persecución política". Sin embargo, se revelaron movimientos financieros sospechosos en sus cuentas, incluyendo depósitos en efectivo de origen desconocido desde 2013, lo que generó sospechas de desbalance patrimonial (El Comercio, 5 de julio de 2021).

Durante esta misma semana, la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista solicitó prisión preventiva para veinte investigados del caso "Los Dinámicos del Centro",

argumentando la posible obstaculización de las investigaciones por parte de los implicados, quienes incluso habían sido advertidos sobre los allanamientos a sus domicilios. Según las investigaciones, Waldys Vilcapoma, funcionario de la Dirección Regional de Transportes de Junín, había tenido acceso a la resolución judicial del allanamiento antes de que este se realizara y mantuvo comunicaciones con Vladimir Cerrón sobre posibles intervenciones. Estas acciones fueron interpretadas como intentos de obstaculizar la justicia (El Comercio, 6 de julio de 2021).

El 4 de julio, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, reiteró sus denuncias de presunto fraude en mesa y criticó a los órganos electorales por, según ella, "ponerse una venda en los ojos" y no analizar las denuncias presentadas (El Comercio, 5 de julio de 2021). Sin embargo, la lideresa del partido naranja también enfrentaba nuevos desafíos judiciales, ya que se abrió una nueva investigación fiscal contra ella y Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal relacionados con la campaña electoral de 2021 (El Comercio, 6 de julio de 2021). El fiscal José Domingo Pérez incluyó como indicios audios y conversaciones que sugieren posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña. Mientras tanto, el JNE continuaba declarando infundadas sus solicitudes de nulidad de actas.

En medio de este contexto, el Poder Judicial concedió una medida cautelar para suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, interpuesta por el abogado Walter Ayala (El Comercio, 7 de julio de 2021). A pesar de la orden judicial y de que algunas bancadas consideraban que el proceso carecía de transparencia y motivación suficiente, el Congreso decidió continuar con la elección, argumentando que la resolución carecía de fundamentos sólidos y haciendo hincapié en la separación de poderes (El Comercio, 7 de julio de 2021). Sin embargo, la falta de consenso llevó a que ningún candidato obtuviera los votos necesarios, dejando en suspenso la renovación del TC (El Comercio, 8 de julio de 2021).

El 5 de julio, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para Luis Arce Córdoba, suspendido magistrado del JNE y fiscal supremo, investigado por presunto enriquecimiento ilícito (El Comercio, 6 de julio de 2021). Arce había sido involucrado en la coordinación de trámites preferentes y en la adquisición de propiedades de manera irregular, además de sus vínculos con el exjuez César Hinostroza en el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", razones por las cuales el día 7 de julio la Junta Nacional de Justicia decidió destituirlo por unanimidad (El Comercio, 8 de julio de 2021).

Mientras tanto, los aliados políticos de Keiko Fujimori continuaron denunciando un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral. Desde Madrid, el escritor Mario Vargas Llosa cuestionó la imparcialidad del gobierno durante el proceso electoral y

afirmó que "todos los partidos democráticos peruanos" respaldaban las denuncias de irregularidades (El Comercio, 10 de julio de 2021). En relación con ello, el sábado 10 de julio, simpatizantes de Keiko Fujimori realizaron una caravana en Lima bajo la campaña "Respetar mi Voto", iniciando en la Av. de la Peruanidad y culminando en el Paseo de los Héroes Navales (El Comercio, 10 de julio de 2021). Fujimori participó en el evento, reiterando que no aceptaría una proclamación que, según ella, "consumara el fraude en mesa". Cuestionó la celeridad con la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planeaba anunciar los resultados y afirmó que su partido continuaría luchando por lo que considera una elección viciada. Asimismo, hizo un llamado al presidente Francisco Sagasti para que solicitara una auditoría internacional del proceso electoral, petición que ya había sido rechazada previamente por el Ejecutivo, y lo acusó de haber tomado partido por el candidato Pedro Castillo (El Comercio, 11 de julio de 2021).

Paralelamente, la bancada de Perú Libre se reunió para evaluar su agenda parlamentaria, centrando la discusión en los mecanismos para impulsar la instalación de una asamblea constituyente. Aunque la mayoría de los congresistas electos mostró preferencia por abordar el debate constitucional a través de la Comisión de Constitución, existía una facción que apoyaba la propuesta del congresista Guillermo Bermejo de recolectar firmas para convocar a una consulta popular. Además, la bancada acordó priorizar el apoyo al Ejecutivo, tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo, en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y el retorno seguro a clases presenciales (El Comercio, 10 de julio de 2021).

La elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional continuó en suspenso. El congresista Rolando Ruiz, presidente de la comisión especial encargada del proceso, solicitó una pausa a través de un cuarto intermedio, sin definir una fecha para reanudar las votaciones (El Comercio, 10 de julio de 2021). Mientras algunos congresistas abogaban por continuar con la elección, otros consideraban más prudente dejar el proceso en manos del próximo Congreso debido a las divisiones y cuestionamientos existentes (El Comercio, 10 de julio de 2021).

Durante la tercera semana de julio de 2021, el Perú se encontraba en la antesala de la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a menos de dos semanas de la celebración del bicentenario de la independencia y la juramentación del nuevo presidente de la república. En este contexto, el JNE continuó resolviendo las últimas apelaciones presentadas por Fuerza Popular en relación a las nulidades de mesas de votación. El 12 de julio, este organismo rechazó todas las apelaciones interpuestas por el partido liderado por Keiko Fujimori. La demora en resolver estos casos se debió, en parte, al voto en minoría del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien finalmente presentó sus

fundamentos, permitiendo así que se avanzara con el proceso. No obstante, el fujimorismo optó por apelar las actas de proclamación emitidas por los JEE, lo que podría retrasar unos días más la proclamación general de resultados (El Comercio, 13 de julio de 2021). Aquí ya se podría afirmar que el retraso en la proclamación de los resultados se debía principalmente a la espera de estos votos y a la compleja situación que enfrentaba el JNE debido a las demandas judiciales y apelaciones de Fuerza Popular que buscaban dilatar el proceso.

Mientras tanto, continuaban las negociaciones para la conformación de la mesa directiva del nuevo Congreso. La bancada de Perú Libre buscaba asegurar la presidencia del Congreso, con Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido, Vladimir Cerrón, perfilándose como uno de los posibles candidatos. Sin embargo, la oposición también maniobraba para evitar que el control del Congreso recaiga en Perú Libre, por lo que alianzas con partidos como Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú eran cruciales para alcanzar la mayoría necesaria (El Comercio, 12 de julio de 2021). Las disputas internas en las bancadas, así como las diferencias en torno a la asamblea constituyente propuesta por el partido del lápiz, dificultaban alcanzar consensos.

En medio de esta situación, Pedro Castillo, cuya proclamación como presidente electo parecía ser inminente, mantuvo reuniones con Vladimir Cerrón y otros miembros del partido para definir las estrategias políticas de cara a un eventual gobierno. Castillo también se reunió con representantes de diversas organizaciones sociales y partidos políticos, destacando la necesidad de impulsar la reactivación económica, mejorar el sistema de salud y garantizar el retorno seguro a clases presenciales (El Comercio, 14 de julio de 2021). La unidad del partido y la coordinación con aliados potenciales se presentaban como cruciales para un mínimo de gobernabilidad de un gobierno de Castillo.

A medida que se acercaba la fecha de proclamación, los aliados de Fuerza Popular continuaban explorando opciones legales para evitar la proclamación de Pedro Castillo. Lourdes Flores Nano anunciaba que evaluarían la presentación de recursos de amparo y medidas cautelares para impedir la proclamación de Castillo como presidente. Sin embargo, expertos en derecho electoral como José Tello advirtieron que estas maniobras solo buscaban retrasar el proceso, sin una base legal sólida para cambiar el resultado (El Comercio, 13 de julio de 2021).

A medida que se acercaba la proclamación oficial de los resultados electorales, las comisiones de transferencia seguían con limitaciones para avanzar, dado que la falta de proclamación impedía un acceso pleno a la información oficial. Mientras otros gobiernos entrantes habían tenido varias semanas para consolidar la información de

la gestión saliente, el equipo de Castillo solo contaría con una semana para empaparse de los informes de transferencia que dejaría la gestión de Francisco Sagasti antes de asumir el poder el 28 de julio. Dina Boluarte, encargada de coordinar las comisiones de transferencia por parte de Perú Libre, convocó a especialistas, aunque advirtió que su participación no garantizaba un puesto ministerial (El Comercio, 17 de julio de 2021).

Simultáneamente, Róger Najar coordinaba la formación del gabinete ministerial del próximo gobierno. Las discusiones sobre el perfil del gabinete se enfocaban en cómo reaccionaría ante la composición del nuevo Congreso, dependiendo de quién presidiera la Mesa Directiva. Un gabinete más político se proyectaba si la oposición se consolidaba en el Congreso, mientras que un perfil más técnico se consideraba en caso de una presidencia de la Mesa afín a Perú Libre (El Comercio, 17 de julio de 2021). Siguiendo esto, aunque aún no se confirmaban los nombres de los futuros ministros, se consideraba al excongresista Hernando Cevallos para liderar el Ministerio de Salud. También se mencionaba a Pedro Francke para el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque su nominación no estaba asegurada, y otros nombres también se discutían para el cargo (El Comercio, 18 de julio de 2021).

Mientras tanto, el plazo para que Fuerza Popular presentara recursos de nulidad contra las actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales había vencido el 16 de julio. Con solo diez recursos interpuestos, el Jurado Nacional de Elecciones evaluaba admitir o rechazar estos pedidos. De no prosperar, la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo podría realizarse en los próximos días, despejando el camino para la transición gubernamental (El Comercio, 17 y 18 de julio de 2021).

Finalmente, el sábado 17 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre un intento de Vladimir Cerrón de retirar más de un millón de soles de una cuenta bancaria, dinero que fue congelado debido a la sentencia de corrupción que pesa sobre el exgobernador de Junín. La UIF indicó que se comunicó a la fiscalía para que se solicitara una medida de incautación del dinero, mientras el Ministerio Público continúa investigando el origen de dichos fondos (El Comercio, 18 de julio de 2021).

Finalmente, el 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Pedro Castillo como presidente electo del Perú, cuarenta y tres días después de la segunda vuelta electoral. La ceremonia de proclamación se llevó a cabo de manera virtual, presidida por Jorge Salas Arenas, titular del JNE, y marcó el final del prolongado proceso electoral. Durante la sesión solemne, se declararon improcedentes las últimas cinco apelaciones presentadas por Fuerza

Popular, dejando claro que los resultados de las elecciones eran definitivos. Según los datos oficiales, Pedro Castillo obtuvo 8,836,380 votos, equivalentes al 50.126% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó 8,792,117 votos, es decir, el 49.874%, con una diferencia de 44,263 votos a favor de Castillo (El Comercio, 20 de julio de 2021). La llamada "tercera vuelta" había terminado a menos de nueve días del 28 de julio.

Horas después de la proclamación, Pedro Castillo se dirigió a sus simpatizantes desde el balcón del local de Perú Libre en el Centro de Lima. En su discurso, hizo un llamado a la unidad y exhortó a Keiko Fujimori a no poner más obstáculos en el camino hacia la recuperación del país. Además, invitó a los técnicos y políticos de otras agrupaciones a sumarse a su gestión, siempre y cuando lo hicieran con lealtad y transparencia. También reafirmó su intención de respetar la actual Constitución "hasta que el pueblo lo decida" y aseguró que su gobierno buscará el desarrollo del país garantizando la estabilidad jurídica y económica (El Comercio, 20 de julio de 2021).

Ese mismo día, Keiko Fujimori anunció que reconocería los resultados de las elecciones, aunque reiteró sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral. Durante una conferencia de prensa en Surco, Fujimori indicó que cumpliría con los compromisos asumidos con los peruanos y con la comunidad internacional, afirmando que respetaría la ley y la Constitución. Sin embargo, calificó la proclamación de Castillo como "ilegítima" y señaló que el proceso estuvo lleno de irregularidades. También mencionó que seguiría trabajando desde su bancada en el Congreso para "restablecer la legitimidad en el país" (El Comercio, 20 de julio de 2021).

El presidente saliente, Francisco Sagasti, se pronunció también sobre el resultado de las elecciones, afirmando que el proceso era claro y legítimo para aquellos que analizaban los hechos de manera objetiva. Sagasti expresó que siempre existiría un pequeño grupo de personas que cuestionaría la realidad, pero que eso no cambiaba la validez del proceso electoral. Asimismo, hizo un llamado a la calma y al respeto por los resultados proclamados (El Comercio, 20 de julio de 2021).

Ahora bien, durante este mes continuaron los intentos desde Fuerza Popular y sus aliados de deslegitimar el proceso electoral y obstaculizar la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo. Esto se evidenció cuando una delegación que incluía a los congresistas electos Hernando Guerra García y Jorge Montoya viajó a Washington D.C. para solicitar a la OEA una auditoría de los comicios, buscando internacionalizar sus acusaciones de fraude electoral. Asimismo, con el mismo objetivo de dilatar el proceso, el equipo legal de FP presentó más de 240 apelaciones ante el JNE, y a pesar de que el organismo rechazó todas las apelaciones, el partido continuó presentando recursos contra las actas de proclamación emitidas por los JEE.

Lourdes Flores incluso llegó a mencionar que se evaluaba presentar recursos de amparo para impedir la proclamación de Castillo. Si bien estos hechos podrían interpretarse como señal de la desesperación de este sector de la derecha peruana, a su vez refleja su resistencia a aceptar la victoria de un candidato que veían como una amenaza directa para el modelo económico y político vigente.

Adicionalmente, desde la derecha peruana se desplegaron manifestaciones y campañas mediáticas para aumentar la presión política y social frente a una posible proclamación de Castillo como presidente electo. Esto se vería más explícitamente durante una de estas movilizaciones en Lima, en la cual la propia Keiko Fujimori reiteró que no aceptaría una proclamación que "consumara el fraude en mesa" y acusó al presidente Francisco Sagasti de tomar partido por el candidato de Perú Libre al negarse a solicitar una auditoría internacional. Incluso aunque anunció que reconocería los resultados de las elecciones, Fujimori mantuvo su postura respecto a supuestas irregularidades durante los comicios, calificando la proclamación de Castillo como ilegítima. Esta actitud del fujimorismo y sus aliados marcaría la dinámica de la relación entre la derecha peruana, particularmente desde sus bancadas en el Congreso, y el Ejecutivo por el resto del gobierno de Castillo. A partir de todo esto se podría afirmar que la construcción de un enemigo existencial en torno a Pedro Castillo, presentándolo no solo como una amenaza para la democracia y el modelo económico, sino como una amenaza directa para el país, le habría permitido a este sector justificar sus continuos esfuerzos por deslegitimar la elección y obstaculizar la transición, priorizando sus objetivos políticos sobre el respeto a las reglas de juego democráticas.

## Conclusiones

Una primera conclusión a partir de todo este proceso de investigación es que la percepción de una amenaza existencial fue lo que realmente unificó a la derecha peruana durante las Elecciones Generales de 2021. La candidatura de Pedro Castillo, con sus propuestas de cambio constitucional y un modelo económico de perfil más estatista, fue vista como un peligro inminente para el orden político y económico vigente. En ese sentido, aquí se argumenta que el temor a cambios drásticos bajo un eventual gobierno de Castillo impulsó una radicalización en las posiciones de la derecha, la cual se sintió obligada a adoptar actitudes extremas e incluso antidemocráticas no solo por el riesgo que representaba para la estabilidad lograda con la Constitución de 1993, sino también para su propia supervivencia política. El propio discurso del candidato de Perú Libre durante la campaña, abiertamente hostil con la prensa, desconfiado hacia las élites económicas y promotor de una nueva Constitución, solo reforzó dicha percepción. Esto llevó a que diversos sectores de la derecha pusieran temporalmente sus fricciones de lado y se articularan alrededor de la campaña de Keiko Fujimori, justificando su respaldo como un esfuerzo necesario para contener lo que consideraban un escenario catastrófico para el país.

En relación a esto, durante la entrevista que se tuvo con el congresista José Cueto, en ese momento parte de Renovación Popular, se pudo saber que este consideraba a esta coyuntura como parte de una “batalla cultural” contra la “narrativa progresista e izquierdista” que buscaba, según él, socavar la historia, la educación y la cultura del país. Para el almirante retirado, la amenaza no provenía únicamente de la izquierda peruana, sino de un movimiento internacional que impulsa una agenda contraria a los valores y principios de la derecha. Por su parte, José Williams, congresista de Avanza País, enfatizó en la entrevista que se tuvo con él la importancia de la libertad individual como un valor fundamental que, desde su perspectiva, se vio amenazado por las propuestas de Pedro Castillo. Para ambos congresistas, la candidatura de Castillo no solo significaba un cambio de rumbo político, sino una amenaza directa al modelo de desarrollo basado en un Estado limitado y la libertad individual que habría permitido la recuperación económica del país y su notable crecimiento en la anterior década. Así, esta percepción de una amenaza ideológica profunda refuerza la idea de la tesis de que la derecha se unió para defender el *statu quo* ante lo que consideraba un ataque a sus valores fundamentales.

A pesar de las acusaciones de haber sido los principales culpables de la crisis política que vivía el país debido a su obstruccionismo durante el quinquenio anterior, así como las acusaciones fiscales que rodeaban a su lideresa y otros miembros, la mencionada narrativa anticomunista permitió ocultar las fracturas internas dentro de la derecha peruana y cerrar filas ante la amenaza que representaban Castillo y Perú

Libre, incluso a costa de vulnerar principios democráticos. El señalado apoyo de Mario Vargas Llosa a la candidatura de Fujimori, a pesar de que previamente había sido un férreo crítico del fujimorismo y en anteriores elecciones había apoyado a candidatos rivales de Fujimori, así como de figuras como Lourdes Flores Nano, quien había sido a su vez férrea opositora al gobierno de su padre, es expresión de este fenómeno de unidad ante un enemigo común.

Asimismo, esta narrativa "anticomunista" alcanzó su máxima expresión durante la campaña de segunda vuelta y la llamada "tercera vuelta", presentando la elección como una contienda decisiva por el futuro del país. Se construyó así una imagen polarizada que mostraba la elección como un juego de suma cero, donde la victoria del oponente implicaría la destrucción del Perú. Así, la campaña fujimorista giraba en torno a una identidad negativa, que en este caso concreto era la oposición al comunismo. Para ello, la estrategia de Fuerza Popular y sus aliados se basó en un uso frecuente del "terruqueo", vinculando a Castillo y a sus seguidores con el terrorismo, a la vez que se organizaron marchas y colocaron paneles publicitarios con mensajes que advertían sobre los peligros de una posible victoria de Castillo, presentándolo como una amenaza para la democracia y la libertad en el país. Además, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la difusión de esta narrativa, transmitiendo información que desacreditaba a Castillo, en ocasiones recurriendo a noticias falsas. Todo ello buscaba reforzar la percepción de una inminente amenaza comunista para el país.

Una segunda conclusión es que la construcción de la candidatura de Castillo como una amenaza existencial por parte del fujimorismo y sus aliados legitimó el uso de un discurso más agresivo en este sector de la derecha peruana. Esta postura se evidenció en ataques más directos a la izquierda, a sus seguidores y en la utilización de estrategias que apelaban al miedo del electorado. De este modo, la elección fue presentada como una batalla por la supervivencia del Perú, donde la eventual victoria de Castillo, según esta narrativa, equivaldría a la imposición de un régimen comunista al estilo de Cuba y Venezuela, la destrucción de la economía y el retorno del terrorismo. Este discurso adquirió mayor intensidad tras la segunda vuelta, cuando las encuestas y los resultados preliminares mostraban una ventaja para Castillo. Así, a pesar de no contar con evidencia sólida, Keiko Fujimori y sus aliados continuaron sembrando dudas sobre la transparencia del proceso electoral, cuestionando la labor de la ONPE y del JNE, a la vez que presentaron más de 800 recursos de nulidad, convocaron movilizaciones para exigir la revisión de actas, solicitaron la intervención de organismos internacionales y, en algunos casos, insinuaron la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervinieran para evitar la proclamación de Castillo como presidente electo.

Sobre esto, el congresista José Cueto, de Renovación Popular, mantiene su posición de una “batalla cultural” contra una “narrativa progresista internacional”, y esta visión de una amenaza existencial no se limita al ámbito político o económico, sino que abarca también aspectos sociales y culturales, lo cual explica su adopción de un discurso más agresivo y la búsqueda de inspiración en líderes de derecha populista radical como Vox en España, Jair Bolsonaro en Brasil o José Antonio Kast en Chile. En el caso del congresista José Williams, este describe su posición como “liberal, no conservador ni tradicional”, y si bien reconoce la polarización en el Congreso, no la atribuye a una radicalización generalizada de la derecha, sino a la dinámica de confrontación entre bancadas con distintas visiones ideológicas. Sin embargo, la congresista Patricia Chirinos sostiene que si bien la crisis política no modificó sus posiciones, la llegada de Pedro Castillo a la presidencia generó que tuvieran que adoptar “posiciones firmes” frente a lo que consideraba una “amenaza comunista”.

Siguiendo esto, personajes como Lourdes Flores Nano, Rafael López Aliaga y la propia Fujimori, así como diversos medios de comunicación, contribuyeron a difundir esta narrativa, y con ello se buscaba socavar la confianza en el sistema electoral y generar un clima de inestabilidad política con el fin de evitar que Castillo asuma la presidencia o, al menos, dilatar lo más posible su proclamación. Este tipo de discurso, centrado en la defensa del orden establecido y la construcción de un enemigo interno, es consistente con la tendencia de las nuevas derechas a construir enemigos existenciales para justificar este tipo de acciones. Así, al presentar la elección como una batalla entre el bien y el mal, donde la victoria del oponente significaría la destrucción del país, esta parte de la derecha peruana buscó justificar sus acciones y movilizar el apoyo de sectores que priorizaban la estabilidad y el orden por encima del respeto a los resultados del proceso electoral. Si bien las acciones legales y las protestas se mantuvieron formalmente dentro del marco normativo, la insistencia en desconocer la voluntad popular y en cuestionar el proceso generó un clima de polarización y tensión que puso en riesgo la estabilidad democrática del país.

Una tercera conclusión es que la presencia y el éxito global de líderes de derecha populista radical a nivel internacional y regional, junto con el auge del conservadurismo, influyeron en el discurso y las estrategias de la derecha peruana durante las Elecciones Generales de 2021. Así, figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, con sus posturas nacionalistas, autoritarias y populistas, se convirtieron en referentes para ciertos sectores de la derecha local. Y es que como se ha analizado en este trabajo, el contexto peruano durante el periodo de estudio, marcado por la pandemia del COVID-19, la crisis económica, la debilidad del sistema de partidos, la fragmentación de la oferta electoral y la polarización

política, habría facilitado que estos actores adoptaran discursos más conservadores y antipluralistas de forma similar a sus contrapartes en otros países del mundo y la región. En ese sentido, emergieron figuras como Rafael López Aliaga, el cual, inspirado en líderes populistas globales, buscó conectar con un electorado desilusionado y desconfiado de las élites a través de un discurso mucho más antiredistributivo, conservador y menos respetuoso de las normas democráticas. Al mismo tiempo, sectores de la derecha tradicional, como el fujimorismo, endurecían su defensa del modelo económico y de la Constitución de 1993 frente a las propuestas de cambio de la izquierda.

Siguiendo esta idea, la presente investigación mostró que la referida crisis política, sumada a la ya existente crisis institucional y desconfianza ciudadana, facilitó la aparición de líderes de derecha que replicaron estrategias similares a las de Trump y Bolsonaro, adoptando un discurso más antiredistributivo, conservador y menos respetuoso de las normas democráticas. Asimismo, el impacto de la pandemia y los recurrentes escándalos de corrupción (Ej. Vacunagate) crearon un terreno apropiado para que estas estrategias tuvieran mayor éxito en canalizar el malestar social. Así, estos acontecimientos en su conjunto habrían incentivado la incorporación de estos discursos y prácticas, anclados en el miedo y la desconfianza hacia el cambio, en el repertorio de la derecha peruana. Como se señaló en la reconstrucción de los hechos, López Aliaga es el ejemplo más claro de este fenómeno, al combinar un discurso ultraconservador, elementos religiosos y una retórica incendiaria con ataques a la prensa, las élites culturales y los “enemigos externos”. Es decir, este candidato buscó reproducir el éxito de la derecha populista radical internacional, ajustando sus propuestas a la realidad peruana e intentando captar el voto del electorado más desencantado.

Finalmente, la adopción de estas estrategias por parte de la derecha peruana puede explicarse, en parte, por la difusión transnacional de ideas y la búsqueda de soluciones a la crisis política y social desde una perspectiva conservadora. Esta circulación de ideas quedó de manifiesto en la posterior participación de políticos peruanos en foros internacionales de derecha, como el Foro Madrid, y en la adopción de un discurso anticomunista y de “batalla cultural” que justificaba la defensa férrea del status quo ante las propuestas de cambio. En un contexto donde se percibía la crisis del modelo neoliberal y se consideraba que la izquierda encarnaba una amenaza existencial, esta globalización de referentes y discursos políticos legitimó la adopción de respuestas autoritarias y conservadoras. Esta emulación de estrategias populistas radicales, que incluían la deslegitimación de adversarios y la presentación de los procesos electorales como una lucha entre el bien y el mal, intensificó la polarización

y la incertidumbre, reforzando la tendencia hacia discursos más duros y situando al caso peruano como parte de una tendencia global más amplia.



## Referencias bibliográficas

- Barrenechea, R., Encinas, D. (2022). Perú 2021: Democracia Por Defecto. *Revista de Ciencia Política*, 42(2), 407–438.
- Bobbio, N. (1996). *Left and Right: The Significance of a Political Distinction*. University of Chicago Press.
- Coronel, O. (2024). *La fragmentación de los odios: la torre de Babel de las identidades políticas (negativas) en el Perú*. En R. Barrenechea y A. Vergara (Eds.), *Democracia asaltada. El colapso de la política peruana (y una advertencia para América Latina)* (1.ª ed.).
- Dagnino, E., Olvera, R. A. J., & Panfichi, A. (2006). La disputa por la construcción democrática en América Latina. México: FCE.
- Dargent, E., & Muñoz, P. (2016). Peru: a close win for continuity. *Journal of Democracy*, 27(4), 145-158.
- Dargent, E., & Rousseau, S. (2021). Perú 2020: ¿El quiebre de la continuidad? *Revista de ciencia política* (Santiago).
- Dias, T., von Bülow, M., & Gobbi, D. (2021). Populist framing mechanisms and the rise of right-wing activism in Brazil. *Latin American Politics and Society*, 63(3), 69–92.
- Freidenberg, F. (2011). Los nuevos liderazgos populistas y la democracia en América Latina. *LASA Forum*, 42(3), 9–11.
- Gil Piedra, R. (2022). "Viva la vida, la familia, la libertad y la patria": anotaciones sobre la derecha política y el movimiento conservador en el Perú en clave comparada. Instituto de Estudios Peruanos.
- Kahhat, F. (2024). *Contra la Amenaza Fantasma: La derecha radical Latinoamericana y la reinención de un enemigo común*. Crítica.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *How democracies die*. Crown.
- Luna, J. P., & Rovira Kaltwasser, C. (2014). The Right in Contemporary Latin America: A Framework for Analysis. En J. P. Luna & C. Rovira Kaltwasser (Eds.), *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mayka, L., & Smith, A. E. (2021). The Grassroots Right in Latin America: Patterns, Causes, and Consequences. *Latin American Politics & Society*, 63(3), 1–20.
- Meléndez, C. (2019). La derecha que se bifurca. Las vertientes populista-conservadora y tecnocrática-liberal en Perú post-2000. *Colombia Internacional*, (99), 3-27.
- Mudde, C. (2007). *Populist radical right parties in Europe*. Cambridge University Press.
- Mudde, Cas. (2013). Three Decades of Populist Radical Right Parties in Western Europe: So What?. *European Journal of Political Research*.
- Mendoza, M. (2022). La utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana de 2021. *Universitas*, 36, 197–219.
- Mudde, C. (2020). *The far right today*. Polity Press.

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press.

Paredes, C. (2011). Entre la economía y la política: Los determinantes del voto en el Perú. Un análisis de las elecciones de 2011. *Cuadernos de Investigación*, (12), Universidad de San Martín de Porres, Instituto del Perú.

Pajuelo Teves, R. (2021). Introducción: un rompecabezas (electoral) para armar. En R. Asensio (Ed.), *El profe. Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación*. Lima: IEP

Pajuelo Teves, R. (2021). Nuevos demonios y viejos redentores. Una elección en tres vueltas. En R. Asensio (Ed.), *El profe. Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación*. Lima: IEP.

Retamozo, M., & Morris, M. B. (2014). *Elogio del populismo (en ciertas circunstancias): Notas sobre el kirchnerismo en Argentina*. Pasajes, 46, 16–27.

Roman Carrillo, A. (2022). La derecha populista radical peruana: El Caso de la Campaña electoral de Rafael López Aliaga en redes sociales durante las elecciones 2021. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rousseau, S. (2022). Populismo y Política Antigénero en Perú: De La Sociedad Civil Al Escenario electoral. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, (113), 1–18. <https://doi.org/10.32992/erlacs.10841>

Schmitter, P. (2009). Veinticinco años, Quince conclusiones. *Journal of Democracy En Español*, 117–130.

Sosa-Villagarcía, P. (2022). Conservadurismo y radicalización en Lima Metropolitana durante las elecciones de 2021. En *Elecciones 2021. Pandemia, crisis y representación* (pp. 238–266), Fondo Editorial PUCP.

Stefanoni, P. (2021). *¿La rebeldía se volvió de derecha?*. Siglo Veintiuno Editores.

V-Dem Institute. (2021). *Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021*. V-Dem. <https://www.v-dem.net/files/25/DR%202021.pdf>

V-Dem Institute. (2022). *Autocratization Changing Nature?: Democracy Report 2022*. V-Dem.

[https://v-dem.net/media/publications/dr\\_2022.pdf](https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf)

Vergara, A., & Encinas, D. (2019). From a Partisan Right to the Conservative Archipelago: Political Violence and the Transformation of the Right-Wing Spectrum in Contemporary Peru. En H. D. Soifer & A. Vergara (Eds.), *Politics after violence: Legacies of the shining path conflict in Peru* (pp. 226-249). University of Texas Press.

Weyland, K. (2001). Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics. *Comparative Politics*, 34(1), 1–22.

## Anexos

## Anexo 1: Entrevista a José Cueto

Pregunta 1: "Primero, usted es parte de la bancada de Renovación Popular y tiene una amplia trayectoria, tanto a nivel político como militar. Quisiera preguntarle, primero, ¿cómo definiría usted la evolución ideológica de Renovación Popular, justamente, hasta el presente? Tanto desde las elecciones del 2021, en las que se presentó al ahora alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hasta ahora. ¿Y qué cree que diferencia a Renovación Popular de otros partidos de derecha en Perú?"

Cueto: "Ya, mira. Renovación Popular ha sido lo que antiguamente se conocía como Solidaridad Nacional, partido creado por Luis Castañeda Lossio, del cual mucha gente ha sido también integrante. Es así, ¿no? Ya, claro. Este... cuando finalmente Renovación dio a luz, digamos, a su partido o tal, que fue a finales del año 2020 para poder postular en el 2021, planteó un proceso de transición, pasando de Solidaridad a Renovación con nueva gente. Ahí se trazaron los objetivos, los siguientes del partido. El partido de Renovación Popular es un partido, primero que nada, efectivamente, y esta es mi opinión, porque muchos creen que no, pero bueno, somos de derecha. Somos un partido pro familia, lo que nos diferencia de la mayoría de los otros partidos. Somos un partido pro vida, a pesar de que algunos de nosotros consideramos que deberíamos salir de la CIDH para establecer la pena de muerte a los violadores de niños y a los terroristas, básicamente. Y somos un partido que apuesta por la libertad, porque no hay democracia si no tienes libertad. Todas las libertades: de expresión, de opinión, de tránsito, todas las libertades. El ser humano, por naturaleza, debe ser un ser libre. Entonces, esos son los tres pilares principales del partido de Renovación. Y está orientado, efectivamente, hacia la derecha, centro-derecha. No es que apuntemos a ambas, nosotros somos de derecha, centro-derecha, simplemente por un tema. No estamos en contra de una doctrina como el socialcristianismo, porque la mayoría de nosotros somos gente creyente. Creemos en el ser humano. El tema religioso lo tenemos, pero tratamos de no tocarlo, porque la izquierda se agarra mucho de eso, sobre todo sobre Dios, la religión, la religión nuestra. No es que usemos la religión para eso. Tenemos muchos de esos objetivos o de esas bases del socialcristianismo orientadas a la dignidad humana. Eso es lo que queremos."

Pregunta 2: "Una segunda pregunta está relacionada con mi primera hipótesis, que es justamente lo que hemos vivido un poco desde 2016, lo que se le llama la crisis política peruana. Ya que usted ha vivido y experimentado bastante de eso desde la política, ¿cuál cree que ha sido el impacto de la crisis política en el Perú sobre la agenda y el discurso de Renovación Popular actualmente, tanto del partido como de

la bancada? ¿Y cómo reaccionaron a los eventos políticos más importantes desde que llegaron al Congreso y desde que llegaron a la alcaldía de Lima, por ejemplo?"

Cueto: "Ya. Por muchísimos años, los mal llamados partidos de derecha no han tenido una posición clara en estos pilares que yo te he mencionado. Hemos, y todavía estamos, en una lucha, en una batalla cultural contra toda esa narrativa generada por los progresistas internacionales, que no solo viene desde 2016, sino desde mucho antes, hace más de 20 o 30 años más o menos, generando una narrativa para cambiar la historia, la educación y la cultura en el país. Esos son justamente los pilares que la progresía trata de infiltrar para poder lograr un cambio, no solamente en la parte histórica, sino también, básicamente, en la parte ideológica. Esto viene desde muchos años atrás, y acá te voy a hablar de forma personal. Cuando estaba retirado hacia 2014, veía cómo se iban desarrollando estas cosas y cómo, por mi formación militar, muchos acontecimientos eran trastocados por esta progresía internacional que estaba metida en la política. Es allí donde yo tomé la decisión, un poco más adelante después, de involucrarme en la política para tratar de cambiar esto. Opté por un partido que tenía justamente esos pilares: la defensa de la vida, profamilia, orientado a la derecha para tratar de recuperar todo eso, de lo cual, en parte, hemos sido culpables. Dejamos que esa narrativa, este socialismo, esta progresía internacional haya entrado en nuestras sociedades y, gracias a Dios, estamos tratando de cambiarlo. Ese es el fondo por el cual nosotros hemos entrado en la política."

Pregunta 3: "Justamente en relación a ello, digamos, un poco más en el ámbito internacional, ya que frente a lo que usted ha llamado la progresía internacional, estos movimientos de izquierda que se han venido desarrollando desde los 2000, sobre todo. También hay una reacción desde la derecha en varios países para poder hacerle frente. En ese sentido, ¿usted cree que el éxito de liderazgos de derecha en otros países del mundo, como en Estados Unidos dentro del Partido Republicano, en Europa, por ejemplo, con Vox y Santiago Abascal en España, o en América Latina con Jair Bolsonaro en Brasil o con un candidato como José Antonio Kast en Chile, e incluso alguien no tan ligado ideológicamente como Javier Milei en Argentina, ha tenido un efecto en su partido y/o en su bancada de Renovación Popular? ¿Qué estrategias han adoptado de alguna manera de ellos?"

Cueto: "Mira, más que en Renovación Popular, yo te voy a decir que lo que sucede es que los partidos de derecha, a diferencia de los que has mencionado en Latinoamérica o a nivel internacional, donde hay una figura que sobresale y puede amalgamar al resto, acá no tenemos eso. En los partidos de derecha en Perú normalmente sufrimos de un exceso de caudillismo. Para mí, lo ideal sería que todos los que nos consideramos de derecha nos unamos en un gran bloque, y se decida quién será la

persona que lidere esto para poder enfrentar lo que se nos viene. Pero si seguimos teniendo, como ahora, más de 20 partidos o movimientos pequeños, y algunos dicen que son de derecha o de centro, aunque la mayoría está en el centro, eso a veces es una indefinición. Porque cuando te pones en el centro, no eres ni de derecha ni de izquierda, entonces no eres nada. Yo tengo un montón de ideas que no necesariamente son de derecha, porque no todo lo de izquierda es malo. Tengo muchos amigos de izquierda con los que converso, y me parecen espectaculares sus ideas, y son rescatables, porque están dirigidas a lo grande respetando principios y teniendo algo que no todos tienen: lealtad. Y no hablo de lealtad al partido, hablo de lealtad a los principios, que no puede ser que cuando tú digas A, venga el otro y te diga 'vamos a votar B'. No somos como otros, que todos votan verde o rojo. Nosotros tratamos de hacer las cosas por conciencia y por principios. Uno en la política, creo yo, tiene que ser coherente. Recorriendo los temas de la derecha, te digo que estamos muy atomizados. Lo que siempre ha pasado en la izquierda también pasa en la derecha. El gran reto es amalgamar a las fuerzas de derecha, porque eso es lo que se necesita."

Pregunta 4: "Esta es la penúltima pregunta, relacionada justamente con lo que se ha llamado la tesis de partidos en el Perú, ¿no? En ese sentido, ¿en qué medida considera usted que la existencia de partidos 'cascarón', o lo que algunos en la academia llaman coaliciones independientes, ha influido en la evolución en términos ideológicos, discursivos o de estrategia de Renovación Popular? ¿Ha influido en cómo se posicionan frente a las demandas de sus votantes?"

Cueto: "Mira, sí. Cuando estuvimos inmersos en lograr la inscripción del partido como tal, vimos varias posibilidades. La gente que ha manejado esto, como Rafael o el doctor Pacheco, efectivamente, han considerado muchos intentos tratando de aprovechar esos partidos 'cascarón' que ya tenían inclusive la inscripción, y a veces pensamos que podíamos entrar ahí. Creo yo que, para bien, no hemos caído en eso. Si tienes tus principios, si tienes tus ideales y una política clara de lo que quieres, no deberían existir estos partidos 'cascarón'. Creo que le han hecho mucho daño al país y le siguen haciendo daño, porque esta atomización de los llamados partidos políticos solo genera distorsiones, separaciones, peleas por cupos de poder. Siempre están ahí los arreglos que son cortoplacistas, cuando lo que el Perú necesita es una visión a futuro, una opción para los próximos 20 o 30 años. No deben estar amarrados a grupitos que quieren una cuota de poder, y para eso usan estos 'cascarones' para lograrlo. Yo no estoy de acuerdo, y creo que, efectivamente, han hecho mucho daño al país."

Pregunta 5: "Y como última pregunta, esta está un poco más relacionada con una evaluación personal. Usted, que ha tenido tanta experiencia dentro del entorno político, incluso antes de entrar a Renovación Popular, y que ha visto cómo se han movido muchos de los actores de la derecha peruana, ¿cuál considera que es la autopercepción de los miembros del partido, así como de la bancada, acerca de su ideología y su posición en el espectro político? ¿Y de alguna manera, en su opinión personal, considera que esta autopercepción coincide con la realidad en la mayoría de los casos?"

Cueto: "Mira, tratamos de que lo que nosotros mismos percibimos o autopercebimos se traduzca en nuestras opiniones y, por supuesto, en nuestro trabajo en el campo político. Muchas veces eso no es, entre comillas, comprendido, ni siquiera por nuestros votantes, porque, repito, tratamos de mantener ciertos principios que son los que nos rigen a nosotros como bancada. Es muy difícil. Cometemos muchos errores, seguramente, porque la mayoría de nosotros, creo que todos, somos nuevos en política. Sí, tenemos un par de años en política, pero hemos pasado de estar en la sección de crítica a la sección de acción. Es muy fácil estar en el lado en el que está la mayoría, que critica. Entonces, cuando les dices que pasen a la acción, que se metan en política, que actúen, que sean partícipes y sean parte de la solución al problema, porque todo el mundo puede quejarse, ahí es donde empieza la lucha permanente. Ahora, cuando estás en esa lucha, ¿cómo te percibes? Bueno, yo intento hacer lo que puedo. Aquí la libertad es amplia, y eso es lo bueno de estar en un partido donde tienes libertad de opinión, porque a veces no nos ponemos de acuerdo, pero cada uno actúa a su manera. Lo que sí tenemos en común son estos principios rectores que nos guían."

Pregunta 6: "Y como una última pregunta muy breve. ¿Qué desafíos ve para Renovación Popular en los próximos 5 o 6 años, hasta las elecciones de 2026, por ejemplo? ¿Y cómo estos desafíos y oportunidades podrían llevar a Renovación Popular a modificar su discurso o estrategia?"

Cueto: "Desafíos hay muchos. El principal es tratar de encaminar al país y alejarlo de esta marea roja que está tratando de copar toda Sudamérica. Ese es el principal desafío. Entre las principales oportunidades está el lograr captar la mayor cantidad y calidad de gente que pueda unirse a nosotros, que se defina como una persona de derecha, que tenga los principios claros y que quiera apoyarnos. Si logras, por ejemplo, que Renovación gane las elecciones, puedes manejar un país, pero no basta con una sola persona. Necesitas miles de personas que tengan esas ideas claras para poder ayudar a cambiar la estructura del Estado, y eso no es fácil. No se hace con una persona, se hace con un grupo, con un equipo."

## Anexo 2: Entrevista a José Williams

Pregunta 1: "¿Cómo definiría usted la evolución ideológica y programática de Avanza País desde su fundación, o más bien desde que llegaron al Congreso, hasta el presente? ¿Y qué cree que diferencia a Avanza País de otros partidos de derecha en el Perú?"

Williams: "Avanza País es un partido de derecha, centro-derecha, que tiene como conceptos o líneas ideológicas todo aquello que esté relacionado con fortalecer el sistema democrático nacional, así como promover la economía social de mercado, la descentralización del país, y trabajar y luchar contra el terrorismo, proteger a la familia, niños y ancianos. Ese es el concepto general. Somos un partido liberal que cree en la economía social de mercado y en la separación de poderes. Esa es, en esencia, la parte que define lo que mencionabas. La diferencia que podemos tener con otros partidos de derecha es que no somos un partido de extrema derecha; somos de derecha, pero con conceptos orientados hacia lo que ya te mencioné."

Pregunta 2: "Re-pregunta relacionada a ello, muy breve. ¿Cree que la ideología actual de la bancada, o el discurso actual del partido, refleja el núcleo de las creencias originales? ¿O ha habido una adaptación estratégica a las circunstancias políticas actuales? Por ejemplo, en sus posiciones respecto a ciertos temas económicos o sociales, como el modelo económico, o temas como la comunidad LGBT, los derechos laborales, el control de los sindicatos, etc."

Williams: "Nosotros creo que mantenemos esos principios que te mencioné hace un momento. Variaciones en esos conceptos básicos no las hemos tenido. Pero obviamente las circunstancias hacen que nuestra teoría evolucione. Por ejemplo, valoramos mucho más la libertad, que es uno de nuestros principios fundamentales, porque consideramos que es algo que está por encima de lo que el Estado pudiera realizar. También creemos en un Estado necesario, no en un Estado grande. No pienso que nos hayamos desviado de nuestras líneas ideológicas, pero sí mejorarlas en función de los eventos que se están presentando."

Pregunta 3: "Pasando a la sección 2, relacionada con mi hipótesis de que la crisis de partidos ha afectado la oferta electoral de varios partidos de derecha en el Perú. Desde su experiencia dentro del partido y la bancada, ¿cree que lo que hemos visto en las últimas décadas, en relación a partidos 'cascarón' o coaliciones independientes, ha influido en la evolución discursiva e ideológica de Avanza País y en cómo se relacionan con las demandas de sus votantes?"

Williams: "Nosotros mantenemos los principios ideológicos que te cité. Hemos evolucionado en razón de las circunstancias que se nos han presentado, pero no nos hemos radicalizado. No nos hemos ido hacia una derecha extrema; somos liberales,

no conservadores ni tradicionales. Y sí, creemos que la economía social de mercado y el capitalismo son teorías que pueden ayudar considerablemente al Perú."

Pregunta 4: "Una pregunta breve relacionada a esto. ¿Considera que la crisis, y la percepción negativa de la ciudadanía respecto al Congreso, ha llevado a Avanza País a adoptar un discurso más conservador? ¿Y si no es así, cuál es su opinión sobre esto?"

Williams: "Nosotros somos liberales, más que conservadores. Pero obviamente, la crisis en la que estamos sumergidos nos hace valorar ciertos conceptos. El liberalismo, como la capacidad de la persona de ser independiente y dueña de sus decisiones, se ha fortalecido más en nosotros. No queremos algo que derive de lo que nos ofrecía Pedro Castillo. También creemos que el Estado debe ser una organización eficiente al servicio de la comunidad, con personas capaces, y no una burocracia lenta, corrupta e ineficiente."

Pregunta 5: "¿Cómo cree que puede cambiar la oferta electoral de Avanza País desde las elecciones del 2021 en adelante? He hablado con algunos de sus compañeros de bancada, como la congresista Chinos, quien mencionó que han reconstruido Avanza País desde la bancada más que desde el partido. ¿Cree que esto refleja una adaptación estratégica o un cambio en la ideología del partido?"

Williams: "El partido tiene los principios que cité antes. Los congresistas estamos dentro de esos conceptos, absolutamente. Lo que hemos hecho es llevar a la práctica esos principios, y creo que de manera eficiente. Esto nos ha identificado más como un partido de derecha liberal, un partido que se preocupa por las instituciones, los pesos y contrapesos, por la familia, y por la economía social de mercado. Todo esto ha servido para que se nos conozca más y para que nos identifiquen mejor. Pero seguimos alineados con los principios originales del partido."

Pregunta 6: "Esta pregunta está relacionada con la crisis política en el Perú, que hemos estado viviendo desde 2016, aproximadamente desde que ganó Pedro Pablo Kuczynski y Fuerza Popular obtuvo mayoría en el Congreso. Muchos consideran, tanto en la academia como entre los ciudadanos, que esto marcó el inicio de una dinámica de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sacudiendo todo el entorno político peruano. En relación a ello, ¿cuál cree que ha sido el impacto de este fenómeno en Avanza País y en cómo actúa su partido y bancada en estos últimos años que han tenido representación en el Congreso?"

Williams: "Sí, en los últimos tres años, ha habido una notoria confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero no creo que sea todo el Ejecutivo, sino más bien entre las bancadas que están en oposición a las políticas del Ejecutivo. En el caso de

Castillo, la bancada de derecha y de centro, como nosotros, no éramos partidarios de su enfoque. Castillo pretendía tomar el control del Estado, hacerlo más grande de lo que debía ser y llevarlo hacia una izquierda más extrema. Además, el Estado se volvió aún más ineficiente debido a la cantidad de ministros que nombró, muchos de los cuales no tenían competencias para sus cargos. También vimos cómo la corrupción se fue extendiendo, especialmente con las personas cercanas a él. Todo esto nos pareció inaceptable.

Desde Avanza País, vimos una confrontación inevitable, porque no podíamos hacer gobernabilidad con un gobierno que tenía esa orientación. Incluso si hubiéramos intentado cooperar, era imposible por las circunstancias. Ahora, con Dina Boluarte, aunque pertenecía al mismo partido, es una persona diferente que no tiene ideas tan radicales, y con ella sí se puede hacer gobernabilidad. No solo por ella misma, sino también porque muchas de las personas en los ministerios y en otras áreas del gobierno ahora no tienen la misma orientación que antes. Es un escenario diferente, lo que facilita la gobernabilidad en comparación con el gobierno de Castillo, donde había una fricción constante."

Pregunta 7: "En relación a esto, ¿ha habido alguna decisión o cambio de enfoque específico que Avanza País, como partido o bancada, haya adoptado debido a esta dinámica? ¿Y cómo ha sido la relación con otros partidos de derecha, como Fuerza Popular o Renovación Popular, dentro del llamado 'bloque democrático'? ¿Ha sido más cooperativa o también ha habido momentos de confrontación?"

Williams: "Sí, nosotros formamos parte de lo que se llama el bloque democrático, que incluye a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso. Estos son partidos de centro y de derecha que tienen pensamientos similares. Nuestra relación con ellos ha sido generalmente buena, aunque en algunos momentos ha sido mejor que en otros. Al inicio, incluso Podemos estaba con nosotros, pero luego se retiraron debido a su relación con el gobierno y otras circunstancias. Aunque compartimos ideas generales, obviamente hay ciertas diferencias entre nosotros, pero en términos generales, la cooperación ha sido positiva dentro del bloque democrático."

Pregunta 8: "Y una pregunta adicional, relacionada con el impacto social, económico y político de la pandemia de COVID-19. Usted, como legislador durante este periodo, ¿cómo considera que la pandemia ha influido en las políticas y el discurso de Avanza País? Se ha dicho que algunos partidos de derecha han impulsado medidas de austeridad, a pesar de que la pandemia dejó a muchas personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál ha sido la postura de Avanza País respecto a estas medidas?"

Williams: "Creo que la pandemia del COVID-19 no cambió la esencia de nuestra teoría o ideología, pero sí hizo que algunos de nuestros conceptos emergieran con mayor intensidad. Uno de ellos es el concepto de libertad, el derecho de la persona a ser independiente, a tomar sus propias decisiones y desarrollarse en un entorno favorable con un Estado que lo proteja. Durante la pandemia, muchas de las políticas obligaron a las personas a quedarse encerradas, lo que limitó esa libertad. Eso es algo que nos hizo reflexionar sobre la importancia de que el ciudadano pueda ejercer su libertad plenamente, sin restricciones.

Además, como partido liberal, creemos en un Estado necesario, pero no en un Estado grande. La pandemia también puso de manifiesto la importancia de la economía social de mercado. Las restricciones afectaron gravemente a la economía, y fue evidente que cuando los ciudadanos no pueden desarrollar sus iniciativas, la economía sufre. Las exportaciones e importaciones se paralizaron, y esto nos hizo comprender mejor que la economía debe fluir y que se debe promover la iniciativa privada para el crecimiento del país.

Finalmente, la pandemia también nos mostró la fragilidad de la familia, y la importancia de legislar para protegerla. Vimos cómo muchas familias perdieron a sus seres queridos, y eso nos hizo pensar en cómo el Estado debe garantizar su protección. Y otro punto importante es que el Estado debe ser eficiente, no un Estado grande y burocrático. La pandemia demostró que cuando el Estado no funciona, como ocurrió con la falta de hospitales y medicinas, el país sufre. Por eso, defendemos un Estado de tamaño adecuado, con una burocracia eficiente."

Pregunta 9: "Una cuarta pregunta, que está relacionada con el impacto internacional en la política de Avanza País. El partido es bastante conocido a nivel internacional, por ejemplo, por ser parte del Foro Madrid, y usted ha firmado la Carta de Madrid para frenar el avance de ideologías o movimientos de izquierda extrema en América Latina, como se le llama. En ese sentido, ¿cree que el éxito de líderes y partidos de derecha en América Latina, como Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina o Santiago Abascal en España, ha tenido un efecto en el discurso y las estrategias de Avanza País?"

Williams: "Yo creo que en Latinoamérica, y más específicamente en Sudamérica, la política ha tenido una dinámica pendular. Hace años, tuvimos muchos gobiernos militares, con orientaciones que iban desde la izquierda hasta la derecha. Luego, hubo una época en la que varios gobiernos, como el de Alan García, se inclinaron hacia la derecha. Esto nos llevó a líderes como Bolsonaro. Pero recientemente ha habido una corriente de izquierda que ha dominado la región, desde Chile hasta Venezuela, exceptuando a Paraguay y Uruguay. Sin embargo, también estamos viendo un

cambio. En Perú, hemos dejado atrás un gobierno de izquierda, y en Chile, rechazaron la nueva constitución. Colombia está enfrentando dificultades con Petro, y en general, se ve una tendencia hacia el cambio.

En Europa, los cambios ideológicos son más moderados, pero en Sudamérica, los cambios suelen ser más radicales. Mientras que en Europa hay una izquierda moderada y una derecha que no llega a los extremos, en Sudamérica las ideologías tienden a ser más intensas. Lo vimos con Bolsonaro y Castillo en su momento. Pero también existe un mecanismo en las sociedades para corregir el rumbo cuando es necesario. Creo que esto es lo que está ocurriendo ahora. Para que estas correcciones sean efectivas, debe haber una cultura política sólida en la ciudadanía. Es fundamental que la gente vote por las ideas y no solo por las personas. La educación política es clave para que la población sepa hacia dónde quiere ir."

Pregunta 10: "Una última pregunta relacionada con los desafíos y oportunidades para Avanza País en el contexto político actual. ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos y oportunidades para el partido en los próximos años?"

Williams: "Creo que una gran oportunidad para Avanza País es enfocarse en proyectos a mediano y largo plazo, sin perder de vista lo que se necesita en el corto plazo. Es importante que las políticas que impulsemos tengan una visión de Estado, que trasciendan a los gobiernos y que impliquen cambios profundos y transformaciones en áreas clave como la seguridad, la salud y la educación. No se trata solo de los líderes visibles, sino de los equipos que trabajan detrás de ellos, de las personas que comparten la misma visión y empujan en la misma dirección.

En el Perú, no tenemos una estructura clara que nos guíe hacia adelante, y creo que como sociedad aún no estamos preparados. La informalidad y otros problemas estructurales impiden que podamos avanzar. Por ejemplo, en la educación, es necesario empezar por mejorar los salarios y la formación de los profesores, crear mejores infraestructuras educativas y, sobre todo, promover la conciencia de que se debe enseñar bien. Este es solo un ejemplo de las muchas limitaciones y deficiencias que enfrentamos en varias áreas del Estado.

Es necesario que los planes que implementemos en el corto, mediano y largo plazo sean proyectos de Estado, de mediana y larga duración, que puedan tener un impacto duradero y significativo en el país."

Pregunta 11: "Usted, que ha sido militar y presidente del Congreso, ¿cómo ve el futuro político del país para los próximos años? No tanto desde Avanza País, sino desde su posición personal, con toda su experiencia."

Williams: "Yo creo que el futuro del país debe construirse en base a principios y valores de largo alcance. Necesitamos tener proyectos de Estado que realmente puedan hacer transformaciones, pero no en el sentido de lo que normalmente dicen los políticos, 'voy a cambiar, voy a transformar'. La transformación es mucho más que eso. Es un proyecto bien pensado, con objetivos claros, metas concretas, una visión y un estado final deseado. Se requiere una supervisión completa, conciencia, conocimiento por parte de todos, información a la población y, sobre todo, compromiso. El compromiso de todos los sectores es fundamental para que estas transformaciones se den.

Pregunta 12: "¿Usted cree que el futuro del país se inclinará más hacia la izquierda o hacia la derecha, en función de lo que ha mencionado anteriormente sobre el péndulo político?"

Williams: "Puede haber oscilaciones entre la izquierda y la derecha, pero mientras no se extralimiten, es positivo tener esos cambios de perspectivas. Los pesos y contrapesos que existen entre la izquierda y la derecha son necesarios, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites razonables y no lleguen a los extremos. Ya hemos pasado por extremos antes, y esos extremos son dañinos. Creo que debemos tener pensamientos positivos sobre el futuro; no podemos pensar que todo está perdido o que las cosas no van a mejorar. Sí se pueden hacer transformaciones, pero no con esas palabras vacías que muchos políticos han usado durante años. Transformar es algo mucho más profundo. Se trata de voluntad, deseo, conocimiento, práctica y, sobre todo, de muchas personas comprometidas con un proyecto que tiene un objetivo final claro y concreto."

### Anexo 3: Entrevista a Patricia Chirinos

Pregunta 1: Patricia Chirinos, como congresista por Avanza País, ¿cómo definiría la ideología actual de su partido y bancada, que se describe como conservadurismo liberal, neoliberalismo y reformismo, y cómo se diferencia de otros partidos o bancadas de derecha en el contexto peruano?

Avanza País es un partido de centro-derecha, comprometido con las libertades individuales, el estado democrático de derecho y el libre mercado. Esa es la posición que tenemos como partido y que se comparte en la bancada. Por otro lado, es claro que otros partidos y bancadas comparten también esos ideales, aunque muchas veces no lo digan abiertamente. Avanza País se destaca por decir fuerte y claro lo que defiende.

Repregunta: ¿Cree que esta ideología refleja las creencias fundamentales de los miembros de la bancada de Avanza País o se trata más de una postura estratégica para captar votantes?

Personalmente la ideología que menciono sí refleja lo que creo, mis convicciones. Con respecto a mis colegas de bancada, pues vengo compartiendo trabajo con ellos por prácticamente dos años y medio. Y en este tiempo he podido conocerlos, sé que actúan en base a sus ideales y principios.

Pregunta 2: En el contexto de la crisis política en Perú, ¿cómo cree que la dirección ideológica de Avanza País ha sido afectada, si es que lo ha sido?

Avanza País se ha mantenido en sus ideales. La dirección ideológica y nuestros principios se han mantenido firmes. Además, tenemos como gran norte el trabajar por los intereses y bienestar del pueblo peruano. Eso es lo que ha guiado nuestro accionar, incluso en los peores momentos de la crisis política. Y cualquiera puede corroborarlo con los hechos.

Repregunta: ¿Considera que la crisis ha impulsado a su partido y bancada hacia un discurso más conservador y anti redistributivo? Si es así, ¿por qué cree que esto ha sucedido?

No habría por qué entender de manera conjunta lo “conservador” con lo “anti redistributivo”. Como te he mencionado, Avanza País es un partido de centro-derecha apegado a los principios de la libertad individual, el estado democrático de derecho y el libre mercado. Y en ese sentido entendemos la realidad peruana, las necesidades de la gente y las acciones que el Estado debe tomar para atenderlas, incluso en contextos de crisis.

Pregunta 3: Desde las elecciones de 2021, ¿cómo ha evolucionado la oferta electoral de Avanza País, y cómo refleja esto cualquier cambio en la ideología o discurso del partido y la bancada?

Desde aquellas elecciones, Avanza País como partido ha venido emprendiendo un trabajo de fortalecimiento. No es secreto para nadie que estamos en el Congreso luego de muchos años, y eso implica una gran responsabilidad en términos partidarios. La ideología del partido no ha variado, sino que se ha empezado a fortalecer de la mano con los cuadros y las bases en todo el país.

Repregunta: ¿Cree que este cambio en la oferta electoral es una respuesta estratégica a la crisis de partidos o refleja un cambio genuino en la ideología del partido?

Se habla mucho de “crisis de partidos”, pero a veces poco se entiende de eso. Yo creo que es más acertado hablar de problemas de representación. Y es eso lo que se debe solucionar. Desde el Congreso estamos comprometidos con mejorar los mecanismos de representación. Así se fortalece la democracia.

Pregunta 4: ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis política en Perú sobre la agenda y el discurso de Avanza País, tanto el partido como la bancada?

Asumo que por crisis política te refieres a los sucesos que se iniciaron con Castillo, ya que es el periodo en el que Avanza País tiene bancada parlamentaria. En ese sentido, nos ha correspondido ser bastante frontales. Nuestras ideas son constantes, pero el tono y la fuerza de nuestras palabras, así como el dinamismo de nuestras acciones, tuvieron una especial intensidad.

Repregunta: ¿Puede identificar alguna decisión específica o cambio de enfoque que Avanza País haya adoptado como resultado de la crisis política?

Como te digo, nuestras ideas y principios se han mantenido constantes. Por otro lado, puedes ver todas las acciones que se han emprendido desde los miembros de la bancada con respecto a mecanismos de control político amparados en la Constitución y el Reglamento del Congreso.

Pregunta 5: ¿Cómo considera que la pandemia del COVID-19 ha influenciado en la retórica y las políticas de Avanza País?

La pandemia desnudó las falencias del Estado peruano y de la sociedad en general. Pero también propició una agudización de la crisis sin precedentes. Claramente todo ello ha sido un catalizador que se ha traducido en acciones a la luz de nuestros principios e ideales como partido, y que se han visto desde que juramentamos como parlamentarios.

Repregunta: ¿La pandemia ha sido un catalizador para la adopción de un discurso más conservador y antiredistributivo?

Tal vez para un discurso sobre todo más estatista, por las características que tuvo la emergencia sanitaria y el enorme costo social. Sobre el tema redistributivo, pues no podemos ser ciegos. Es claro que miles de personas necesitaban recursos para afrontar el día a día. Negar ello es negar la realidad. Pero eso es lo que corresponde en un momento crítico, no debería ser una regla y menos una constante. Para el desarrollo no hay mejor opción que la inversión y el empleo.

Pregunta 6: Dada la tendencia de liderazgos de derecha en América Latina, como Jair Bolsonaro y Javier Milei, ¿cree que esto ha tenido un efecto en el discurso político de Avanza País?

Es claro que sí. En un mundo tan globalizado, construir redes e intercambiar ideas con políticos con ideas y principios afines es algo sumamente normal, cotidiano y hasta esperable. Avanza País ha venido desarrollando un perfil cada vez más internacional y lo puedes observar, por ejemplo, en la participación que los miembros de la bancada tenemos con el Foro Madrid.

Repregunta: ¿Este cambio en el panorama político latinoamericano ha motivado al partido y a la bancada a modificar su propio discurso? ¿De qué manera?

Cada congresista tiene un estilo discursivo propio. No podría hablar por los demás. Pero sí puedo decir que el tener contacto internacional se ha convertido en un elemento relevante para nuestro accionar en el Parlamento y de cara a la ciudadanía.

Pregunta 7: ¿Cuál considera que es la autopercepción de los miembros de Avanza País acerca de su ideología y su posición en el espectro político?

Nos consideramos en la centro-derecha, y firmes defensores de los principios ya mencionados. Estoy segura que si le consultas a cualquier otro miembro de la bancada de Avanza País, la respuesta irá en gran medida en ese sentido.

Repregunta: ¿Coincide esta autopercepción con la realidad o responde más a una imagen que se quiere proyectar hacia el exterior?

Corresponde totalmente con la realidad. Y la gente puede dar fe de ello.

Pregunta 8: ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que vislumbra para Avanza País en el contexto político actual de Perú?

Hay mucho por hacer. Estamos atravesando un periodo crítico. Se ha juntado la crisis de seguridad, crisis económica y ahora se viene la crisis climática por el fenómeno de El Niño. Avanza País debe ser un actor vigilante en todas las acciones de gobierno y

salvaguardar nuestra democracia. De manera paralela a ello, debemos trasladar las necesidades y pedidos de la gente, para que sean efectivamente atendidos.

Repregunta: ¿Estos desafíos y oportunidades podrían llevar a Avanza País a modificar aún más su discurso o estrategia política? ¿De qué manera?

Lo que va a suceder es que esos desafíos y oportunidades ayudarán a afianzar el discurso y la estrategia que ya se tiene. Como te digo, nuestros principios y valores son constantes. Pero si hay que alzar la voz y ser más dinámicos en un momento crítico, pues lo hacemos.

